



Centro de Estudios Internacionales

Maestría en Ciencia Política

**Las bases retóricas y organizativas del movimiento nacional-
popular bolivariano en su momento de emergencia.
Venezuela: 1989-1998.**

Tesis dirigida por el Docto Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz

Tesis presentada por Antonio José Hernández Curiel

En ciertos momentos de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma de organización que presentan, con los determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ésta. Cuando tales crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos.

Antonio Gramsci

Índice

<u>Introducción</u>	1
<u>Capítulo I</u> . Populismo: concepto y condiciones de emergencia.....	7
<u>Primera parte</u> . Estilo, estrategia o lógica: hacia un concepto de populismo.....	7
<u>Segunda parte</u> . Crisis y movilización de recursos: las condiciones de emergencia de los populismos.....	32
<u>Capítulo II</u> . Movilización y demandas populares.....	43
<u>Primera parte</u> . La movilización de <i>El caracazo</i>	43
<u>Segunda parte</u> . La proliferación e intensificación de demandas populares (1989-1997).....	58
<u>Tercera parte</u> . La <i>madrugada de las tanquetas</i> : insurrección militar bolivariana en 1992.....	62
<u>Capítulo III</u> . Instancias de articulación de las demandas populares: La Causa Radical y el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200.....	75
<u>Primera parte</u> . Las reformas políticas y su impacto electoral.....	77
<u>Segunda parte</u> . La Causa R: el <i>movimiento de movimientos</i> y el <i>nuevo sindicalismo</i>	88
<u>Tercera parte</u> . El Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 y lo <i>nacional-popular</i>	107
<u>Conclusiones</u>	130
<u>Bibliografía</u>	143

Introducción

El 6 de diciembre de 1998 el teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías era elegido para ocupar el cargo de presidente de la República de Venezuela con el 56.2% de los votos. Fue seguido por Henrique Salas Römer con 39.97%. La elección presidencial estuvo marcada por una fuerte polarización: los dos candidatos obtuvieron el 96.17% del voto. Ambos representaron liderazgos emergentes que no pertenecían a ninguno de los partidos que habían gobernado en Venezuela desde 1958 –el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el democristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).¹ Chávez Frías se presentó como líder del Polo Patriótico –una coalición de pequeños partidos cuyo eje era el Movimiento Quinta República (MVR)- y había dirigido un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992; Salas, exgobernador del Estado de Carabobo, se presentó a las elecciones con el partido Proyecto Venezuela (aunque fue apoyado por AD y COPEI). El candidato vencedor estaba comprometido no sólo con modificar las políticas de gobierno de los partidos anteriores, sino también con llevar a cabo una reestructuración del régimen político mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Las preguntas que han orientado este trabajo han sido las siguientes: 1) ¿Cuáles son los elementos constitutivos -o los componentes que podrían definir- al movimiento político bolivariano en Venezuela en el período 1989-1998?; 2) ¿Por qué y cómo surgió este movimiento político, articulado -en un contexto de fuerte antagonismo- bajo la conducción de un líder –el teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías-, un partido político –el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200), posteriormente MVR- y

¹ Los mejores trabajos de conjunto sobre el régimen político venezolano, desde una perspectiva histórica, son Britto (1989), López Maya (1989) y Dávila (1991; 1995). Una buena compilación de artículos sobre las transformaciones del régimen político a partir de 1998 es Ellner *et al.* (2003).

una propuesta de reestructuración del régimen político (la Asamblea Nacional Constituyente)?

En este sentido, el objetivo general de esta investigación ha sido definir al movimiento bolivariano en Venezuela, articulado en torno a una plataforma político-electoral –el Polo Patriótico- y electoralmente exitoso en 1998, así como al mismo tiempo determinar las condiciones de su emergencia.

Para el estudio del caso, siguiendo el criterio antedicho de las condiciones de emergencia y expansión inicial del movimiento, he hecho la siguiente demarcación cronológica: los límites del estudio coinciden con una fuerte confrontación social en el inicio (*El caracazo* de 1989) y con la decisión del MBR-200 de participar en las elecciones presidenciales de diciembre 1998 con la candidatura de Chávez Frías en el final.

Cabe aclarar que aunque haya utilizado como límite para la demarcación cronológica del caso la decisión de participar en las elecciones presidenciales de 1998, no ha sido objetivo de esta investigación explicar las razones de la victoria electoral. La fecha de corte implica también que tampoco han sido considerados: a) ni el proceso electoral de 1998; b) ni el ejercicio del gobierno una vez constituido; c) ni el posterior proceso constituyente (el carácter originario o derivado de la Asamblea, el marco legal de sus operaciones, las reglas que rigieron la elección, la composición político-ideológica de los miembros de la Asamblea, el contenido de los debates en las sesiones, la duración total, el texto constitucional resultante, los mecanismos de legitimación posterior, entre otros).

El enfoque que he asumido en este trabajo es, por una parte, *posmarxista*² y se basa, principalmente, en la teoría de la constitución de los sujetos populares –el *pueblo*– elaborada por Ernesto Laclau.³ En este sentido, he considerado que la formación del movimiento bolivariano en Venezuela, como sujeto político, siguió una *lógica específicamente populista o nacional-popular*.⁴ Por otra parte, para la explicación del surgimiento del movimiento he utilizado el enfoque de la *movilización de recursos* desarrollado en los trabajos de Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly, por lo que he asumido que los recursos tanto *internos* como *externos* del movimiento permiten explicar su emergencia.

Ambos enfoques –la *lógica populista* y la *movilización de recursos*– me han permitido no sólo aportar respuestas a las preguntas principales, sino también analizar problemas específicos de la emergencia del movimiento bolivariano, a saber: ¿Por qué algunos grupos con pretensiones de articular demandas sociales tuvieron éxito y otros no? ¿Por qué el movimiento bolivariano tuvo un componente militarista determinante? ¿Por qué aparece como característica del movimiento una retórica nacional-popular? ¿Qué lugar ocuparon las organizaciones de base –en un sentido amplio– en la conformación del movimiento? ¿Qué importancia tuvo el liderazgo de Chávez Frías en la articulación de las demandas sociales y cuál fue su papel en la organización del movimiento?

En este trabajo sostengo dos argumentos principales.

² El debate sobre el “posmarxismo” comenzó con la publicación de *Hegemonía y estrategia socialista* en 1983, escrito por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004). Las principales referencias aparecieron en la *New Left Review* y en la polémica participaron Mouzelis (1988), Geras (1987; 1988) y los propios Laclau/Mouffe (1987). Para el debate sobre el posmarxismo en el contexto latinoamericano, ver Borón, (2000) y Dussel (2001).

³ Aunque Laclau ha elaborado su teoría de la “lógica populista” en textos previos, el texto principal es Laclau (2006a). Para una valoración positiva del primer enfoque de Laclau, ver Bobbio (1997).

⁴ Para el concepto –de origen, como se sabe, gramsciano– de lo “nacional-popular”, ver Portantiero (1991). En cuanto a la justificación de la aplicación del enfoque de Laclau al caso venezolano, véase Laclau (2006b).

En primer lugar, el movimiento político bolivariano en su momento de emergencia fue, ciertamente, una movilización populista. En cuanto *populista*, siguió una cierta *lógica política* mediante la cual un conjunto de demandas sociales –en una primera instancia, locales y dispersas-, que permanecían como insatisfechas por el Estado, fueron articuladas políticamente en torno a algunas demandas centrales, un liderazgo y un nuevo movimiento o partido. Además, a lo largo de todo el proceso hubo antagonismos entre las bases sociales y los gobiernos, entre distintas instancias de los gobiernos y entre diferentes grupos organizados dentro de las bases sociales.

En segundo lugar, si en cuanto *populista* el movimiento bolivariano siguió dicha *lógica política*, en cuanto *movilización* su emergencia no puede ser explicada exclusivamente en términos de las condiciones estructurales de orden económico y político –aunque éstas tuvieran sin duda un impacto- presentes en el período estudiado, sino también por la capacidad de ciertos grupos de movilizar los recursos retóricos y organizativos que controlaban con el objeto de aprovechar las nuevas oportunidades políticas que tales condiciones abrían.

El enfoque basado tanto en la *lógica populista* como en la *movilización de recursos* me ha permitido también discutir una tesis ampliamente divulgada por la literatura académica, esto es, la tesis según la cual el movimiento político bolivariano sería un movimiento neopopulista –sea por el *estilo* o sea por la *estrategia* de su líder-, surgido por ciertas condiciones estructurales –sean *económicas* (la crisis de la deuda de los ochenta, la renta petrolera, las políticas de ajuste estructural, entre otras) o sean *políticas* (el Estado rentista de distribución populista, la corrupción de la clase política, la deslegitimación del sistema de partidos, entre otras).⁵

⁵ Aunque la literatura sobre los orígenes del movimiento bolivariano es amplia, se pueden consultar Roberts (2003b), Kornblith (2004), Coppedge (2005) y Maigon (2007). Con un enfoque más próximo al que se defiende en esta investigación, véase Ellner *et al.* (2003), Buxton (2005) y Laclau (2006).

Las bases empíricas que sostienen los argumentos centrales de esta investigación han sido las siguientes: 1) las reseñas de la prensa venezolana sobre la movilización social del período 1989-1997 y sobre el intento de golpe de Estado de 1992 (en particular, las crónicas y compilaciones de documentos de Rafael Del Naranco y Ángel Rodríguez Valdés); 2) los documentos producidos por los propios grupos sociales y políticos involucrados en el proceso (especialmente por La Causa R y el MBR-200); 3) las entrevistas realizadas a algunos dirigentes políticos (particularmente las entrevistas llevadas a cabo por Marta Harnecker y Heinz Dieterich a Chávez Frías); y, finalmente, 4) los datos electorales del ahora extinto Consejo Supremo Electoral venezolano. Es la primera vez que los documentos producidos por los militares *bolivarianos* en el momento de la emergencia del movimiento han sido incorporados en un análisis del período de estudio. En cualquier caso, está todavía por hacer una edición crítica de los principales documentos que conforman la historia del movimiento bolivariano; hasta el momento, las ediciones de Alberto Garrido constituyen el material fundamental. Por último, como se verá a lo largo de lo que sigue, esta investigación tiene una deuda especial, dentro de la literatura secundaria especializada, con los trabajos de Margarita López Maya y Steve Ellner.

La investigación ha quedado ordenada de la siguiente manera. En el capítulo I, que corresponde al marco de análisis, analizo el problema de la definición de populismo y de sus condiciones de emergencia. En el capítulo II, partiendo de *El caracazo* de febrero de 1989, analizo los procesos de movilización social, insistiendo en las demandas populares, locales y dispersas, que enunciaron diversos grupos movilizadas a partir de 1989. En el capítulo III realizo un microanálisis histórico de los procesos de articulación populista y, en este sentido, expongo las formas de operación de las dos principales instancias de articulación de demandas populares existentes en el período, a

saber, La Causa R y el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, subrayando desde el punto de vista estratégico-táctico de la politización sus recursos retóricos y organizativos. Retomo el argumento principal y la discusión con la literatura en las conclusiones.

Capítulo primero. Populismo: concepto y condiciones de emergencia

La discusión académica sobre los populismos no es reciente; lo reciente es el análisis del fenómeno basado en sus *determinantes políticos*. Existen numerosas exposiciones de la historia del debate (Burbano de Lara, 1998; MacKinnon, 1999; Hermet, 2001). El objetivo de este capítulo no es reconstruir exhaustivamente este debate académico, sino marcar las tendencias generales del estado de la cuestión sobre el populismo en algunos trabajos especialmente relevantes.

He dividido la discusión teórica en dos partes. En la primera, discuto distintos enfoques sobre el concepto de populismo y argumento a favor de la propuesta de Ernesto Laclau –esto es, el populismo como lógica. En la segunda, abordo el problema de las condiciones de emergencia del populismo. Muestro las carencias explicativas de los enfoques expuestos en la primera parte respecto del fenómeno –incluida la teoría de Laclau- y propongo un análisis de la emergencia populista en términos de movilización de recursos, insistiendo, en particular, en la importancia de las organizaciones y retóricas de las bases sociales de los populismos. Cierro esta última parte con la exposición de dos propuestas de clasificación de los populismos en función de las dinámicas organizativas de las bases.

1) Estilo, estrategia o lógica: hacia un concepto de populismo

El populismo como estilo

El punto de partida de Alan Knight es la crítica a los enfoques empiristas del fenómeno populista. Dicho enfoque postula, principalmente, dos tesis: “(a) an appeal to “the people”, popular mobilisation; dynamic (charismatic?) leadership; and (b) a reformist rather than revolutionary programme; a multiclass constituency; an urban base” (Knight, 1998: 225). Define su propia propuesta como instrumentalista y nominalista. Es instrumentalista porque el populismo, en tanto que concepto, es útil para

ordenar, comparar y comprender una amplia complejidad de procesos históricos. Es nominalista porque el concepto de populismo, siendo una herramienta útil, no es una definición que dé cuenta de la “esencia” de un fenómeno.

Populism therefore connotes a political *style* [...] It does not –I shall argue- relate to a specific ideology, period, or class alliance; although, I shall also argue, the style becomes more politically effective and historically relevant in some times, places, and periods than others. (Knight, 1998: 226)

Reconoce que esta definición es vaga e imprecisa. Pero tiene algunas fortalezas de las que carecen otros conceptos. Es una definición flexible y, sobre todo, históricamente fiel (Knight, 1998: 233).

Para Knight, el populismo entraña, ciertamente, un vínculo entre el líder y sus seguidores, así como una apelación al “pueblo” en contra del “anti-pueblo”, pero no entiende por estos términos lo mismo que “élites” y “masas”. Aunque el populismo pueda estar asociado con la movilización, esto no implica que la movilización sea “irracional”, “emotiva” o susceptible de cualquier otra explicación psicológica. En verdad, estos elementos están presentes en toda política. Desde un punto de vista histórico, Knight tampoco encuentra que la movilización populista carezca de mediaciones: “All political movements of any scale or duration have involved some kind of functional network, if not hierarchy, which necessarily transcends a simple leader/mass dichotomy” (Knight, 1998: 228). Las mediaciones, por otra parte, tienden a fortalecerse cuando los movimientos populistas representan ciertos intereses a largo plazo, incluso en aquellos casos en los que, en su momento de emergencia, carecían de mediaciones densas. En cuanto a los líderes populistas, Knight sostiene que presentan los mismos defectos que otros líderes políticos no considerados populistas, esto es, pueden ser tan corruptos, hipócritas y practicar el nepotismo como cualquier otro.

En síntesis, el populismo, como estilo, no se aleja de cualquier otro tipo de política.

Para Pierre-André Taguieff la desventura del populismo es que se ha convertido en un término “popular”. Uno de los principales objetivos que se plantea el autor -entremedias de su uso equívoco y “popular”- es establecer las condiciones de empleo de la categoría. Su conclusión es que tal uso sólo puede ser restringido y que cualquier definición del mismo no puede ser más que una definición mínima.

La definición mínima de populismo que propone Taguieff es la siguiente:

A type of social and political *mobilization*, which means that the term can only designate a *dimension* of political action or discourse. It does not embody a particular type of political regime, nor does it define a particular ideological content. It is a political style applicable to various ideological frameworks. (1995: 9)

El populismo implica un tipo de movilización y una dimensión de la acción y del discurso político. Pero lo cierto es que, dada la generalidad de sus rasgos, aparece como un objeto más bien polimorfo (Taguieff, 1995: 20). En la medida en que puede ser compuesto o correlacionado con cualesquiera contenidos particulares, el populismo se rige por un *principe d’omnipotence synchrétique* (Taguieff, 2007: 169): es decir, es un tipo de movilización política o social que no puede identificarse con un *régimen político* particular porque tanto una democracia como una dictadura pueden tener una “orientación populista”; pero tampoco puede ser identificado con *contenidos ideológicos* específicos porque, en lugar de ser una ideología unitaria entre otras, su presencia aporta a cualquier ideología la misma “orientación populista” (Taguieff, 2007: 162-163). Más aún, no es posible vincular al populismo con ningún *programa económico* particular –hay populismos intervencionistas y populismos neoliberales- ni con una determinada *base social* particular (Taguieff, 2007: 168).

Pero ¿en qué consiste esta orientación polimorfa y sincrética? La respuesta de Taguieff es que el populismo es, ante todo, un *estilo político*. En efecto, aparece como « un style politique susceptible de mettre en forme divers matériaux symboliques et de se fixer en de multiples lieux idéologiques, prenant la coloration politique du lieu d'accueil » (2007: 163). En este sentido, aunque afirme que es un tipo de movilización y una dimensión de la acción y del discurso político, el estilo populista está vinculado más bien con operaciones retóricas que se ejercen sobre materiales simbólicos y/o ideológicos muy diversos. La noción de estilo político, que pretende captar la especificidad mínima de la movilización populista, se aplica preeminentemente a estas operaciones retóricas.

El material simbólico básico que la retórica del estilo populista utiliza es la representación social del *pueblo*. Tales representaciones sociales varían, como es evidente, de acuerdo a las distintas sociedades, pero –como mostraré más adelante– pueden clasificarse en dos grandes modulaciones: el pueblo como *demos* y el pueblo como *ethnos*. De esta manera, todo populismo es un estilo retórico estructurado en torno a *la apelación al pueblo* como un mecanismo o instancia de legitimación (Taguieff, 1995: 21).

Ahora bien, dicha apelación al pueblo no agota el contenido del estilo populista porque éste incorpora siempre una dimensión polémica en esta apelación: es una apelación al pueblo *contra* algo. En este sentido, siguiendo a los primeros trabajos de Laclau sobre el tema, Taguieff considera que el antagonismo o la oposición al *status quo* es un componente constitutivo del populismo.

Así pues, lo que, en primera instancia, define al populismo es *la apelación al pueblo*. Pero dicha apelación puede implicar, al mismo tiempo, muchas orientaciones: puede ser un movimiento hacia el pueblo, a favor del pueblo, un eco del pueblo o, en

último término, una estrategia de seducción del pueblo con el objeto de subyugarlo u obtener poder político. En este sentido, la equivocidad del populismo proviene en general de la coexistencia de sentidos que lo conforman: el populismo es al mismo tiempo *demofilia* y *demagogia* (Taguieff, 1995: 21). Respecto al pueblo, por tanto, el estilo populista oscila entre una *transfiguración mítica* del pueblo (demofilia) y una *instrumentalización cínica* del mismo (demagogia).

Para Taguieff, toda definición del populismo tiene que reconocer la ambigüedad que lo constituye. A su juicio, tal y como ocurrió en los llamados “populismos clásicos” en América Latina entre 1930 y 1960, el estilo político populista fue al mismo tiempo *manipulación de las masas* (pueblo-nación) y *expresión de la emergencia de las clases populares* (pueblo-plebe). De modo que en los populismos hay al mismo tiempo una dimensión de protesta y una dimensión de manipulación, una dimensión solidaria y otra autoritaria (Taguieff, 2007: 180). La ambigüedad surge del hecho de que estas dimensiones, que son en principio opuestas, pueden coexistir en una misma movilización populista.

Precisamente en función de su ambigüedad, Taguieff distingue dos polos o inflexiones del estilo populista en su *apelación al pueblo*: el polo de protesta y el polo identitario-nacional (1995: 32-35; 2007: 217-231). El primero alude principalmente al pueblo como *demos* y/o como *plebs*, esto es, al pueblo como el conjunto de los sectores o clases sociales marginadas o excluidas dentro de una sociedad. El segundo, por su parte, se refiere al pueblo como nación o como *ethnos*. Ciertamente, se trata de una distinción típico-ideal a la que los movimientos políticos específicos sólo pueden aproximarse parcialmente y cuyos rasgos pueden aparecer en cada caso mezclados. En cualquier caso, partiendo del carácter polémico del populismo –es decir, del *estar contra* que las dos inflexiones del estilo comparten-, los tipos ideales son los siguientes:

- a) El populismo de protesta. La apelación se orienta al pueblo-plebe e implica de una u otra manera una denuncia de las élites. Este anti-elitismo, además, se corresponde con la confianza en el pueblo, esto es, en los ciudadanos comunes. En este sentido, la retórica populista se estructura sobre *le blâme et l'éloge* (Taguieff, 2007: 168). La protesta populista, oponiendo –a veces de forma maniquea- el pueblo a las élites, “los de abajo” a “los de arriba”, aparece a menudo como una forma de *hiperdemocratismo* basado en una idealización de los ciudadanos que desconfían de los mecanismos de representación-mediación existentes. En efecto, tales mecanismos son considerados como amenazas al poder y a la iniciativa popular. La intensidad de la protesta populista dependerá, por su parte, del grado de maniqueísmo que se presente en la oposición pueblo-élites. La doble crítica –a las élites y a la representación- justifica el recurso a proyectos y programas políticos que reduzcan la distancia entre el pueblo y los gobernantes, lo cual se concreta con frecuencia en demandas de democracia directa.
- b) El populismo identitario (o nacional-populismo). La apelación al pueblo es la apelación al pueblo-nación. La nación aparece como una unidad sustancial, homogénea –es decir, existente más allá de las divisiones clasistas- y con una identidad propia que permanece en el tiempo. De allí que la identidad nacional populista se muestre como una forma de *antidemocratismo*. La crítica o denuncia que presenta el populismo identitario no es tanto contra las élites sino más bien contra los extranjeros. En la identidad nacional-populista, el anti-elitismo de la protesta populista puede llegar a estar subordinado a la xenofobia. En el mismo sentido, no demanda tanto la democracia directa como la defensa de la identidad nacional.

Ambos tipos de estilos populistas comparten, por tanto, un carácter polémico o antagonista, pero se diferencian tanto respecto al contenido que le otorgan al pueblo - *demos* o *ethnos*- como respecto al elemento al que se oponen. El primer tipo ideal de populismo es anti-elitista (apela al pueblo-plebe *contra* “los de arriba”) y enuncia una demanda de democratización; el segundo es anti-extranjeros (apela al pueblo-nación *contra* “los de enfrente”) y enuncia una demanda de autodefensa identitaria.

En los dos tipos ideales aparece, finalmente, una estructura mítica compartida: una imagen unificada del pueblo (Taguieff, 1995: 35-36). En último término, a pesar de la polémica y el antagonismo que los define y que en su emergencia plantean, los estilos populistas aspiran a la resolución de las contradicciones: “The heart of the populist myth is to reconcile opposites and reharmonize contradictions” (Taguieff, 1995: 36). Los populismos pretenden purificar una identidad y/o abolir la distancia que separa al pueblo de las élites: en este sentido, movilizan un deseo de *proximidad*, *transparencia* e *inmediatez*. Del mismo modo, la importancia de lo mítico en el populismo se muestra en su voluntad de *retorno al origen* (Taguieff, 2007: 169).

En cualquier caso, a pesar del “mito populista”, la asunción del populismo como un fenómeno constitutivamente ambiguo le permite a Taguieff criticar la concepción liberal del populismo –que se presenta más bien como una forma de anti-populismo- por ser básicamente reduccionista (2007: 177-179). En efecto, dicha concepción niega su ambigüedad constitutiva considerándolo exclusivamente como una forma unívoca de *antidemocratismo*.⁶ A su juicio, algunos analistas liberales terminan definiendo al populismo como una conjunción entre el poder irracional de las masas y el estilo personalista de líderes demagogos.

El populismo como estrategia

⁶ La misma crítica a las versiones liberales que niegan la ambigüedad del fenómeno aparece en el trabajo de Mény *et al.* (2000).

Kurt Weyland parte de una crítica al concepto de populismo como estilo planteado por autores como Knight y Taguieff. A su juicio, tal concepto es muy amplio y no permite establecer una definición precisa. Incurriendo en indefinición y amplitud, esta literatura no puede dar cuenta de aquellos políticos que, aunque estos autores no considerarían como populistas, asumen ocasionalmente el “estilo populista” en sus prácticas, especialmente durante campañas electorales.⁷

Por estas razones, Weyland considera que hay que definir al populismo como una *estrategia*. Una de las contribuciones más importantes de este concepto es que, de una u otra manera, muchos otros autores lo utilizan implícitamente para abordar los casos de estudio (Lazarte 1999; Roberts 1999; Zermeño 1999). La noción de estrategia política recoge fundamentalmente los instrumentos para obtener y ejercer el poder político. En efecto, para caracterizar dichas estrategias de poder, que son utilizadas por líderes o gobernantes políticos para alcanzar sus objetivos, Weyland recurre a las bases de poder que utilizan.

El concepto de populismo se obtiene a partir del cruce entre los tipos de actores políticos –líderes y gobernantes- y las bases de poder. Weyland distingue tres tipos de actores políticos: 1) individuos, 2) grupos informales y 3) organizaciones formales. En cuanto a las bases de poder, distingue básicamente tres: 1) la base numérica (que incluye votos, encuestas electorales y movilizaciones de masa) y la base que se sustenta en un recurso especial, que puede ser 2) recursos económicos o 3) la coerción militar. Por último, también considera que existen tres mecanismos de relación entre el actor político y su base de poder: 1) la relación puede ser fluida y desorganizada, 2) caracterizada por lazos informales pero firmes, y 3) con vínculos organizativos estables. En verdad, de la combinación de las dos primeras dimensiones Weyland obtiene no sólo

⁷ Weyland pone el ejemplo de José Sarney en Brasil.

una definición de populismo sino una tipología más general de estrategias políticas y formas de gobierno.

¿Qué es entonces el populismo? Dice: “[El populismo es] una estrategia política a través de la cual los líderes personalistas buscan o ejercitan el poder de gobierno basados en el apoyo directo, no mediado ni institucionalizado de un gran número de seguidores que son principalmente desorganizados” (Weyland, 2001: 36). Para Weyland, la *ultima ratio* de la estrategia populista es el apoyo de las masas (2001: 32). Aquí aparecen los votos, las encuestas y la movilización de masas. En este sentido, el populismo implica un actor político individual y una base de poder numéricamente importante, pero lo determinante para la definición de populismo como estrategia es que tal estrategia es la que lleva a cabo un individuo para obtener y conservar poder político. El tercer elemento que complementa la definición es que, en cuanto al tipo de relación que se establece entre el líder y la masa, se trata de una relación fluida y desorganizada.

El apoyo de las masas, que define la base de poder del populismo, puede mostrar diferentes niveles de organización. Ahora bien, en la medida en que el actor político central de la estrategia populista es el líder personalista, la relación que se establece con las bases de apoyo es más bien directa, casi personalizada y no mediada por organizaciones. Por esta razón, las relaciones con la masa electoral son fluidas y no institucionalizadas. Dado que las lealtades presentes en la relación líder-masas dependen de la capacidad del primero de satisfacer las expectativas de las segundas, los gobiernos basados en una relación de tipo populista suelen ser frágiles.

La forma como los líderes populistas, en su estrategia para obtener y/o conservar el poder, intentan evitar la erosión de esta relación en sí misma frágil –en tanto que desorganizada o no institucionalizada- es la conexión intensa con sus bases de apoyo. Es aquí donde el personalismo del líder se convierte en carisma. Weyland define al

carisma de la siguiente manera: “En la era de la soberanía popular [el carisma] significa una capacidad “sobrenatural” de representar y gobernar “al pueblo”, de rescatarlo de la adversidad y guiarlo al progreso” (2001: 34). En la actualidad, los populistas pueden hacer uso de la televisión para consolidar estas relaciones.⁸ También aquí pueden ser introducidas las promesas de inclusión y protección de sectores sociales excluidos que a menudo realizan, así como las formas de implantar en los seguidores del líder el “sentido de misión” que los conducirá hacia la redención bajo su liderazgo salvador. En este sentido, el carisma –que no tiene que estar presente en toda estrategia populista- es parte de la estrategia del líder o un instrumento para asegurar la preservación de su principal base de poder: “Los líderes populistas utilizan la potencia del carisma para mantener su base de seguidores constantemente fluida” (Weyland, 2001: 35).

Ahora bien, los líderes populistas, cuando pretenden consolidar sus gobiernos, introducen algunas formas de organización en la masa de seguidores. Tales organizaciones pueden ser partidarias o clientelares. Para Weyland, sin embargo, la estrategia del líder de organizar sus bases de apoyo no disuelve el concepto de populismo: la estrategia organizativa seguirá siendo populista en la medida en que el partido o la distribución clientelista mantenga bajos niveles de institucionalización y siga siendo el líder el que predomina en la organización. El líder populista, dentro de estas organizaciones de base, sigue dominando y moldeando la organización. Si, por el contrario, el partido o el clientelismo reducen la capacidad de dominar y moldear la organización por parte del líder –haciendo del líder un funcionario del partido o convirtiendo la relación en un intercambio pragmático entre el líder y las bases-, la estrategia pierde eventualmente su carácter populista. En este sentido, Weyland afirma lo siguiente: “De ahí que el éxito político transforme al populismo en un tipo diferente

⁸ Un análisis semejante de la relación entre los populismos y los medios de comunicación es recogida por Hermet (2001).

de gobierno que descansa en estrategias no populistas” (2001: 35). El liderazgo populista, por tanto, suele ser una estrategia transitoria: o fracasa por su fragilidad, o desaparece si tiene éxito. En cualquier caso, el personalismo del líder, en su apelación populista al pueblo, intenta estar por encima de las organizaciones intermedias y, de hecho, busca erosionar tales organizaciones para subordinarlas a su voluntad (Weyland, 2001: 36).

Basándose en la dimensión organizativa de las bases de apoyo de los líderes populistas, Weyland distingue dos subtipos de populismo: 1) si las masas tienen un nivel muy rudimentario de organización; o 2) si las masas están completamente desorganizadas (2001: 36-39). El primer subtipo se corresponde, aproximadamente, al populismo latinoamericano clásico. El segundo, al neopopulismo de los ochenta y noventa. La aparición de cada uno de estos subtipos depende a su vez de dos variables: la saturación organizativa del sistema político y los instrumentos de movilización del líder.

Si el sistema político está poco institucionalizado, los líderes populistas, para incorporar a los sectores que permanecen fuera de las organizaciones nacionales, crean organizaciones, pero manteniéndolas bajo control en función de su estrategia de poder. Éste fue el caso en los populismos clásicos. Si, por el contrario, el sistema político está saturado organizativamente, los líderes populistas recurren a tácticas anti-organizativas: ofrecen canales diferentes –básicamente: el liderazgo personalista- a los canales existentes (partidos políticos y grupos de presión) para representar los intereses de sus seguidores. Éste es el caso de los neopopulismos.

En cuanto a los instrumentos de movilización de los líderes, los plebiscitos y los votos son los principales instrumentos para demostrar su base de poder en las masas. Al no poder ser utilizados estos instrumentos más que ocasionalmente, recurren a los

encuentros públicos. Tales encuentros exigen la movilización de grupos numerosos, por lo que los líderes populistas crean organizaciones controladas por ellos mismos para mantener sus intereses y llevar a cabo movilizaciones. Tal fue la principal estrategia de los populistas clásicos. En la actualidad, por el contrario, el instrumento de las encuestas hace posible el establecimiento de bases de apoyo sin el recurso a los encuentros públicos, por lo que los líderes neopopulistas no requieren de organizaciones que permitan la movilización de las masas. Lo mismo cabe decir de la televisión en la medida en que ésta hace posible un contacto directo entre los líderes y sus seguidores. Bajo estas nuevas circunstancias, la difusión de un liderazgo carismático no necesita de mediaciones organizativas.

Todas estas condiciones hacen que los neopopulismos sean menos institucionalizados que los populismos clásicos. Se presentan como más anti-organizativos, interpelan a sus seguidores en el espacio privado y definen sus estrategias en función de las opiniones individualizadas que recogen las encuestas de opinión. Por esto, afirma Weyland: “La *volonté des tous* ha reemplazado a la *volonté général* como base de la legitimidad plebiscitaria del populismo” (2001: 38).

El populismo como lógica

Dentro de la literatura especializada sobre el populismo, la intervención de Laclau pretende lo siguiente: elaborar un concepto mediante un giro que no indaga en las particularidades de los procesos habitualmente considerados como populistas, sino que retorna a los presupuestos o condiciones de posibilidad de estos mismos procesos. El objetivo de este giro es doble: romper con el empirismo y, a la vez, con la imprecisión conceptual. La estrategia argumentativa de Laclau no es hacer un análisis *óntico*, centrado en los procesos empíricos, materiales, sino llevar a cabo un análisis *ontológico*, esto es, preocupado por la elucidación de aquello que formal o

constitutivamente hace posible la emergencia de estos procesos.⁹ Toda la literatura existente sobre los populismos tiene un carácter óntico; el objetivo de Laclau es, en contraposición con ella, establecer lo que cabe llamar una ontología del populismo.

La tesis central de dicha ontología es que el populismo es una *lógica política*. Desarrollaré en lo que sigue el sentido y el alcance de esta tesis.

I

Toda definición implica un marco teórico que aporta un sentido a aquello que es definido. Dicho sentido sólo puede ser considerado tal si es capaz de diferenciar lo que define de aquello que no define o, si se prefiere, aquello que la definición incluye de lo que no incluye. Para Laclau, esto es precisamente lo que parece no ocurrir con el término populismo.

En general, los populismos han sido considerados como movimientos, ideologías o prácticas políticas. Teniendo en cuenta lo dicho, llamar a un movimiento o a una ideología “populista” tendría que hacer posible establecer diferencias con otros términos colocados en el mismo nivel de análisis: un movimiento o ideología populista tendría que ser diferente de un movimiento o una ideología liberal, fascista, comunista o cualquier otra. Ahora bien, esto supondría intentar especificar con la mayor precisión posible los contenidos básicos que constituirían el concepto de populismo. Pero es precisamente este intento de definir por contenidos concretos al populismo lo que produce problemas: frente a cada contenido concreto que se le atribuye, inmediatamente surgen múltiples excepciones. De allí que algunos hayan llegado a la conclusión de que el populismo no posee ningún sentido ni referente concreto.

La propuesta de Laclau consiste en sustraerse a los contenidos -económicos, políticos, ideológicos- que aparecen ligados al fenómeno y más bien analizar la forma

⁹ Para una discusión sobre la diferencia entre lo óntico y lo ontológico en Laclau, véase Marchart (2008).

en la que tales contenidos se vinculan. Para Laclau, en efecto, el populismo es, básicamente, una forma de articulación de contenidos: “A movement is not populist because in its politics or ideology it presents actual *contents* identifiable as populist, but because it shows a particular *logic of articulation* of those contents -whatever those contents are” (2005: 33). Por tanto, hay populismo si hay esta forma particular de articulación de contenidos.

II

Las demandas sociales son las unidades mínimas de análisis.¹⁰ El término demanda (*demand*) tiene una ambigüedad¹¹: es petición, pero también reclamo. El paso de la petición al reclamo es uno de los rasgos del populismo.

Las demandas se dividen en *demandas democráticas* y *demandas populares*.¹² Las primeras son las demandas aisladas, sean o no satisfechas. Las demandas populares se refieren a la pluralidad de demandas que, mediante su articulación, constituyen en mayor o menor medida una determinada identidad colectiva. Esta identidad colectiva es, en el caso del populismo, el pueblo o el sujeto popular.

Para Laclau, el populismo presenta tres dimensiones centrales:

[1] La unificación de una pluralidad de demandas en una cadena equivalencial [*sic*]; [2] la constitución de una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos; [3] la consolidación de la cadena equivalencial mediante la construcción de una identidad popular que es cualitativamente algo más que la suma de los lazos equivalenciales. (2006: 102)

¹⁰ Para una discusión sobre la categoría de demanda y algunos problemas de su consideración como unidad mínima de análisis, véase Orsini (2007).

¹¹ Laclau recoge explícitamente la ambigüedad del término inglés *demand*, que puede significar *request*, pero también *imposing a request* a alguien (como en la frase “demanding an explanation”). Para Laclau, el segundo sentido se aproxima al término castellano *reivindicación* (*fighting demands*).

¹² Laclau se adelanta a posibles críticas al nombre de “demandas democráticas” para demandas particulares. Su justificación es que intenta recoger la idea de que las demandas insatisfechas suponen una exclusión. Para una extensión de esta idea, véase Laclau (2006: 158-161).

De esta manera, todo populismo se compone de las siguientes dimensiones: 1) la articulación equivalencial¹³ de las demandas sociales; 2) un antagonismo (o “frontera interna”¹⁴) que, separando al pueblo del poder, divide el campo social; y 3) la existencia de una identidad colectiva (popular) como resultado de la equivalencia de demandas.¹⁵ De estas dimensiones se desprende que la existencia de demandas insatisfechas, así como su tendencia a ser reagregadas sobre la base de su propia insatisfacción, sean precondiciones elementales del populismo (Laclau, 2005: 37).

El proceso de articulación equivalencial de demandas lo expondré en los epígrafes III y IV; el antagonismo que divide el pueblo del poder en el V; y, finalmente, la identidad popular en el VI. Volveré a la definición general en el último apartado.

III

He dicho que las demandas democráticas permanecen aisladas. Pero la pregunta que aparece entonces es: ¿aisladas respecto de qué? Laclau responde que estas demandas están aisladas respecto del proceso equivalencial con otras demandas. La razón por la que no entran en la equivalencia es que son demandas satisfechas. Ahora bien, que sean satisfechas significa que no están aisladas del todo sino que, por el contrario, se inscriben en otro tipo de totalidad: la totalidad institucional o diferencial.

Hay, por tanto, dos formas de articulación política de las demandas sociales. En el primer caso, las demandas permanecen en su particularismo y se relacionan con las otras demandas mediante relaciones diferenciales. Por esta razón Laclau trata a estas demandas como *diferencias*. En el segundo caso, el particularismo de las demandas claudica a favor de aquello que hay de común entre un conjunto de demandas

¹³ Aunque el adjetivo “equivalencial” no aparezca en el *Diccionario de la Real Academia*, utilizaré este neologismo a lo largo de la exposición, en la medida en que tanto Laclau como los traductores y comentaristas de su obra lo utilizan.

¹⁴ Para una aclaración útil de la noción de “frontera interna” y su uso en el análisis político, véase Howarth y Norval (2001). Sobre la noción de antagonismo en general, véase Torfing (1999: 120-131) y Žizek (1992).

¹⁵ Para una exposición de la noción de “identidades políticas”, véase Stavrakakis (2001).

particulares. En verdad, no tienen nada en común más que su insatisfacción. Es aquí donde Laclau no se refiere ya a diferencias sino a *equivalencias*. Cada una de estas formas –o, si se prefiere, lógicas- de articulación de demandas son nombradas, respectivamente, como *lógica de la diferencia* y *lógica de la equivalencia*.

La equivalencia y la diferencia son incompatibles entre sí. Pero son, al mismo tiempo, estrictamente interdependientes, pues ambas coexisten en lo que Laclau llama en ocasiones la “construcción política de lo social” –es decir, la articulación política de las demandas sociales. En efecto, dice: “Lo social no es otra cosa que el *locus* de esta tensión irresoluble” (Laclau, 2006: 107). Ahora bien, un campo social determinado no puede estar ordenado exclusivamente sólo por una de estas lógicas: los extremos –que darían, por un lado, una sociedad institucionalista regida por la administración y la individualización de las demandas sociales y sin disputas planteadas por “fronteras internas”; por otro lado, una sociedad en la que las demandas sociales fueran enteramente equivalentes- no son realizables (Laclau, 2005: 44). En este sentido, el predominio de una de las lógicas no supone en modo alguno la anulación de la otra.

IV

Para la definición de populismo hay que tener en cuenta ambas lógicas de articulación porque uno de los rasgos que lo definen es el predominio de la lógica equivalencial sobre la lógica diferencial. Ahora bien, si lo que ocurre es, de hecho, más bien una interdependencia entre ambas lógicas ¿qué significa que lo específico del populismo sea el predominio de la equivalencia sobre la diferencia? El predominio implica que una demanda determinada, procedente del campo total de las diferencias, asume la función de articular a todas las otras demandas. No por ello pierde del todo su carácter particular. Este movimiento de totalización es lo que Laclau llama

hegemonía.¹⁶ Laclau recurre al ejemplo de los trabajadores en el peronismo: esta demanda se convirtió, en la lógica peronista, en equivalente del “pueblo”. En cualquier caso, la relación hegemónica es enteramente contingente o dependiente de un contexto particular:

Ningún contenido particular tiene inscripto, en su especificidad óptica, su significado en el seno de una formación discursiva, todo depende del sistema de articulaciones diferenciales y equivalenciales dentro del cual está situado [...] Cuáles de estos significantes van a adquirir ese rol articulador va a depender, obviamente, de una historia contextual. (2006: 114)

La diferencia entre las lógicas –la totalización populista y la totalización institucionalista- hay que encontrarla en los significantes centrales que estructuran el conjunto de un campo social.

La diferencia y la equivalencia están presentes en ambos casos, pero un discurso institucionalista es aquel que intenta hacer coincidir los límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad. Por lo tanto, el principio universal de la “diferencialidad” se convertiría en la equivalencia dominante dentro de un espacio comunitario homogéneo [...] En el caso del populismo ocurre lo opuesto: una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos. El “pueblo”, en ese caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad: es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima. (Laclau, 2006: 107-108)

La idea de que una “parte” pretende ser el “todo” –si se prefiere, de una demanda particular que articula a otras demandas particulares- se vincula con la ambivalencia semántica del vocablo “pueblo”. En efecto, el pueblo puede significar tanto *populus* –en el sentido de todos los ciudadanos- como *plebs* –en el sentido de los sectores menos privilegiados. Lo específico del populismo es que, en el curso de su

¹⁶ Para el concepto de hegemonía, de origen gramsciano, véase Mouffe (1979), Laclau y Mouffe (2004) y la resumida versión de Laclau (2001). Del mismo modo, la exposición de Torfing a propósito del concepto de hegemonía dentro del desarrollo de la teoría del discurso (1999: 101-119).

emergencia, una *plebs* reclama ser el único *populus* legítimo.¹⁷ En la lógica diferencial, la diferencia exige ser el único equivalente legítimo y las otras diferencias son consideradas igualmente válidas dentro de una totalidad simétrica más amplia. Por el contrario, en la lógica equivalencial del populismo, la simetría se rompe porque hay una “parte” (*plebs*) que se identifica con el “todo” (*populus*). De este modo, el populismo implica una exclusión radical dentro de un campo social. En el primer caso, la diferencia es el único equivalente dominante; en el segundo, el rechazo de un poder exige que todas las demandas se identifiquen con un elemento común que posibilita la unidad equivalencial de las demandas particulares.

V

Una condición básica para que la articulación populista tenga lugar es “the totalisation (through signification) of the power which is opposed to the ensemble of those demands constituting the popular will [...] There is no populism without discursive construction of an enemy” (Laclau, 2005: 39). Es aquí donde aparece la formación de una “frontera interna”: esto es, el límite que separa, por una parte, al poder que está más allá de la frontera y, por otra, al pueblo. Sin el antagonismo que supone la construcción de un enemigo no habría equivalencia posible entre las demandas sociales. Dicho de otra manera, no hay equivalencia sin antagonismo ni antagonismo sin equivalencia porque la construcción de un pueblo implica al mismo tiempo la construcción de un enemigo del pueblo: sea la clase dominante, el régimen político, la oligarquía o cualquier otro significante.

Las demandas democráticas suelen tener enemigos especificados: una autoridad municipal, los dirigentes de un gremio o sindicato, entre otros. Pero la articulación populista implica la equivalencia de las demandas particulares, por lo que la identidad

¹⁷ Una idea próxima a la tensión entre *plebs* y *populus* es desarrollada por Rancière (1996).

del enemigo resulta menos evidente. La “frontera interna” que divide a una formación social está más indeterminada, por lo que en la equivalencia popular la identidad del enemigo depende más de su permanente construcción política.

La razón por la que la equivalencia popular exige la erección de un antagonismo con lo anti-popular es que las demandas particulares no comparten entre sí *a priori* ningún rasgo positivo. Lo que comparten o tienen en común las demandas que componen un pueblo es precisamente este rechazo al poder: “The equivalential moment cannot be found in any positive feature underlying all demands [...] The demands share a *negative* dimension beyond their positive differential nature” (Laclau, 2005: 37).

La ruptura antagónica presente en la equivalencia populista implica, al mismo tiempo, tanto la demanda insatisfecha como una referencia a la instancia que no satisface la demanda: la demanda insatisfecha está dirigida al poder que no la satisface. Dice Laclau: “The demand is not self-satisfied but has to be addressed to an instance different from that within which the demand was originally formulated” (2005: 35-36) En última instancia, la *plebs*, al identificarse con el *populus*, excluye de la nueva unidad política al poder responsable de la no satisfacción de las demandas.¹⁸

Las demandas democráticas están vinculadas, en principio, a un marco institucional o diferencial que las soporta. Sólo cuando se convierten en demandas insatisfechas ponen potencialmente en cuestión dicho marco. Pero es el aumento en número de las demandas lo que corroe, en definitiva, el soporte diferencial precedente e inicia un movimiento hacia la intensificación de las demandas insatisfechas. Esta corrosión aporta al populismo el carácter anti-institucional que lo define como proceso de ruptura. No obstante, las demandas, insertas en un proceso de articulación equivalencial, aunque no estén ya dirigidas a la instancia que no las satisface, también

¹⁸ Para un análisis de estos procesos, centrado en la figura del *daño* que los populismos movilizan, véase Aibar (2007).

exigen la conformación de un nuevo orden diferencial.¹⁹ Con esta nueva exigencia, el antagonismo, cuya base estaba en la insatisfacción de las demandas, se expande. Afirma Laclau: “El populismo se presenta a sí mismo como subversivo del estado de cosas existente y también como el punto de partida de una reconstrucción más o menos radical de un nuevo orden una vez que el anterior se ha debilitado” (2006: 221). En este sentido, las condiciones para la emergencia populista no se reducen –como señalé anteriormente- a la existencia de demandas (particulares y dispersas) insatisfechas y a su tendencia a la agregación con otras demandas, sino que en éstas tiene que ocurrir un incremento general de su número y de su intensidad.

Hasta tal punto el antagonismo es constitutivo del populismo que su disolución implicaría la disolución del pueblo. Una forma de provocar esta disolución sería mediante la reabsorción de las demandas particulares –por ejemplo, mediante la satisfacción de algunas de ellas: lo que Gramsci llamaba “transformismo”- dentro de un marco diferencial. Por esta razón afirma Laclau que: “El destino del populismo está ligado estrictamente al destino de la frontera política: si esta última desaparece, el “pueblo” como actor histórico se desintegra” (2006: 117). Tal frontera no está dada de antemano y para siempre, sino que su existencia exige un permanente proceso de producción y reproducción política.

VI

Que el populismo sea una *lógica política* significa que es una *forma de articulación* de demandas (o peticiones) insatisfechas. La base de tal articulación es enteramente contingente y contextual en la medida en que las demandas son particulares y no comparten ningún rasgo positivo sino más bien el hecho de permanecer

¹⁹ Esto es lo que ha llevado a algunos comentaristas de la obra de Laclau a afirmar que los populismos no se reducen a llevar a cabo una ruptura anti-institucional de cierto *status quo* sino que, al mismo tiempo, poseen un proyecto de fundación institucional. Véase Aboy (2004) y Panizza (2008).

insatisfechas. Dicha forma de articulación no es la única presente en el populismo: sólo implica el predominio de la lógica equivalencial sobre la lógica diferencial.

Ahora bien, Laclau considera que la equivalencia posee –formalmente- dos niveles. En el primero, [a] la articulación de demandas supone el establecimiento de solidaridades y mediaciones entre las demandas, [b] la equivalencia entre éstas es más bien indirecta (las demandas no operan como equivalentes sino *como si* fueran equivalentes) y [c] los particularismos de base tienen mayor incidencia en el conjunto que la unidad equivalencial en sí misma. En el segundo nivel, sin embargo, [a] la articulación entre demandas produce una equivalencia más consistente, [b] las demandas se escinden entre su particularismo y su equivalencia con otras demandas, y, finalmente, [c] en virtud de la presencia de ciertos significantes, la incidencia de la equivalencia como tal sobre las demandas particulares es mayor que la incidencia de éstas sobre aquélla. Estos significantes pueden ser palabras, imágenes, o cualquier otro. Entre el primer y el segundo nivel ha ocurrido, de esta manera, una cierta inversión cuyo resultado es, precisamente, la identidad popular –es decir, el pueblo. Dice Laclau: “Sin esta operación de inversión no habría populismo” (2006: 122).

Tal y como señalé en apartados anteriores, la equivalencia sólo puede ser constituida mediante una demanda particular que asume la articulación de otras demandas. En torno a esta demanda articuladora se forja la identidad popular. Pero para llevar a cabo esta operación tiene que ocurrir un desprendimiento de su particularismo inicial: la demanda que articula a las otras demandas deja de ser sólo lo que era y se convierte en algo diferente a sí misma. De alguna manera, la función de representar la equivalencia total predomina sobre su particularidad. En este sentido, la identidad popular se hace *extensivamente* más plena, porque incorpora a un número mayor de demandas; pero al mismo tiempo se hace *intensivamente* más indeterminada, porque

para poder articular demandas que son radicalmente heterogéneas entre sí tiene que separarse de sus contenidos particulares. Lo que la identidad gana en extensión lo pierde en intensidad (Laclau, 2005: 39). Esto es lo que significa la afirmación de Laclau según la cual: “Una identidad popular funciona como un significante tendencialmente vacío” (2006: 125).

Tendencialmente vacío no significa enteramente vacío.²⁰ Este vacío, en cualquier caso, explica la indeterminación de los símbolos populistas: en último término, la vacuidad del significante es la condición de la eficacia populista. En la medida en que los populismos introducen una homogeneidad equivalencial en la heterogeneidad de las demandas sociales, éstos no pueden hacerlo más que reduciendo al mínimo los contenidos particulares. Y es aquí donde emerge la cuestión del líder populista como cierto extremo de vacuidad en las identidades populares: “At the limit, this process reaches a point where that homogeneizing function is carried out by a pure name: the name of the leader” (Laclau, 2005: 40).

VII

En último término, el populismo para Laclau queda definido de la siguiente manera:

We only have populism if there is a series of politico-discursive practices constructing a popular subject, and the precondition of the emergence of such a subject is, as we have seen, the building up of an internal frontier dividing the social space in two camps. But the logic of that division is dictated, as we know, by the creation of an equivalential chain between a series of social demands in which the equivalential moment prevails over the differential nature of the demands. Finally, the equivalential chain cannot be the result of a purely fortuitous coincidence, but has to be consolidated through the emergence of an element which gives coherence to the chain by signifying it as a totality. This element is what we have called “empty signifiers”. (2005: 42-43)

²⁰ En este contexto, Laclau introduce el concepto de “significante flotante”, que no desarrollaré porque su discusión desborda los límites de esta investigación. Dice Laclau: “In practice empty and floating signifiers largely overlap” (2005: 42).

Este concepto supone un desplazamiento conceptual desde los contenidos hacia las formas y, a juicio de Laclau, posee algunas ventajas sobre las otras definiciones (2005: 43-44). En primer lugar, se opone a un “sociologismo ingenuo” que reduce las formas políticas a las unidades preconstituidas de los grupos. En segundo lugar, logra dar cuenta de la ubicuidad del fenómeno, que puede partir de puntos diferentes de la estructura socio-económica. Del mismo modo, dado que el populismo consiste en el predominio de la lógica equivalencial, la producción de significantes vacíos y la construcción de fronteras políticas mediante una interpelación al pueblo, es comprensible que toda política basada en esta forma de articulación pueda partir de cualquier lugar dentro de la estructura institucional: organizaciones políticas clientelares, partidos políticos establecidos, sindicatos, ejércitos, movimientos revolucionarios y cualesquiera otros. En tercer lugar, las dimensiones del populismo explican también la presencia de esta lógica de articulación en movimientos de características ideológicas diferentes.

¿Por qué analizar los populismos en términos de lógica política?

En la medida en que la propuesta instrumentalista y nominalista de Knight expresamente rehúye ser juzgada como una definición, su afirmación de que el populismo es un estilo político no aporta herramientas analíticas suficientes para comprender los fenómenos empíricos. En cuanto a Taguieff, aunque la definición mínima del populismo que elabora logra dar cuenta, por una parte, de la ambigüedad del fenómeno, y, por otra, de su dimensión retórica, su propuesta analítica presenta ciertas limitaciones.

En primer lugar, la definición del populismo como estilo no sólo parece mínima sino en buena medida imprecisa. En efecto, si la respuesta al problema del concepto de

populismo es que se trata de un estilo político, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué es un estilo político? En este sentido, la noción de estilo, en lugar de aportar una definición, posterga la respuesta mediante el planteamiento de otra pregunta.

En segundo lugar, aunque la tesis del estilo populista pretenda capturar al fenómeno en su carácter de movilización –recuérdese que Taguieff dice que, en tanto que movilización, el populismo es una dimensión de la acción y del discurso políticos-, lo cierto es que la aplicación del concepto parece restringirse meramente a la dimensión discursiva. El estilo populista se presenta en su análisis como un conjunto de operaciones retóricas ejercidas sobre ciertos materiales simbólicos y representaciones sociales –en particular, la apelación polémica al pueblo. De esta manera, Taguieff no responde a preguntas importantes para completar su argumento. Si el populismo es movilización ¿qué es una movilización social y política? Si es una movilización de un tipo especial ¿cuáles son los tipos de movilización? ¿Qué tipo particular de movilización es el populismo? ¿En qué se diferencia la movilización populista de otro tipo de movilizaciones? Lo mismo cabría decir de la idea de que el estilo populista es una dimensión de la acción política.

Por último, la alusión al populismo como estilo, si bien apunta a elementos importantes para definir al populismo como una cierta retórica política, no incorpora una dimensión organizativa que complemente la dimensión retórica del fenómeno. En este sentido, la definición de Taguieff no es sólo imprecisa sino también reduccionista.

Del mismo modo, la definición de populismo como estrategia, elaborada por Weyland, presenta algunos problemas. Al afirmar que el populismo es una estrategia, su análisis está concentrado exclusivamente en el proceso “desde arriba”, por lo que incurre también en una forma de reduccionismo. Weyland presupone que la estrategia populista significa la estrategia de un líder que busca aumentar su poder político. Las

dinámicas “desde abajo” o en las bases de apoyo de los populismos no tienen lugar en su enfoque porque parte de la tesis de que tales bases, al carecer de organizaciones formales, sólo pueden aparecer como instrumentos disponibles para la estrategia de dominación del líder personalista. Las bases de los populismos son meras masas – numéricamente relevantes- en mayor o menor medida desorganizadas, y su organización sólo puede tener lugar en aquellos contextos en los que el líder decide prolongar su dominación en el tiempo. En el caso de que se organicen, las bases permanecen sujetas al líder o dejan de ser bases de apoyo populistas para convertirse en clientelistas o partidistas. Por último, Weyland no reconoce lo suficiente el carácter ambiguo del fenómeno, de modo que considera que éste se define a menudo por una mística de regeneración inserta en la estrategia de un líder (personalista y a veces carismático) que, al parecer, es el único individuo que mantiene en el movimiento populista la racionalidad práctica que le permite perseguir y alcanzar sus intereses.

El enfoque de Laclau, por su parte, incluye las fortalezas de los otros enfoques y carece de algunas de sus deficiencias. Ciertamente, el hecho de que reconozca la necesidad de desprender a los populismos de sus caracteres empíricos no le conduce a incurrir en una imprecisión conceptual como la implicada en la noción de estilo. El concepto *formal* de populismo –es decir, ontológico, no óntico- no equivale en su caso a una imprecisión. Del mismo modo, en la medida en que para Laclau las unidades mínimas de análisis son las demandas sociales, su enfoque rechaza por principio una comprensión de los populismos basada en estrategias “desde arriba”. Para Laclau, aunque no utilice esta terminología, los populismos son al mismo tiempo “desde arriba” y “desde abajo” porque suponen la conjunción entre una demanda que articula y una serie de demandas que son articuladas. Además, las demandas sociales modifican sus contenidos particulares en el proceso de formación de las identidades populares. En este

sentido, si ambos elementos no están presentes, no hay populismo. Dado que su enfoque es holístico, la función del líder dentro de la formación del pueblo es la de ser un significativo –más o menos vacío, según los casos- que hace posible la articulación de una cadena equivalencial de demandas sociales insatisfechas. Por tanto, el populismo no se reduce a una estrategia de un líder individual que maximiza beneficios privados.

Ahora bien, la propuesta de Laclau, al ser formal, tampoco aporta todos elementos suficientes para llevar a cabo un análisis empírico de los movimientos, ideologías y prácticas populistas. La atención de Laclau está centrada en subrayar el carácter contingente o contextual de las articulaciones populistas, pero no elabora herramientas analíticas para dar cuenta de estos contextos. En buena medida, su concepto es más un programa de investigación que una teoría sistemática. De esta manera, existen muchas preguntas que permanecen abiertas, por ejemplo: ¿Por qué algunos grupos con pretensiones de articular demandas sociales tienen éxito y otros no? ¿Qué lugar ocupan las organizaciones de base y sus retóricas específicas en la conformación de los movimientos populistas?

2) Crisis y movilización de recursos: las condiciones de emergencia de los populismos

Una segunda discusión sobre los populismos está relacionada con aquellos factores que estarían en la base de su surgimiento, es decir, sobre aquellas condiciones que explicarían la emergencia de los movimientos populistas.

La emergencia de los movimientos populistas

Algunos autores, como Weyland, concentrados en la discusión sobre el concepto, no analizan sus condiciones. Otros autores, siguiendo en parte a la literatura sobre los populismos clásicos, consideran que estos movimientos responden a modificaciones en la estructura económica, por ejemplo de las condiciones estructurales de los

capitalismos periféricos o semi-periféricos en el caso de Nicos Mouzelis (1985). Sin embargo, la mayor parte de la literatura considera que los populismos surgen en contextos de crisis política.

Para Knight, por el contrario, el populismo puede estar vinculado a situaciones de crisis económicas, sociales y políticas, pero si se tienen en cuenta históricamente los fenómenos llamados populistas, se puede constatar que esto no ha ocurrido siempre. De esta manera, opta por negar a las crisis cualquier carácter explicativo de la emergencia populista.

Even more than “populism”, however, “crisis”, is a vague, promiscuously used, under-theorised concept which defies measurement and lacks explanatory power. To attribute “populism” to “crisis” may often be historically valid, but it does not afford a robust etiology; and trying to explain one vague concept in terms of another is hardly a promising line of inquiry. (Knight, 1998: 227)

Desde su punto de vista, el vínculo entre crisis y populismo es, en el mejor de los casos, una tendencia o correlación, no un requisito para definir el fenómeno ni un criterio esencial. De allí que afirme que: “Populism, in short, can exist in “normal”, “non-critical” times” (1998: 227).

No obstante, para Taguieff -que comparte con Knight la tesis de que el populismo es básicamente un estilo político- los populismos surgen en condiciones de crisis políticas vinculadas con la pérdida de legitimidad de los regímenes políticos. En efecto, dice: « La condition d'émergence d'une mobilisation populiste est une crise de légitimité ou de légitimation, une *crise de la légitimité politique* affectant l'ensemble du système de représentation » (2007: 169). A su juicio, la movilización populista emerge de una crisis de legitimidad, y esa misma deslegitimación permite explicar la dimensión anti-partidista o anti-sistema que a menudo presenta el populismo. Hasta tal punto el populismo está vinculado a una falta de legitimidad política que la apelación populista

al pueblo se refiere al *poder del pueblo* como mecanismo de legitimación o relegitimación.

En cuanto a Laclau, sólo se refiere a una fractura del sistema institucional precedente o a un “cierto grado de crisis de la antigua estructura” como precondiciones de la aparición del populismo. En efecto, afirma lo siguiente:

El sistema institucional debe estar (nuevamente, más o menos) fracturado para que la convocatoria populista resulte efectiva. En una situación de total estabilidad institucional (y “total” designa, por supuesto, una situación puramente ideal), la única opción posible a ese sistema operaría desde un exterior puro –esto es, de sectores puramente marginales e ineficaces-. Esto es así porque, como hemos visto, el populismo nunca surge de una exterioridad total y avanza de tal modo que la situación anterior se disuelve en torno a él, sino que opera mediante la rearticulación de demandas fragmentadas y dislocadas en torno a un nuevo núcleo. Por lo tanto, cierto grado de crisis de la antigua estructura es necesario como precondición del populismo, ya que, como hemos visto, las identidades populares requieren cadenas equivalenciales de demandas insatisfechas. (2006: 221-222)

Laclau no analiza la relación entre las fracturas institucionales y el populismo más que en la forma de demandas particulares y dispersas que tienden a agregarse en unidades más universales y concentradas, especialmente cuando por su número e intensidad socavan un campo social determinado.

Todas estas explicaciones tienen limitaciones importantes. En el caso de que se insista en la crisis política como condición principal, el sentido concreto de tales crisis no aparece especificado. No resulta claro el modo según el cual una crisis puede dar lugar a un movimiento. Por otra parte, la relación entre la crisis y los movimientos tiene un carácter mecánico que no logra captar otras dimensiones que puedan contribuir a dar cuenta del proceso: por ejemplo, la organización y la retórica del propio movimiento. Por estas razones recurriré en lo que sigue al enfoque de la movilización de recursos en la medida en que, desde sus coordenadas, es posible comprender que las crisis

constituyen ciertas oportunidades políticas que los diferentes grupos pueden –o no– aprovechar, según sus recursos, para hacer aparecer a un movimiento.

Mobilización de recursos

El enfoque de *procesos políticos* respecto de los movimientos enfatiza dos aspectos: los movimientos son *políticos* porque no son fenómenos psicológicos sino que están vinculados con la formación de la política institucionalizada; además, los movimientos son *procesos* porque atraviesan una secuencia continua desde su emergencia hasta su declive y no se desarrollan en series discretas de etapas (McAdam, 1982: 36). Otro modo de aproximarse a las dinámicas de los movimientos, que no contradice su carácter de procesos políticos, es analizarlos como partes de la *política de confrontación (contention)*. Lo que convierte a la acción de los movimientos en una confrontación política es la emergencia de grupos que habitualmente carecen de acceso a las instituciones y al proceso de toma de decisiones, grupos cuyas demandas son nuevas o al menos no son aceptadas y que, finalmente, constituyen con su acción una amenaza para otros grupos y/o para las autoridades (Tarrow, 1997: 24). La literatura que conforma este enfoque es amplia, pero me ceñiré en lo que sigue a presentar las tesis principales de Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly.

Existen tres factores básicos que permiten analizar un movimiento. El primero es la organización de los grupos movilizados. El segundo, la evaluación colectiva de las posibilidades de éxito de la movilización. El tercero, los alineamientos políticos de grupos en el entorno político (McAdam, 1982: 40). Estos factores pretenden dar cuenta tanto de los recursos “externos” de los movimientos como de sus recursos “internos”. En los siguientes apartados analizaré cada uno de estos factores: en el primero, las

oportunidades; en el segundo, la organización; y, en el tercero, la ideología o retórica del movimiento.²¹

Las oportunidades y restricciones políticas son definidas por Tilly de la siguiente manera:

The extent to which other groups, including governments, are either (a) vulnerable to new claims which would, if successful, enhance the contender's realization of its interest or (b) threatening to make claims which would, if successful, reduce the contender's realization of its interest. (Tilly, 1978: 55)

En el mismo sentido, para Tarrow las oportunidades políticas son “dimensiones consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político que fomentan la acción colectiva de la gente [...] [Las restricciones políticas son] aquellos factores que desincentivan dicha acción” (Tarrow, 1997: 45).

Una idea central de la dimensión de la estructura de oportunidades políticas es que tal estructura no es inmutable: las oportunidades cambian, aparecen y desaparecen. (McAdam, 1982: 40). Por esta razón el concepto que se pretende recoger es el de *modificación de la estructura de oportunidades políticas*. Esta estructura, ciertamente, no sólo hace posible la movilización sino que también puede impedirla, por lo que el par oportunidades-restricciones no puede ser separado del todo. Sobre la modificación de la estructura de oportunidades, o sobre su carácter mutable, afirma Tarrow que “son las oportunidades y restricciones *cambiantes* dentro del Estado las que proporcionan los huecos que permiten a los actores pobres en recursos participar en la acción política colectiva” (Tarrow, 1997: 46).

²¹ En este trabajo me referiré a esta tercera dimensión de los movimientos como recursos retóricos. Como se verá en lo que sigue, la literatura sobre política de confrontación ha dado nombres diversos a esta dimensión.

Para McAdam, lo central que ocurre con la modificación de la estructura de oportunidades políticas es que, por una parte, se reducen las diferencias de poder que existían previamente entre los grupos que se movilizan y sus oponentes; por otra parte, y como consecuencia de esta reducción, estos grupos se hacen menos vulnerables a las acciones de las élites y los costos de la represión son mayores (McAdam, 1982: 42-43).

Algunos ejemplos de oportunidades son las guerras, la industrialización, los realineamientos políticos internacionales, el desempleo prolongado y los cambios demográficos a gran escala. Tarrow añade otros elementos que pueden ser considerados partes de las oportunidades: la división de las élites, la permisividad de las autoridades, la presencia de posibles aliados e, incluso, la posibilidad de elecciones institucionalizadas. También existen, inversamente, restricciones para la aparición de movimientos, como el mantenimiento de la unidad de las élites y los mecanismos de represión. McAdam afirma que no puede ser elaborada una lista finita de las oportunidades posibles para los distintos movimientos (1982: 41). En cualquier caso, a lo que aluden las oportunidades políticas es a la emergencia de una situación de inestabilidad política generalizada.

Las oportunidades políticas no producen, por sí mismas, las movilizaciones. En función de los recursos de los movimientos, tales oportunidades pueden o no ser aprovechadas, y pueden ser aprovechadas por unos y no por otros. En su trabajo de investigación sobre la insurgencia negra en Estados Unidos, McAdam afirma:

A conducive political environment only affords the aggrieved population the opportunity for successful insurgent action. It is the resources of the minority community that enable insurgent groups to exploit these opportunities. In the absence of those resources the aggrieved population is likely to lack the capacity to act even when granted the opportunity to do so. (1982: 43)

Uno de estos recursos es la organización. Pero ¿qué es la organización como recurso fundamental para la movilización en el contexto de nuevas oportunidades políticas? Para Tilly, la organización alude a lo siguiente: “The extent of common identity and unifying structure among the individuals in the population; as a process, an increase in common identity and/or unifying structure (we can call a decline in common identity and/or unifying structure *disorganization*)” (Tilly, 1978: 54).

Los recursos organizativos constituyen una de las principales bases para llevar a cabo la conversión de una nueva oportunidad política en un movimiento. Existen cuatro recursos centrales dentro de la organización: los miembros, la estructura establecida de incentivos de solidaridad, las redes de comunicación y los líderes (McAdam, 1982: 44-47). Por su parte, los organizadores dentro de un movimiento utilizan la confrontación para aprovechar las oportunidades políticas creando identidades colectivas, agrupando a los individuos en organizaciones y promoviendo la movilización contra adversarios que poseen más recursos (Tarrow, 1997: 24). La dimensión organizativa se refiere, básicamente, a los grupos de contacto directo, las redes sociales y sus instituciones centrales.

Aunque esta dimensión no sea una condición suficiente para la emergencia del movimiento, es una condición necesaria. Sin ella la movilización no sería posible.

Existent organizations of the minority community, then, are the primary source of resources facilitating movement emergence. These groups constitute the organizational context in which insurgency is expected to develop. As such, their presence is as crucial to the process of movement emergence as a conducive political environment. Indeed, in the absence of this supportive organizational context, the aggrieved population is likely to be deprived of the capacity for collective action even when confronted with a favourable structure of political opportunities. If one lacks the capacity to act, it hardly matters that one is afforded the chance to do so. (McAdam, 1982: 48)

Pero tampoco la conjunción de oportunidades políticas y recursos organizativos podrían dar cuenta de la emergencia del movimiento. Tal y como afirma McAdam: “Mediating between opportunity and action are people and the subjective meanings they attach to their situations” (1982: 48).

En efecto, hay una dimensión del movimiento que se vincula con las oportunidades y con la organización, pero que no se reduce a ellas: es lo que McAdam llama liberación cognoscitiva (*cognitive liberation*) y Tarrow la movilización del consenso. Ciertamente, no habría movimiento sin una elaboración subjetiva de significados que permitan, en primer lugar, percibir que las nuevas oportunidades que se abren para el movimiento son efectivamente tales. Pero también, en segundo lugar, que hagan posible el reconocimiento de que los intereses comunes son, en efecto, comunes. Las oportunidades y el nivel organizativo inciden en esta percepción subjetiva del grupo. Tarrow describe este elemento como aquellas relaciones de confianza y cooperación que encuentran su base en las identidades compartidas -o “marcos” de sentido- que justifican, dignifican y animan la acción de los movimientos (1997: 47). Los movimientos, mediante recursos ideológicos o retóricos, aportan sentido a sus demandas y reivindicaciones, pero, al mismo tiempo, establecen un “nosotros” frente a un “ellos”, límite que posibilita la confrontación. Se trata de un proceso de formación de identidades colectivas a partir de identidades preexistentes en el que los organizadores – mediante mensajes e imágenes, por ejemplo, pero siempre apoyándose en los marcos culturales más generales que existen en una sociedad determinada- definen a los enemigos y a los aliados del movimiento.

Movement emergence implies a transformation of consciousness within a significant segment of the aggrieved population. Before collective protest can get under way, people must collectively define their situation

as unjust and subject to change through group action.
(McAdam, 1982: 51)

Populismo y organización

Para terminar, expondré la forma según la cual algunos autores que analizan la dimensión organizativa de los populismos los clasifican. En la medida en que, a menudo partiendo de definiciones más o menos próximas a la del populismo como estrategia, se presupone un nivel de organización ausente o al menos bajo en estos movimientos y sus bases sociales, la literatura sobre la relación entre populismo y organización es más bien escasa. A continuación mostraré las tesis de Nicos Mouzelis (1985) y Kenneth Roberts (2006) sobre esta relación y sus propuestas de clasificación. El primero intenta mostrar las diferencias entre las organizaciones populistas y otras formas de organización, especialmente el clientelismo; el segundo, por su parte, propone una clasificación de los distintos tipos de populismo en función de su nivel organizativo.

Para Mouzelis todos los movimientos populares radicales apelan al pueblo contra la oligarquía.²² Éstos pueden ser revolucionarios o populistas. Uno de los elementos que distingue a estos movimientos es, precisamente, el tipo de organización en la que se producen. En este sentido, Mouzelis considera que el populismo es, en tanto que movimiento social típico de sociedades en las que impera una forma de capitalismo periférico o semi-periférico, una *ideología con una orientación radical* –en el sentido de que opone el pueblo a las élites²³–, pero al mismo tiempo un tipo de *organización política plebiscitaria-patrimonial*. Aunque los populismos incluyen a las clases populares previamente excluidas, no pueden modificar más que las relaciones de

²² Ésta y todas las distinciones que expondré a continuación son para Mouzelis distinciones típico-ideales en el sentido de Max Weber. Véase Mouzelis (1985: 342).

²³ Mouzelis retoma esta “orientación radical” de la ideología populista de la primera obra de Laclau sobre el populismo y de los estudios de Canovan, aunque les critica el haber soslayado la dimensión organizativa del fenómeno.

dominación, nunca las relaciones de producción. Los movimientos que logran modificar las relaciones de producción son los movimientos revolucionarios (1985: 344).

Lo que le otorga a la organización populista el carácter plebiscitario es que, básicamente, se funda en el carisma de un liderazgo, realiza una compenetración no mediada institucionalmente entre el líder y el pueblo, y la incorporación de las clases populares es vertical y heterónoma. Para Mouzelis, el populismo no carece de organización sino que su organización es fluida. De hecho, la propia vinculación entre el líder y el pueblo es, en sí misma, una forma de organización. Pero, en cualquier caso, antes de alcanzar el gobierno, los movimientos populistas presentan un predominio del liderazgo plebiscitario; una vez en el gobierno, los líderes plebiscitarios muestran una mayor o menor hostilidad hacia los niveles intermedios institucionalizados.

Los factores que determinan el tipo de inclusión de las clases populares son, por una parte, el tipo de sociedad y, por otra, el grado de organización y autonomía de la sociedad civil (1985: 331-332). En este sentido, el populismo no depende de los rasgos subjetivos del líder –el carisma, por ejemplo- sino ante todo de condiciones estructurales. En términos generales, en las sociedades estructuradas del capitalismo central y que poseen una sociedad civil densamente organizada y autónoma, el modo de inclusión resultante es horizontal (la inclusión es por *integración*). Por el contrario, la inclusión es más bien de tipo vertical en las sociedades del capitalismo periférico o semi-periférico y en las que la sociedad civil es débil y heterónoma (la inclusión es por *incorporación*). La distinción crucial es, de esta manera, la autonomía o heteronomía de los sectores incluidos (1985: 339).

Pero el populismo no es la única forma de incorporación vertical. También el clientelismo implica esta forma y se desarrolla también en la periferia capitalista y en sociedades civiles débiles (1985: 332-334). Mouzelis, por tanto, distingue populismo y

clientelismo en función de la ideología y la organización de cada uno: en el primero, la ideología es antagonista y su organización se basa en un liderazgo plebiscitario en el que las mediaciones son escasas y suponen la heteronomía de las bases; en el segundo, el elemento ideológico no está especialmente enfatizado y la organización intermedia entre las bases y la autoridad tiene una cierta autonomía.

Kenneth Roberts considera que una de las dificultades que se presentan para definir los populismos tiene que ver con la capacidad de los distintos movimientos populistas de asociarse a distintas formas de organización y a diferentes patrones de movilización. De allí concluye lo siguiente: “Given this organization variation, the support of unorganized masses can not be a definitional property of populism, although it is a relative common feature” (2006: 127-128). A partir de dos dimensiones –la organización partidista y la organización de la sociedad civil- elabora una tipología de los populismos basándose en los distintos patrones socio-políticos de movilización y organización que presentan.

De esta manera, del cruce de estas dimensiones, según la organización partidista y la organización de la sociedad civil se muestre como alta o baja, distingue cuatro tipos principales de organizaciones populistas (2006: 129-133): 1) el *populismo orgánico*, en el que la organización partidista es alta y la organización de la sociedad civil también (México bajo Lázaro Cárdenas); 2) el *populismo obrero*, con el mismo tipo de sociedad civil, pero sin el mismo nivel de organización partidista (la Argentina peronista); 3) el *populismo partidista*, donde con poca organización de la sociedad civil aparece un partido organizado fuerte (el aprismo peruano); y 4) el *populismo electoral*, en el que ambas dimensiones son más bien bajas (Velasco Ibarra o Fujimori).

A pesar de estas variantes organizativas, Roberts mantiene la tesis según la cual el populismo es una organización en la que predomina la movilización “desde arriba” y es este rasgo el que lo define. En efecto, afirma que el populismo es una “movilización política de masas, de arriba hacia abajo, conducida por líderes personalistas que desafían a los grupos de élite a favor de un pueblo vagamente definido” (2008: 58).

Capítulo II. Movilización y demandas populares

He dividido este capítulo en tres partes. En la primera describo y analizo la revuelta conocida como *El caracazo* de 1989. En la segunda, muestro la expansión de un ciclo de protestas en el período 1989-1997. En la tercera y última parte, describo y analizo la insurrección militar de febrero de 1992 y presento algunas de sus principales consecuencias. El interés de este capítulo está centrado en mostrar, por una parte, la existencia de amplias demandas sociales insatisfechas en el período estudiado, así como sus caracteres generales y su aumento en número e intensidad; por otra parte, pretendo mostrar los recursos retóricos y organizativos que controlaban los grupos movilizados que enunciaban tales demandas.

1) La movilización de *El caracazo*

La movilización de febrero

El caracazo fue la movilización masiva ocurrida en Venezuela entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989.²⁴ Duró cinco días. El nombre es inexacto porque, en verdad, hubo movilizaciones, durante los mismos días, en otras trece ciudades. Algunas de ellas fueron: Barquisimeto, San Cristóbal, Maracay, Barcelona, Puerto La Cruz, Los Teques, Puerto Ordaz, Valencia, Carora, Acarigua, Ciudad Guayana y Maracaibo. Pero la magnitud de lo ocurrido, tanto por el número de participantes como por los daños ocasionados, señala a la ciudad de Caracas como el centro del conflicto.

El espacio de la protesta fue básicamente urbano y el principal repertorio de acción utilizado por los movilizados fue *el saqueo*. Los acontecimientos de febrero fueron nominados de maneras diversas. La postura oficial se refirió a ellos como *los sucesos*. Los medios de comunicación hablaron de *los disturbios* y *el sacudón*. Algunos

²⁴ Para la reconstrucción de la protesta, me apoyo principalmente en Coronil *et al.* (1991) y López Maya (1999, 2002 y 2005). Me concentro en los eventos que tuvieron lugar en Caracas y las zonas de su periferia. Existe poca información sobre la dinámica de la protesta en las ciudades del interior del país.

sectores de la oposición al gobierno hablaron de *la poblada* o, tras la intervención del gobierno, *el masacrón*. Finalmente, algunos sectores de clases medias y profesionales, pensaron que era *la guerra*.

Las cifras exactas de los muertos en *El caracazo* no son todavía conocidas de modo incontrovertible. Miles de personas fueron detenidas durante los disturbios. Según el Centro de Estudios para la Paz, hasta el sábado 4 de marzo -cuando las jornadas de protesta finalizaron- se habían reportado cerca de cuatrocientos muertos. Otros estudios, basados en datos del Departamento de Estado de Estados Unidos y en entrevistas a periodistas, militares, políticos y médicos, calculan una cifra entre mil y mil doscientos muertos (Coronil *et al.*, 1991: 311). La casi totalidad de los fallecidos fueron civiles, y, por los análisis llevados a cabo en los cadáveres para conocer las causas de las muertes, fueron ejecutados por las fuerzas del ejército (López Maya, 1999 y 2005). Sin embargo, oficialmente sólo se reconocieron doscientos setenta y siete víctimas.

En cualquier caso, *El caracazo* fue la protesta masiva más grande de la historia de Venezuela; también, dado el número de decesos, fue históricamente la protesta reprimida con mayor violencia por parte del Estado (Coronil, 1991: 310). Entre 1976 y 1986, las protestas sociales en contra de los programas de reforma económica acordados entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los gobiernos latinoamericanos, en treinta países, no alcanzaron en total la cifra de doscientos muertos. El número más alto de víctimas mortales, antes de *El caracazo*, tuvo lugar en República Dominicana en 1984; murieron sesenta personas²⁵ (Walton, 1989). Otro elemento importante es que las protestas en los diferentes países, siendo abundantes, se caracterizaron por ser, en general, protestas organizadas –tales como huelgas y manifestaciones sindicales- y con objetivos políticos y económicos precisos. La situación que se presentó en Venezuela, a

²⁵ Nótese que, incluso aceptando las cifras oficiales, no había precedentes.

este respecto, fue diferente: “The Venezuelan riots, however, did not emerge from organized efforts, although they were preceded by years of sporadic conflicts in certain cities, and the looting was aimed at a broad range of businesses, encompassing street vendors and modern supermarkets, workshops and factories” (Coronil *et al.*, 1991: 311).

En diciembre de 1988 había sido elegido como presidente de la República de Venezuela Carlos Andrés Pérez, candidato del partido Acción Democrática (AD). Durante la campaña electoral, Pérez se había presentado como el defensor de los ideales bolivarianos de justicia social e independencia económica. Su objetivo declarado era convertir a Venezuela en el líder de la batalla de los países latinoamericanos, endeudados externamente, contra la banca internacional.

La llegada de Pérez al gobierno implicó, sin embargo, el fin de la tradicional economía protegida y el comienzo de la apertura de mercados. La aceptación del libre mercado implicaba un cambio en la retórica nacional-populista presente desde 1958 (Britto, 1989; López Maya *et al.*, 1989). En lugar de la habitual apelación al desarrollo del pueblo, el objetivo prioritario del gobierno fue el saneamiento económico. En verdad, lo popular y el desarrollo económico habían coexistido desde 1958 en la retórica de la modernización proteccionista, pero lo nuevo en 1989 radicaba en la preeminencia otorgada a las demandas económicas por encima de las demandas populares. Por primera vez desde 1958, el vínculo entre el Estado y el pueblo como base del progreso nacional no era reconocido explícitamente por el discurso oficial. El pueblo se había convertido para el gobierno en: “The undisciplined and lazy product of an unproductive economy” (Coronil *et al.*, 1991: 313). Para el nuevo presidente, Venezuela había vivido hasta entonces en un mundo de falsas ilusiones y era necesario enfrentar la realidad. Desmantelar la estructura proteccionista del pasado permitiría al

pueblo convertirse, tras la disciplina y la instrucción que el mercado proveería, en un pueblo de trabajadores productivos.

El 16 de febrero el nuevo presidente anunció públicamente las primeras medidas del gobierno. Las medidas recibieron el nombre oficial de *El gran viraje* –aunque coloquialmente sería conocido más bien como “el paquete”-, e implicaban recortes de aranceles, suspensión de los controles sobre los precios y eliminación de subsidios. Estaban ceñidas, en sus líneas generales, a las políticas económicas propuestas por el FMI.²⁶

El nuevo programa económico suponía un aumento generalizado de precios. Los sectores asalariados percibían el aumento de los precios como una amenaza, en la medida en que tal aumento no estaba acompañado de un aumento compensador en los salarios. A ello se agregaba el ya alto desempleo en una economía en contracción y la desprotección de los empleos precarios. El fin del proteccionismo estatal afectaba a muchos trabajadores, tanto de sectores populares como de sectores medios: “The working classes no longer felt they shared a common space under the umbrella of the state, and the middle class saw its chance for ascent removed” (Coronil *et al.*, 1991: 314).

Ante la amenaza de un desmantelamiento de las medidas proteccionistas, muchos productores redujeron la producción, y los comerciantes retuvieron en sus almacenes los productos, esperando un aumento de los precios. El acaparamiento produjo conflictos en los mercados entre los vendedores y los compradores. Los compradores no encontraban en las tiendas cercanas a sus viviendas los productos básicos que necesitaban porque los vendedores habían racionado su distribución. Tales conflictos no ocurrieron entre los compradores y los comerciantes que controlaban los

²⁶ Para un análisis de las condiciones económicas existentes en el período, véase Roberts (2003b).

grandes comercios, sino entre los compradores y los vendedores pequeños y medianos, que tenían sus puestos de venta en lugares próximos a las residencias de los consumidores. En estos establecimientos locales, los sectores medios y populares se abastecían de los alimentos básicos diariamente, y sus propietarios eran a menudo inmigrantes portugueses, chinos o libaneses.

El acaparamiento de los productos por parte de los productores produjo un correlativo acaparamiento de productos por parte de los consumidores. Había una gran incertidumbre ante un aumento generalizado de los precios de alimentos y otros bienes. Sólo aquellos consumidores que contaban con recursos o tenían ahorros pudieron continuar haciendo sus compras, aunque a precios superiores. Los sectores populares urbanos, que compraban día a día y solían carecer de ahorros, no podían adquirir lo que necesitaban. Entre los productos que no estaban disponibles, porque los vendedores los almacenaban o porque los ofrecían a precios muy elevados, se encontraban: el pan, la leche, el aceite, la harina, el azúcar, el frijol, el café, la sal, el jabón y el papel higiénico. Se hizo frecuente encontrar carteles en las tiendas en los que se anunciaba: “No hay”. Era necesario recorrer la ciudad, a menudo sin éxito, buscando aquellos comercios en los que se decía que podían encontrarse ciertos productos. Para muchos compradores, los beneficios de los comerciantes aumentaban a medida que el suministro de productos disminuía.

El lunes 27 de febrero de 1989 entraba en vigencia el aumento del 10% en el precio de la gasolina y del 30% en el transporte público decretado por el gobierno nacional.²⁷ Era el primer paso hacia la equiparación de los precios nacionales con los

²⁷ Para medir el alcance de la medida, Coronil *et al.*, afirman: “In this oil-exporting nation, a hike in gas prices was not a simple mercantile decision. It implicated the bond that united the national community: an imagined shared ownership of the nation’s petroleum resources based on its founding legal code. The state’s legitimacy was intimately tied to its ability to control the nation’s formerly foreign-owned oil

precios de los mercados mundiales. Por su parte, la asociación de transportistas (muchos de los cuales eran propietarios privados de sus vehículos) anunció que, dado el aumento general de los precios a nivel nacional, los precios de los pasajes aumentarían más del 100%. Dicho incremento en el pasaje comenzaría a cobrarse a partir del mismo lunes 27 de febrero. De esta manera, desafiaban la decisión del gobierno, que los obligaba a beneficiarse de un aumento no mayor al 30%.

Por otra parte, era fin de mes, por lo que muchos usuarios del transporte público estaban en malas condiciones para recibir este nuevo aumento. Todos estos elementos, presentes en el contexto inmediato, elevaron la indignación de los usuarios hacia el gobierno y hacia los propietarios de los autobuses. La mañana del 27 de febrero comenzó la protesta.

Los disturbios empezaron antes de las seis de la mañana, hora en la que los usuarios se desplazaban hacia sus puestos de trabajo. El primer lugar en el que hubo conflictos fue en Guarenas, una ciudad pequeña cercana a Caracas, desde la que diariamente muchos trabajadores y estudiantes solían desplazarse para trabajar y estudiar. Los protestantes bloquearon las principales vías de tránsito en y hacia Caracas. El metro de la capital, por su parte, había dejado de prestar servicio desde que comenzaron las acciones de protesta.

Pronto comenzaron los *saqueos*²⁸ a tiendas y mercados de comida, es decir, los lugares en los que estaban los productos que no se vendían o no se podían comprar en ese momento. La policía intervino, pero fue desbordada por los movilizados. Ningún grupo político local ayudó a restablecer el orden en los barrios. Algunos policías – especialmente aquellos que percibían los salarios más bajos dentro del cuerpo policial y

industry in the name of the entire pueblo. To equate oil with other commodities on the international market and to demand that people pay dearly for what was considered to be their national birthright was to rupture a moral bond established between the state and the pueblo” (Coronil *et al.*, 1991: 314-315).

²⁸ El término *saqueo* fue utilizado en Venezuela también para referirse al derroche y la corrupción que, para muchos sectores, habían caracterizado a las administraciones públicas de los gobiernos anteriores.

que mantenían entonces una disputa salarial con el gobierno- incluso colaboraron con los saqueadores y tomaron por su cuenta productos. Los productos extraídos de los comercios eran sacados a las calles y distribuidos entre los que estaban presentes.

La protesta fue difusa y sin un centro determinado. Al principio, los *saqueos* fueron indiscriminados en sus ataques, pero limitados a las zonas de residencia de los saqueadores. En algunas paredes aparecía escrito: “El pueblo tiene hambre”. Los propios participantes aportaban esta explicación. La revuelta social se extendería a lo largo de los barrios de la periferia urbana, donde residían principalmente los sectores populares en *ranchos*.²⁹ En la zona industrial de Antímano, algunos residentes de los *cerros*³⁰ penetraron en una fábrica de pasta italiana, cargaron los camiones de la empresa con productos y los distribuyeron en toda la zona. Un joven, mientras repartía comida, gritaba: “Come, pueblo”. Dentro de los sectores populares movilizados se establecieron solidaridades entre miembros de una misma familia y entre familias diferentes. Por momentos, en los barrios populares se consumían botellas de champaña y de brandy, y se asaba carne de res en parrillas. También podía escucharse música con modernos equipos de sonido.

Hubo también ataques a vendedores extranjeros. Éstos estaban, habitualmente, como vecinos de la zona, en contacto directo con los otros residentes. Eran acusados de acaparar los productos y de elevar los precios. Una de las bases de la acusación radicaba en la resistencia de algunos comerciantes a otorgar los pequeños créditos diarios que eran habituales en el pequeño comercio de barrio. En sus tiendas se hizo común observar carteles que decían: “No se fía”. Pero también fueron atacadas incluso algunas

²⁹ Los *ranchos* suelen ser (no siempre son) chabolas, o casas construidas precariamente, ubicadas generalmente en las colinas de las montañas que rodean el valle de Caracas. Estas colinas son habitualmente llamadas *cerros*. Los *ranchos* también se ubican en los intersticios de la ciudad, en barrancos y quebradas a veces cercanos a los barrios de clases medias y ricas. Dicen Coronil *et al.*: “In this *saqueo popular* (popular looting), people came down from the hills and up from the ravines” (Coronil *et al.*, 1991: 316).

³⁰ Véase nota anterior para el término *cerros*.

de sus viviendas. Muchos de estos comerciantes se consideraban a sí mismos como parte del pueblo, sin embargo, en algunas ocasiones la multitud los atacó. Para defenderse, algunos vendedores venezolanos colocaban en sus entradas: “Soy venezolano”.

Pero, en su expansión, el movimiento se extendió desde los barrios de trabajadores hasta las principales calles de Caracas. Estas calles fueron también bloqueadas y se formaron barricadas. Muchos autobuses y otros medios de transporte público dejaron de prestar servicio. Algunos camiones, que llevaban carga de alimentos, fueron interceptados por los agitadores, y su contenido fue, del mismo modo, extraído y distribuido entre los participantes. Fueron incendiadas comisarías de policía y oficinas de AD. Grupos de *motorizados*³¹ rodearon los edificios de FEDECAMARAS, la principal corporación de empresarios venezolana.

Los movilizados, en muchas ocasiones, al penetrar en las entradas de los comercios, portaban banderas nacionales y comenzaban a cantar las primeras estrofas del Himno Nacional: “¡Gloria al bravo pueblo...!”; cuando, posteriormente, la represión estatal inició sus operaciones, muchos repetirían este mismo gesto ante las fuerzas militares. En las paredes se encontraban pintadas que decían: “El pueblo está *arrecho*”, “Basta de engaño” o “El pueblo habló”.³² Algunas de ellas se convirtieron en consignas de la movilización social.

En un primer momento, sobre todo cuando el Estado no había intervenido, sectores de las clases medias participaron también en los *saqueos*. Se observaron coches

³¹ Los *motorizados* son individuos que, en posesión de una moto, realizan labores de mensajería a lo largo de Caracas. Dado su número, conforman un grupo conocido socialmente.

³² El vocablo *arrecho* es un adjetivo de uso coloquial y, en general, poco cortés, para expresar un enojo o enfado importante. Dicen Coronil *et al.* sobre esta gestualidad ideológica de la protesta: “With their revolt, people bluntly shattered the officially constructed illusion that the economy could be adjusted with popular acquiescence. Reflecting with surprise on their collective action, many observed, “We are no longer a passive pueblo”. They expressed a sense of moral affront at the manipulation and silencing of popular demands that was the cumulative experience of this oil- and rent-based democracy. If, as Pérez demanded, it was time to face reality, this was what it looked like from the popular perspective” (Coronil *et al.*, 1991: 318).

dirigiéndose hacia las tiendas e incluso empleados domésticos colaborando con sus empleadores en las operaciones. Algunos de los miembros de sectores más ricos, alarmados por los ataques a la propiedad que estaban teniendo lugar, abandonaron el país con sus familias en aviones privados; otros presionaron al gobierno para que actuara en contra de los *saqueos*. Por su parte, cuando la alarma ante la expansión del movimiento se acentuó, grupos de clase media se organizaron para defender sus propiedades, a menudo formando grupos armados de defensa entre los vecinos.

Las autoridades estatales se mantuvieron paralizadas durante varias horas. El gobierno no intervino directamente hasta el día 28, cuando las protestas se habían hecho descontroladas y masivas. Cuando el Ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, apareció en la televisión para anunciar las medidas del gobierno, sufrió un ataque nervioso y abandonó las cámaras sin decir ninguna palabra. No se dieron explicaciones de lo ocurrido. Ese día, a las seis de la tarde, el gobierno de Pérez decretó el estado de sitio. También se anunció la aplicación de un toque de queda indefinido desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana; las garantías constitucionales –incluida la libertad de prensa– fueron suspendidas. Fue entonces cuando, especialmente en los barrios populares de la capital, los aparatos de seguridad del Estado, tanto policiales como militares, comenzaron a reprimir a los movilizados.³³ Aunque los militares no intervinieron masivamente hasta la tarde del segundo día de la revuelta, desde la mañana del día 28 los cuerpos armados habían comenzado a ocupar las ciudades, ordenando a todos los comercios que cerraran sus puertas. Como los disturbios se hacían mayores y se extendían más, las tropas, al final del día, comenzaron a despejar las calles abriendo fuego contra los presentes.

³³ No es un objetivo de este epígrafe analizar las estrategias represivas utilizadas por el Estado venezolano durante las jornadas de febrero. Para una descripción detallada, véase Coronil *et al.* (1991: 322- 326).

Pérez no aparecería de nuevo en televisión hasta el 1 de marzo. Cuando lo hizo, responsabilizó a los gobiernos anteriores de la situación, separándose de ellos y de quienes acusaban a los movilizados de ser grupos subversivos, criminales e inmigrantes ilegales. Pero no hizo ningún llamado a la unidad nacional ni propuso cambios para el futuro. Su mensaje estuvo dirigido a los gobiernos y oficinas bancarias del extranjero, no al pueblo o los grupos movilizados. Aunque el conflicto se prolongaría hasta el 4 de marzo, ese día afirmó que la situación había sido controlada y solicitó ayuda económica internacional para evitar nuevas agitaciones sociales.

La suspensión de las garantías constitucionales hizo más aguda la represión, aunque ésta ya había comenzado antes. “The militarization of conflict under the suspension of most guarantees meant that “order” was re-established in the barrios by means of massive violence, both indiscriminate and directed” (Coronil *et al.*, 1991: 322). Diez mil escuadrones entraron en Caracas por vía aérea. Dada la geografía del valle de Caracas, los cuerpos de seguridad no tenían otra forma de acceder a la ciudad porque todas las conexiones por tierra habían sido cerradas, interrumpiendo asimismo el suministro de comida. Las fuerzas policiales y militares condujeron a la población fuera de las calles y limitaron con cercos el paso de la gente. Se colocaron tanques para proteger al gobierno y sus principales oficinas, los grandes centros comerciales y los bordes de los barrios ricos. No obstante, salvo algunos pequeños centros comerciales, ninguno de estos establecimientos había sido previamente objeto de los movilizados.

La intervención del gobierno supuso el fin de la fase expansiva de los disturbios marcada principalmente por la ocupación popular de las calles y los *saqueos*. Las fuerzas represivas del gobierno se dirigieron especialmente a ciertos grupos en los barrios considerados por las fuerzas de seguridad como centros de criminalidad y subversión. A pesar de la amplia participación social en los *saqueos*, el gobierno

defendió la idea de que los disturbios habían emanado de los *cerros* que rodeaban Caracas.

Cuando los movilizados, en el punto más alto de la crisis, lograron controlar las calles y los *saqueos* se extendían, reapareció en los discursos de la élite la idea de las masas retrasadas. En condiciones de estabilidad, la retórica populista describía al pueblo en términos positivos; por tanto, virtuoso aunque ignorante, y así necesitado de guía (Britto, 1989). Sin embargo: “In the turmoil of meaning provoked by the mass uprising, dominant discourse transformed the pueblo from the virtuous foundation of democracy into a savage threat to its existence –a barbaric presence” (Coronil *et al.*, 1991: 330).

Los recursos de la movilización de febrero

El caracazo constituye un retrato de la amplitud e intensidad de las demandas sociales insatisfechas por el Estado. Pero ¿cuáles fueron los efectos de *El caracazo* en el proceso político venezolano? Aunque tuvo antecedentes, fue *el inicio del ciclo de protestas* ocurrido entre 1989 y 1998. Pero, además de esto, los sucesos de febrero muestran tres aspectos centrales del proceso político venezolano que comienza con esta fecha: 1) el alcance de la crisis política, de la cual la amplia movilización de febrero es a la vez causa y consecuencia; 2) la retórica nacional-popular de la dinámica de la protesta de febrero; y 3) las formas organizativas de los grupos de base durante esta primera movilización. Analizaré cada uno de estos aspectos por separado y en este mismo orden.

Primero. Los sucesos de *El caracazo* muestran el alcance de la crisis política. En primer lugar, en *El caracazo* los mecanismos de intermediación institucionalizados de la democracia liberal, fundada en 1958, fueron sustituidos por la confrontación directa, incluso violenta, tanto por parte de los movilizados como por parte de las instituciones

del Estado -aunque, ciertamente, con niveles muy diferentes de violencia: los grupos que protestaron utilizaron básicamente la ocupación de calles y el *saqueo* como formas de acción; el Estado, por su parte, respondió con la represión militar.

En segundo lugar, las protestas mostraron el desplazamiento de la base de apoyo del gobierno de Pérez y también de los partidos tradicionales (principalmente, de AD y COPEI) y la existencia de demandas populares que no estaban siendo satisfechas por el Estado. Las elecciones de 1988, en las que ganó Pérez, fueron las últimas elecciones en las que los partidos políticos tradicionales obtendrían un amplio respaldo social. Los grupos urbanos que se incorporaron a la protesta –grupos que, como señalé, no sólo pertenecían a los sectores populares- mostraron su rechazo a las nuevas políticas económicas del gobierno.

Un tercer elemento importante fue la escisión dentro de los aparatos de seguridad del Estado, que se puso de manifiesto en las primeras horas del conflicto, cuando algunos sectores de la policía se sumaron a los *saqueos*.

Segundo. Los disturbios de febrero informan sobre algunas condiciones de recepción de la articulación populista posterior. En efecto, *El caracazo* mostró que las condiciones retóricas de recepción de una interpelación nacional-popular estaban, hasta cierto punto, dadas de antemano. Algunos de los grupos movilizados se presentaron a sí mismos, mediante gritos, declaraciones y/o pintadas, como *el pueblo*. Esta autoidentificación estaba vinculada a un sentido activo del pueblo y de lo popular, y manifestaban indignación ante las decisiones contenidas en *El gran viraje* anunciado el 16 de febrero. Por parte de los movilizados, hubo una reiterada apelación a la simbología patriótica y al imaginario nacional-populista tradicional mediante la entonación del Himno Nacional y también en los mensajes de algunas pintadas en las zonas ocupadas. Del mismo modo, hubo ataques tanto a las viviendas como a los

negocios de algunos comerciantes extranjeros. En general, la protesta estuvo marcada por una confrontación directa con los sectores empresariales, en particular los pequeños y medianos comerciantes cuyos negocios fueron el objeto principal de los saqueadores. Los edificios de FEDECAMARAS, la principal corporación de grandes empresarios, fue atacada por algunos grupos (los *motorizados*) durante los disturbios. Aunque no se reportaron ataques directos a oficinas del gobierno nacional, algunas sedes locales de AD -el partido de gobierno- fueron destrozadas.

Tercero. Los sucesos de febrero muestran la dinámica organizativa de la movilización. A pesar de la fuerza e intensidad de la movilización social (el carácter multitudinario, la ocupación de las calles, la fuerza de los *saqueos*, los días de duración), las protestas no mostraron grandes organizaciones de base. En este sentido, *El caracazo* fue una protesta muy poco organizada: fue, ante todo, un episodio de confrontación resultante de una agregación de masas. Esto explicaría, en parte, el carácter desordenado de la revuelta. Salvo algunas excepciones, los movilizados como conjunto no poseían armas, aunque cometieron actos de violencia contra negocios, viviendas, coches particulares, camiones de carga, edificios y oficinas. Que comenzara ese día y no otro no dependió de un plan previo de algún grupo o dirigencia, sino de la coyuntura política del momento: ese día los conductores de transportes públicos decidieron aumentar el precio de los pasajes (más de lo exigido por el gobierno). Este aumento excesivo era en sí mismo una forma de protesta organizada por las asociaciones de transportistas contra las medidas del gobierno. Ciertamente, había un ambiente previo al 27 de febrero que convertía a la situación en una situación propicia para la agitación, en particular la escasez y el encarecimiento de productos básicos. Los medios de comunicación, por una parte, tuvieron un lugar central en la expansión de la protesta por las catorce ciudades; por otra, que el gobierno no interviniera sobre la revuelta hasta el día 28, especialmente

al final de la tarde, pudo haber impulsado a algunos grupos a incorporarse a la protesta. La pasividad inicial del gobierno constituyó una oportunidad política que algunos grupos aprovecharon para entrar en la revuelta. Algunos sectores policiales se sumaron al *saqueo* y cooperaron directa o indirectamente en su expansión. La acción de los medios de comunicación y la omisión del gobierno crearon, hasta cierto punto, las condiciones propicias que las pocas organizaciones de los movilizados no podían crear por sí mismas. En todo caso, las organizaciones más importantes que hicieron posible la movilización fueron las redes vecinales y las relaciones entre familias de una misma zona residencial. Esto explicaría, parcialmente, por qué los movilizados actuaron en sus propios barrios: allí ocuparon las primeras calles, saquearon los primeros comercios y distribuyeron las mercancías extraídas.

Los tres aspectos presentes –crisis política, contenido retórico, bases organizativas- dan cuenta de la desarticulación entre amplias demandas sociales y las instituciones estatales. La desarticulación adquirió la forma de una política de confrontación –o antagonismo- entre, por una parte, *el pueblo*, y, por otra, el Estado, el gobierno, los empresarios y, hasta cierto punto, los extranjeros.

Por último, el anuncio de las nuevas políticas económicas, en el contexto en el que tuvo lugar –la situación postelectoral y la situación económica de 1989-, y la posterior represión *El caracazo*, tuvieron como efecto –por supuesto, no planeado- unificar demandas dispersas en virtud de su *confrontación con* el Estado y los grupos empresariales, ambos considerados como defensores de las nuevas políticas económicas y de la decisión de reprimir militarmente. La represión de febrero tuvo el *efecto articulador* que los grupos de base no podían producir en ese momento por sí mismos, dados los escasos recursos organizativos que tenían a su disposición. En este sentido, el *antagonismo* no fue radicalizado por los propios movilizados mediante enunciados

retóricos o formas organizativas; aunque el antagonismo ya estaba ciertamente inserto en la protesta, la radicalización posterior dependió, en buena medida, de la decisión gubernamental de aplicar técnicas represivas, inusuales por su magnitud y por la presencia militar.

2) La proliferación e intensificación de demandas populares (1989-1997)

Tras los acontecimientos de *El caracazo*, hubo un proceso expansivo de movilización social.³⁴ En el período 1989-1997 se movilizaron en Venezuela, literalmente, *todos los sectores sociales en todas las regiones* (Salamanca, 1997: 247). Entremedias de estas movilizaciones pueden ser encontradas las demandas populares que, de una u otra manera, no estaban siendo satisfechas por el Estado. Una de las características principales de las demandas populares venezolanas a partir de 1989 fue tanto su *proliferación en número* como la *intensificación de sus contenidos*. En cuanto a sus recursos organizativos, éstos fueron más bien bajos –aunque no inexistentes–, lo que contribuyó a una *dispersión o desarticulación* de las mismas.

Mediante repertorios de acción conocidos como marchas, manifestaciones y paros laborales, hubo a partir de 1989 cuatro sectores en los que se presentaron las mayores movilizaciones: salud, educación, justicia y transporte. Los conflictos de mayor intensidad se dieron en el sector de la salud; fueron movilizaciones por sectores, regionales y nacionales. Su demanda principal era el cumplimiento de los contratos colectivos. Los conflictos vinculados al transporte, aunque menos intensos, provocaron amplios efectos políticos, en la medida en que afectaban a un número ingente de usuarios. Su principal queja era la inseguridad bajo la que estaban forzados a realizar su

³⁴ Para el recuento de esta sección, me baso en los trabajos de López Maya (1997) y Salamanca (1997). Para observar el proceso de intensificación de las movilizaciones sociales, véanse los cuadros 1 y 2. Como muestran los datos, tras el intento de golpe de Estado de 1992, hubo un aumento de las movilizaciones. Aunque no es un objetivo de esta investigación, cabría sugerir que una razón de este fenómeno podría ser la modificación de la estructura de oportunidades políticas tras el debilitamiento del gobierno de Pérez.

trabajo. En el sector educativo hubo movilizaciones en todos los niveles escolares, ocasionando a menudo paralizaciones de actividades por largos períodos de tiempo. Los miembros del sector educativo demandaban mejoras salariales e inversión en las desgastadas infraestructuras educativas. Los jueces, y en general los trabajadores del sector judicial, exigían los pagos de los bonos acordados con el gobierno y también mejoras salariales. Con el repertorio del disturbio, las movilizaciones estudiantiles fueron, al mismo tiempo, intensas.³⁵ Los estudiantes protestaban contra la nueva política económica y las privatizaciones del sector público (especialmente la privatización de la educación superior o universitaria). Pero también contra la represión estatal, el aumento del precio de la gasolina y los abusos en el cobro de las tarifas de transporte público (irrespeto al precio del pasaje estudiantil por los chóferes y otros maltratos). También hubo paros cívicos –llevados a cabo por asociaciones de vecinos, sindicatos obreros, gremios diversos, colegios profesionales, entre otras- contra la política económica, la corrupción, el desempleo y por situaciones locales.

Cuadro 1

Protestas sociales*: octubre 1989-septiembre 1994

Modalidades**	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
Total	675	546	873	1047	1096

*Fuente elaboración propia a partir de López Maya, 1997.

**Modalidades incluye: pobladas, marchas, cierres de calles, tomas de establecimientos, saqueos y disturbios, huelga de hambre, paros cívicos y otras.

Cuadro 2

Protestas sociales*: octubre 1992- septiembre 1997

Modalidades**	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
Total	1047	1099	561	534	550

*Fuente elaboración propia a partir de Salamanca, 1997.

³⁵ Para la dinámica particular de las movilizaciones estudiantiles en Venezuela, véase López Maya (2002).

Del mismo modo, los *saqueos* continuaron, si bien ninguno alcanzaría el nivel expansivo de *El caracazo*. Aparecieron también nuevos repertorios de acción durante el ciclo de protestas. Destacó el llamado *cacerolazo* del 10 de marzo de 1992 –un mes después del intento de golpe de Estado de febrero y estando aún vigente la suspensión de garantías constitucionales, incluido el derecho de manifestación-. En dicha ocasión se exigió, por primera vez de modo directo desde sectores sociales no organizados, la renuncia de Pérez. Esta demanda se mantendría como una de las demandas centrales de los grupos movilizados hasta la efectiva salida de Pérez del gobierno nacional. El *cacerolazo* de 1992 se extendió a barrios y localidades tanto de clases altas como de sectores medios y populares, en Caracas y en otros estados. Las reseñas de prensa señalan que algunos de los lemas de la protesta fueron: “El diez a las diez, ¡abajo Carlos Andrés!” o “¡Viva Chávez!”. En algunos lugares, tal y como ocurrió durante *El caracazo*, se cantaba el Himno Nacional. Los *cacerolazos* se repetirían posteriormente, en distintos contextos. Otros repertorios de acción nuevos, determinados en parte por las respuestas represivas del Estado, fueron los *apagones de luz* por el aumento de las tarifas eléctricas, los *pitazos* en varias ciudades por diversos temas y la práctica de *encender las luces de los coches* para protestar por la inseguridad. Estas protestas no fueron convocadas por partidos políticos o grandes sindicatos, sino por pequeñas organizaciones sociales. Durante estas movilizaciones surgieron demandas como la convocatoria de un referéndum popular, la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, la renuncia de Pérez y la restitución de las garantías constitucionales. También se dieron *encadenamientos* de grupos como los buhoneros (trabajadores de la economía informal) y discapacitados; estos grupos solían realizar sus acciones frente a oficinas públicas y demandaban el reconocimiento de lo que consideraban su derecho a trabajar en las calles.

De esta manera, en la movilización social venezolana hubo un aumento en número, una extensión a todos los grupos sociales (más allá de los partidos políticos y los principales sindicatos nacionales) y una mayor intensidad en las demandas populares. Asimismo, las movilizaciones mostraron un paso de repertorios conocidos y convencionales hasta repertorios nuevos, confrontacionales y violentos. Las demandas populares fueron amplias y diversas: reivindicaciones salariales, contra el aumento de los precios en transporte, contra el incumplimiento de pagos del gobierno, contra la deficiencia de los servicios públicos, contra el alza de precios de productos básicos, contra la política económica, contra la inseguridad y contra la represión policial. Las demandas de base no satisfechas, colocadas muchas de ellas dentro del ciclo de movilización, provinieron de todos los sectores sociales: grupos de vecinos demandando servicios básicos; ex funcionarios de la administración pública demandando cobertura social ante los despidos por recortes presupuestarios; agrupaciones de pensionistas demandando el cumplimiento de acuerdos colectivos en materia de seguridad social y algunas promesas políticas; movimientos estudiantiles demandando mejores condiciones en escuelas y universidades, así como mejores perspectivas de empleo en el mercado de trabajo; trabajadores de la economía informal demandando mejores condiciones de trabajo; movimientos sindicales de base –sobre todo, de la industria textil y siderúrgica- demandando democracia sindical y ampliación de las políticas sociales. En términos generales, se demandaba al Estado intervención en sectores sociales, asignación adecuada de los recursos presupuestarios, cumplimiento de los compromisos gremiales asumidos y reparación de los efectos de la contracción del sector privado.³⁶

³⁶ Tal fue el caso, por ejemplo, de las protestas de los ahorristas, que comenzaron estando dirigidas contra los banqueros, pero, una vez que éstos habían en su mayoría abandonado el territorio, se dirigieron al Estado.

Sin embargo, estas movilizaciones no alcanzaron, en cuanto a sus recursos organizativos y retóricos, el patrón de permanencia en la política de confrontación que permitiría considerarlas como movimientos sociales.

No logran constituir movimientos sociales, es decir, que pese al elevado número de protestas, por casi siempre los mismos actores, las mismas no poseen organización suficiente como para articular acciones de mayor envergadura que la de expresar un reclamo, una opinión o de oponerse a determinada situación o política pública, en forma sectorial y aislada. (Salamanca, 1997: 248)

En este sentido, en términos generales, cada sector social enunciaba sus demandas particulares y buscaba respuestas específicas de alguna instancia estatal especial.³⁷ Por tanto, el mapa de las demandas populares en Venezuela, todas en ellas en buena medida locales y dispersas, mostraba *más disgregación que articulación*. Sus recursos organizativos eran escasos (lo que impedía su expansión y permanencia en el tiempo) y mostraban una retórica particularista y sectorial, con algunos elementos nacional-populares.

3) La madrugada de las tanquetas: insurrección militar bolivariana en 1992

Dos días después de los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, la prensa venezolana publicaba la Proclama Oficial del –entonces desconocido- Movimiento Bolivariano que había intentado derrocar al gobierno de Pérez. En dicha Proclama podía leerse lo siguiente:

Esperamos las expresiones de alegría de un pueblo que ha sido permanentemente golpeado y que nos negamos nuevamente a masacrar como el 27 de febrero: el pueblo que nos negamos a hacer regresar a la paz de las urnas, a la paz de los sepulcros. (Documento en Del Naranco, 1992)

³⁷ La dificultad de las protestas venezolanas para dar lugar a patrones de confrontación más o menos permanentes y así a movimientos sociales, no comenzó en 1989. Por el contrario, ya desde las primeras investigaciones sobre movimientos sociales en Venezuela se había constatado este hecho. Véase Gómez Calcaño (1985).

La noche del tres de febrero de 1992, el presidente Pérez volvía de una reunión en Davos para promover las inversiones de capital extranjero en Venezuela. Su última escala antes de arribar a Venezuela había sido Nueva York.³⁸ En contra de la costumbre, el presidente fue recibido en el aeropuerto internacional de Maiquetía por el Ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, quien le anunció lo que, hasta ese momento, eran sólo informaciones confusas. Pérez se dirigió a su residencia oficial, llamada La Casona, en el centro de la ciudad de Caracas. Las medidas de seguridad en el aeropuerto habían sido reforzadas. Desde aproximadamente las once de la noche del tres de febrero, un grupo de oficiales del ejército, de graduación media o baja, encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, había iniciado un intento de golpe de Estado. El nombre en clave que los insubordinados habían dado a la operación era “Cumpleaños”. Estaba comenzando lo que el escritor venezolano José Ignacio Cabrujas llamaría, en una columna de prensa publicada en días posteriores, *la madrugada de las tanquetas*. Los otros jefes de la insurrección eran Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras, Jesús Urdaneta Hernández y Francisco Javier Arias Cárdenas. El grupo militar alzado había adquirido el nombre de COMACATE: el nombre recogía las primeras sílabas de coroneles, mayores, capitanes y tenientes. También eran conocidos, dentro de las Fuerzas Armadas, como los *bolivarianos*. Aparte de las acciones en Caracas, cuyas tropas eran comandadas por Chávez, los ejecutores del alzamiento fueron soldados de tropas de Maracay, Maracaibo y Valencia.

El teniente coronel Urdaneta Hernández se encargó de las operaciones en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Comenzaron a las once de la noche y fueron exitosas. A las once y cuarenta y cinco minutos comienzan los movimientos subversivos en Valencia y Maracaibo, capitales de los estados Carabobo y Zulia, respectivamente.

³⁸ La descripción de los acontecimientos del 4 de febrero está basada en las reseñas de prensa publicadas en Rodríguez Valdés (1992) y Del Naranco (1992). Han sido utilizados, asimismo, los documentos y análisis de López Maya (2005) y Zago (1992).

En la primera, las tropas bajo el mando del teniente coronel Ortiz Contreras, en quince minutos, lograron controlar la ciudad. A la misma hora, en Maracaibo, los militares de la unidad de artillería misilística Monagas, bajo el mando del teniente coronel Arias Cárdenas, lograron detener al gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz, del partido COPEI. Entre todas las que tuvieron lugar esa noche, la operación zuliana fue la más efectiva en la medida en que cumplió con todos sus objetivos. Desde Maracay, Valencia y Maracaibo, las tropas insurgentes, que pronto alcanzaron sus principales objetivos militares, esperaban los resultados de las operaciones en Caracas.

Los rebeldes se habían planteado varios objetivos en Caracas: 1) el teniente coronel Acosta Chirinos tenía que controlar la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda (también llamada aeropuerto La Carlota); 2) el Capitán Miguel Eduardo Rodríguez Torres tenía que dirigirse a la residencia presidencial de La Casona y apresar al presidente Pérez si se encontraba allí;³⁹ 3) los blindados del Batallón Ayala, al frente de cuyos movimientos estaba el Mayor Manuel Díaz Reyes, tenían la obligación de rodear el Palacio de Miraflores, el palacio de gobierno. Los otros objetivos eran tomar el canal de televisión llamado Radio Caracas Televisión (RCTV) y también la televisora del Estado. El teniente coronel Chávez Frías debía permanecer en el edificio del Museo Militar, situado en una colina desde la que se podía controlar con la vista el Palacio de Miraflores. El objeto de su presencia en este punto era coordinar las operaciones conjuntas y, si llegara el caso, apresar al presidente.

Los militares rebeldes que operaban en Caracas pronto cercaron La Casona con morteros, bombas de mano y ráfagas de ametralladora. Pero Pérez, informado unos

³⁹ Una de las principales discusiones en torno al intento golpe de febrero fue si entre los objetivos de los insurrectos se encontraba ejecutar al presidente Pérez o si, por el contrario, intentaban sólo apresarlo vivo y someterlo posteriormente a juicio. La primera versión es la que aportó el gobierno y el Congreso Nacional a partir del 4 de febrero. La segunda es la versión de los oficiales que planearon y dirigieron el golpe fallido.

minutos antes de la situación, hizo sólo una breve estancia en su residencia y, con la ayuda de algunos militares leales al gobierno, se trasladó al Palacio de Miraflores, sede principal del gobierno. Eran poco más de las doce horas de la noche. No obstante, algunos minutos después, las acciones militares de los insurrectos se dirigieron también contra este segundo edificio, utilizando tanques y tanquetas, por lo que Pérez tuvo que huir de nuevo. Era ya la una de la mañana del cuatro de febrero. Fue ayudado a escapar en un vehículo por Iván Carratú Molina, Contralmirante y jefe de la Casa Militar, y por algunos de sus edecanes. Los insurrectos, por su parte, no se percataron de la huida. Pérez se refugió en uno de los principales canales nacionales de televisión, llamado Venevisión, lugar desde el que, aproximadamente a las dos de la madrugada, dio un mensaje a la Nación. En él solicitaba el respaldo social al gobierno democráticamente electo y ordenaba a los militares leales controlar a los rebeldes. El escenario del mensaje presidencial había sido improvisado con premura y mostraba un aspecto sobrio. Sin embargo, la aparición televisiva del presidente contribuyó de manera decisiva a la desmovilización de los militares que pretendían derrocarlo y al reforzamiento de la fidelidad de las unidades militares del Ejército; en contra de sus planes, los rebeldes no habían podido ocupar ningún canal televisivo desde el que poder emitir los mensajes que habían grabado previamente.

Los militares alzados habían tenido éxito en las ciudades de Maracaibo, Maracay y Valencia, pero Caracas no fue tomada ni el presidente Pérez retenido. El jefe de la rebelión, Hugo Chávez, permaneció durante horas en el Museo Militar. En algunos puntos importantes de la ciudad –como en el aeropuerto militar de La Carlota, cerca de la residencia presidencial- hubo una larga resistencia por parte de los rebeldes, pero ya en horas de la mañana las tropas del gobierno habían controlado la insurrección. Despejada la situación para el gobierno, Pérez volvió al Palacio de Miraflores y desde

allí se dirigió a la población a través de las cámaras de televisión por segunda vez. Unos minutos antes de esta segunda aparición, el jefe del principal partido de la oposición, el *copeyano* Eduardo Fernández, había enviado un mensaje nacional televisado de apoyo irrestricto al gobierno. Poco antes también, los alzados que amenazaban al Palacio de Miraflores habían entregado formalmente sus armas. El golpe de Estado, en términos militares, había fracasado.

Durante la jornada, del lado de los insurrectos participaron aproximadamente cinco mil oficiales y quince unidades del Ejército Nacional. En ese momento las Fuerzas Armadas contaban con ciento diez unidades a lo largo de todo el territorio nacional. Para la tarde del 4 de febrero habían muerto setenta y ocho personas y más de mil militares rebeldes habían sido arrestados (Norden, 1996).

A partir del 27 de febrero de 1989, los rumores sobre posibles golpes de Estado eran ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Dentro de las Fuerzas Armadas había diferentes grupos que estaban de una u otra manera involucrados en movimientos irregulares (Del Naranco, 1992: 145-150). *Los notables*⁴⁰ eran un grupo compuesto por coroneles y comandantes que, desde fechas anteriores a 1992, se reunían para discutir sobre diferentes temas; para la fecha del primer intento de golpe de Estado, habían alcanzado puestos de alto mando dentro de las Fuerzas Armadas. Un segundo grupo era el formado por *Los bolivarianos* –o COMACATE-, formado alrededor de la Cátedra Bolivariana de la Academia Militar, y cuyas ideas se basaban principalmente en las obras de Simón Bolívar. Estaba conformado por oficiales de baja graduación dispersos en todas las unidades del ejército. De este grupo emergería la dirigencia del golpe de febrero. El último grupo –que más bien era un conjunto de grupos, porque cada

⁴⁰ No hay que confundir este grupo con el “Grupo de los notables”, de carácter civil, y al que me referiré más adelante.

uno de ellos actuaba por separado- estaba compuesto por militares retirados, muchos de los cuales habían participado en las intentonas golpistas en los años sesenta (*El Carupanazo, El Porteñazo y El Castroleonazo*).

A pesar de todos estos movimientos, la Dirección de Inteligencia Militar no previno el golpe de febrero, lo que puso de manifiesto la desarticulación interna de las estructuras militares.

Al mediodía, a instancias del gobierno nacional, el teniente coronel Chávez, cabecilla de la asonada militar, rodeado por los militares que lo habían detenido y ante las cámaras de televisión, dio una alocución en la que notificaba su derrota militar en Caracas y a la vez llamaba a sus compañeros en otros lugares del territorio a deponer las armas. El lugar elegido para las declaraciones del teniente coronel fue el salón “General en Jefe Simón Bolívar” del Ministerio de la Defensa. El mensaje fue transmitido al mismo tiempo por todos los principales medios de comunicación, tanto de radio como de televisión. Fue una alocución en directo, lo que suponía que el gobierno no había dictado el contenido del mensaje ni lo había grabado previamente. Era la primera imagen de los militares rebeldes conocida por la población. El jefe de los alzados aparecía vestido con uniforme militar y con la boina roja que utilizaban los miembros de la Brigada de Paracaidistas del Ejército Nacional.

El texto completo de la alocución fue el siguiente:

Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas

situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.⁴¹

La alocución del teniente coronel Chávez contuvo 169 palabras y fueron pronunciadas en aproximadamente un minuto y quince segundos.

El objetivo de la insurrección militar era derrocar al gobierno de Pérez e instaurar provisionalmente una Junta Militar, destituir mediante un referéndum a todos los miembros electos del Congreso Nacional y a los magistrados del Poder Judicial, y, por último, convocar una Asamblea Nacional Constituyente⁴² (Zago, 1992). Uno de los efectos no planeados de la insurrección fue, sin embargo, la aparición de un liderazgo nuevo e incluso de una nueva iconografía. En efecto, a los pocos días del intento de golpe de Estado, por las principales ciudades de Venezuela se vendían miles de fotos del “comandante Chávez”, con el traje militar y la cabeza cubierta por la boina roja de las brigadas de paracaidistas. Algunos cronistas señalaron que pronto comenzó a ser considerado por algunos grupos como una figura sagrada, ante cuya imagen encendían velas (Del Naranco, 1992: 188). Otra crónica de prensa subraya el mismo fenómeno:

Es indudable que los objetivos primordiales de purificar la democracia y cortar por lo sano las corrupciones políticas y empresariales han creado en la figura de Chávez, cabeza visible del alzamiento, un aura de popularidad que el gobierno de Carlos Andrés Pérez no ha podido borrar pese a todas las presiones que ha hecho para ello. Chávez es aclamado en las

⁴¹ Texto transcrito a partir de documento gráfico publicado en www.youtube.com

⁴² Cabe recordar que hubo un segundo intento de golpe de Estado en noviembre del mismo año.

manifestaciones, y su gesta plasmada en graffitis [sic] por las paredes de las ciudades de Venezuela. Él ha dicho: “Ya no me pertenezco, soy del pueblo”. Se cree un redentor, y lo más importante es que su causa ha logrado crear conciencia. En los cuarteles los cadetes lo admiran, guardan su fotografía, lo mismo que el pueblo. De la noche a la mañana se ha convertido en un mito en un país que por su idiosincrasia necesitaba con urgencia uno para mantener viva la esencia del milagro y de la magia. (Del Naranco, 1992: 187)

Los símbolos asociados colectivamente a los *bolivarianos* también se expandieron, en particular la boina roja utilizada por Chávez Frías en su corta alocución.

Antes de Chávez, la boina roja era parte de los símbolos de los comunistas venezolanos, razón por la cual, se le apreciaba con reserva y no llegó nunca a tener la significación de emblema moral que ha alcanzado en el curso de la Revolución Bolivariana. Hablar de la boina roja es hablar de Hugo Chávez y de Revolución Bolivariana. (Sanz, 2004: 30)

La textura retórica del golpe fallido fue nacionalista y bolivariana. En la tensa coyuntura del 4 de febrero, cuando el teniente coronel Hugo Chávez se presentó ante los medios de comunicación para pedir a sus compañeros la deposición de las armas, calificó su alocución como un “mensaje bolivariano” y definió por primera vez al grupo de los alzados como “movimiento militar bolivariano”. En los meses siguientes comenzaría a conocerse más la conformación ideológica del MBR-200 y los programas políticos que pretendían llevar a cabo una vez que tomaran el poder.⁴³ También los alzados recogían demandas específicamente militares. Entre ellas destacaban cuatro especialmente relevantes para este sector: 1) la demanda de no utilizar al ejército en las prácticas represivas del Estado frente a las movilizaciones sociales; 2) la demanda de reducir la injerencia de los partidos políticos en los procedimientos de ascenso y distribución de cargos dentro del ejército; 3) la demanda de defender la soberanía territorial del Estado en la coyuntura crítica en la disputa por la soberanía del Golfo de

⁴³ Todos estos elementos del MBR-200 serán analizados en el siguiente capítulo.

Venezuela con el Estado colombiano; y 4) la demanda de ampliar los mecanismos de participación política de los militares –que como cuerpo, según la Constitución de 1961, tenían el carácter de “obedientes pero no deliberantes”.

El principal recurso organizativo de los militares rebeldes era, como es evidente, la estructura jerárquica sobre los soldados de la tropa y la posesión de armamento militar. Aparte de la popularidad de los militares insurrectos, su liderazgo se presentaba expresamente con una voluntad hegemónica o de articulación de demandas a nivel nacional.

Los militares del 4 de febrero de 1992 pretendían aprovechar las oportunidades abiertas por el amplio rechazo social al gobierno de Pérez. La crisis de representación política supuso una nueva estructura de oportunidades para los militares rebeldes. Si bien el MBR-200 había sido fundado en 1983 y desde entonces sus miembros consideraban necesario oponerse a la política que imperaba en Venezuela, lo que explica el momento –por decirlo así, el cuándo- de la insurrección, aparte de ciertos elementos contingentes, fue precisamente la crisis política agudizada desde 1989.

Ahora bien, si los golpes fueron el efecto de la crisis y un intento por parte de ciertos grupos militares de aprovechar las oportunidades abiertas por la misma, también terminaron provocando su expansión.

Ciertamente, las insurrecciones militares de 1992 mostraban al mismo tiempo varios aspectos del proceso político venezolano. En primer lugar, mostraban la ruptura del mecanismo de control civil sobre el estamento militar, así como el de la relación de mando-obediencia entre los oficiales de rango superior y los oficiales de rango medio y bajo, ambos instaurados en el régimen democrático-liberal de 1958. En segundo lugar, mostraba la existencia de una demanda específicamente militar que permanecía

insatisfecha. Pero, en tercer lugar, la emergencia de un nuevo grupo (el MBR-200) y una nueva dirigencia política de origen castrense (los dirigentes del golpe fracasado, especial aunque no exclusivamente Hugo Chávez Frías), que estaban dispuestos a aprovechar las oportunidades políticas presentes, y con pretensiones explícitas de convertirse en representantes o articuladores políticos de los amplios sectores sociales – muchos de ellos insertos ya en un ciclo de movilización- cuyas demandas no estaban siendo satisfechas por el régimen democrático-liberal.

A pesar del fracaso en términos militares de los intentos de golpe de Estado (fracaso que impidió a los insurrectos obtener los objetivos políticos que se habían propuesto –básicamente: derrocar al gobierno de Pérez, tomar el poder, instaurar un gobierno de transición y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente), los alzamientos de 1992 provocaron un conjunto de efectos políticos de largo alcance. A diferencia de los escasos efectos producidos por el 27 de febrero, en esta ocasión el gobierno tuvo que iniciar un conjunto de negociaciones con partidos políticos y dentro de las Fuerzas Armadas.

Hubo, para empezar, consultas a nuevos actores. En los días siguientes a la intentona golpista, el presidente Pérez llamó a la conformación de un Consejo Consultivo -presidido por el historiador Ramón Velásquez y compuesto por intelectuales reconocidos- para que hiciera recomendaciones al gobierno para atajar la crisis política. El diagnóstico del Consejo fue que la situación política de Venezuela era muy crítica. En este sentido, algunos sectores recomendaban la renuncia del presidente a su cargo. Pérez no aceptó esta propuesta. Por otra parte, las primeras reacciones del presidente fueron contrarias a un cambio en las políticas económicas. Pero el 5 de marzo anunció públicamente, con un tono de rectificación, algunas medidas que introducían modificaciones en el “paquete” económico, en particular, la congelación de

los precios de algunos productos y la suspensión del alza al precio de la gasolina. Se habló entonces también de combatir la corrupción y hubo un cambio en el gabinete. Como señalé anteriormente, 10 de marzo tuvo lugar el *cacerolazo*, acto organizado para protestar en contra del gobierno. Sin embargo, después de varias reuniones, algunos miembros del Consejo –especialmente el economista Domingo Maza Zavala– declararon públicamente su desconfianza sobre la voluntad del gobierno de modificar realmente las políticas económicas.

Los intentos de golpe también pusieron de manifiesto la existencia de problemas dentro del sector militar. Después de febrero de 1992, la situación dentro de las Fuerzas Armadas era muy tensa. El Comandante General del Ejército, Pedro Rangel Rojas, ordenó el cambio de los nombres epónimos de las quince unidades del Ejército que habían estado involucradas en la insurrección de febrero. Otro cambio importante fue la eliminación de la boina roja utilizada por las unidades de infantería de paracaidistas y que se había convertido en un emblema del teniente coronel Chávez y de sus compañeros alzados. El ministro de la Defensa visitó personalmente a los heridos, tanto del grupo rebelde como de los oficialistas. Por otra parte, organizó asambleas militares formadas por mil quinientos oficiales cada una, en las cuales se quisieron analizar las distintas percepciones dentro de las Fuerzas Armadas. El ministro Ochoa Antich pudo comprobar la existencia y amplitud de una demanda militar. Por una parte, grupos de militares jóvenes estaban en desacuerdo con las políticas del gobierno; además, muchos de ellos sufrían las mismas condiciones económicas que el resto de los sectores populares a nivel nacional. En general, existía un amplio rechazo hacia el problema de la corrupción. Tras el golpe de febrero, las Fuerzas Armadas estaban divididas entre sí y, en buena medida, separadas del gobierno.

Dentro de los grupos civiles la situación no era mejor. El 4 de febrero los principales partidos políticos y sindicatos obreros apoyaron formalmente al gobierno; pero ninguno de ellos convocó a sus bases para una movilización a favor del gobierno y la democracia. En sesión extraordinaria del Congreso Nacional, se aprobó un decreto de suspensión de las garantías constitucionales (documento en Rodríguez Valdés, 1992). En dicho decreto se asumía como un hecho que el objetivo de los insurrectos era llevar a cabo un magnicidio contra el presidente Pérez. Ese mismo día, Rafael Caldera - firmante del Pacto de Punto Fijo, ex presidente de la República, senador vitalicio y principal dirigente histórico del Partido socialcristiano COPEI-, rompiendo el “pacto de silencio” acordado por las cámaras del Congreso para postergar el análisis de las causas del intento de golpe (con el objeto de evitar que con tales análisis se restara contundencia a la condena a los golpistas), dio un discurso en el que hacía profundos reclamos a Pérez y llamaba con urgencia a los cambios (documento en Rodríguez Valdés, 1992). El diputado Aristóbulo Istúriz, maestro, importante líder de La Causa R, se sumó de inmediato a este pronunciamiento.⁴⁴ El objetivo de la facción oficialista era que los diputados y senadores condenaran unánimemente las acciones de los rebeldes y expresaran un apoyo incondicional al presidente Pérez. La respuesta del partido oficialista al discurso del senador Caldera fue dada por el diputado David Morales Bello quien, rebatiendo la intervención del senador Caldera, interrumpió en un momento sus palabras para exigir, alzando la voz: “¡Mueran los golpistas!” (Documento en Rodríguez Valdés, 1992). Según el diario de la sesión del Congreso, estas palabras fueron seguidas por aplausos prolongados.

Aparte del Consejo Consultivo, hubo también la organización de otros grupos civiles, independientes del Poder Ejecutivo, el más importante de los cuales se llamó

⁴⁴ La historia detallada de La Causa R será desarrollada en el próximo capítulo.

“Grupo de los notables”, integrado por intelectuales y personajes públicos como Arturo Uslar Pietri y José Vicente Rangel, pero también por algunos partidos políticos como La Causa R. Este último partido, conducido políticamente por Velásquez, demandaría la realización inmediata de un referendo para consultar al cuerpo electoral sobre su voluntad respecto a la conveniencia de la renuncia de Pérez al cargo. Las actividades del “Grupo de los notables” producirían efectos importantes, entre otras cosas, porque de allí surgiría la denuncia de una posible malversación de recursos públicos pertenecientes a la partida secreta del Poder Ejecutivo. En dichas operaciones estarían involucrados el Ministro de la Secretaría y el Ministro de Relaciones Interiores y el propio presidente de la República. En marzo de 1993, el Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salom, retomó la denuncia por malversación y peculado de fondos contra el presidente Pérez y la presentó ante la Corte Suprema de Justicia; el 20 de mayo la Corte consideró que habían méritos suficientes para el enjuiciamiento de Pérez y sus dos ministros, y al día siguiente el Congreso aprobó por unanimidad el comienzo del juicio y la suspensión del cargo de los tres funcionarios.

Nunca antes en la historia democrático-liberal de Venezuela se había tenido la experiencia de un acontecimiento semejante. Dentro del Congreso, se acordó que el presidente Pérez fuera reemplazado en el cargo provisionalmente por el presidente del Congreso. Tras un período breve de tránsito, Ramón J. Velásquez fue elegido con un amplio consenso para ejercer la presidencia de la República hasta el final del mandato. Las nuevas elecciones presidenciales tendrían lugar el 5 de diciembre de 1993. Velásquez, como se dijo, había sido el presidente del Consejo Consultivo que había presentado propuestas de reforma al gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Capítulo III. Instancias de articulación de las demandas populares: La Causa Radical y el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200

Aparte de la represión, las reformas políticas constituyen una de las posibles respuestas de las élites ante las amenazas a sus intereses que, a menudo, representan las movilizaciones sociales, en particular cuando éstas adquieren el carácter de un enfrentamiento directo y están insertas en una dinámica expansiva (Tarrow, 1997). Ante las movilizaciones que comenzaron en febrero de 1989 -pero también después de las insurrecciones militares de 1992 y las sucesivas divisiones de los grupos civiles y militares a partir de entonces-, el gobierno de Pérez, con una base de apoyo restringida, cedió parcialmente a las presiones sociales. En efecto, propició un conjunto de reformas que fueron determinantes en la modificación de la estructura de oportunidades políticas presentes en la coyuntura venezolana. Sin este cambio en las oportunidades, el proceso político posterior –por ejemplo: la emergencia de nuevas organizaciones políticas- sería incomprensible. La primera parte de este capítulo está dedicada a mostrar las líneas generales de estos procesos de reformas políticas y sus principales efectos en el campo electoral.

En el contexto de la dinámica movilización-reforma-movilización en la que había entrado la política venezolana a partir de 1989, las preguntas a las que este capítulo intenta responder son: ¿Había nuevos grupos u organizaciones políticas que movilizaran recursos, entremedias de la crisis política, con el objeto de articular políticamente las demandas populares presentes desde 1989? ¿Qué recursos, organizativos y/o retóricos, tenían a su disposición dichos grupos para llevar a cabo esta movilización? ¿Por qué, en última instancia, algunos de estos grupos u organizaciones tendrían éxito en la consecución de sus objetivos y no otros?

El argumento que defiendo en este capítulo tiene dos partes. Sostengo, *en primer lugar*, que las nuevas oportunidades políticas -abiertas por la crisis política y, en particular, por las reformas de 1989- serían aprovechadas, principalmente, por dos nuevos grupos organizados: La Causa Radical (LCR) y el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). Los *radicales* de LCR eran básicamente sindicalistas y tenían una base obrera con la que habían comenzado su movilización; los *bolivarianos* del MBR-200 eran la dirigencia del alzamiento militar de febrero de 1992. En un primer momento, ambos grupos fungieron como instancias de articulación de ciertas demandas particulares insatisfechas por el Estado: demandas obreras y militares, respectivamente. Pero, además, en un segundo momento, los *radicales* y los *bolivarianos* tenían pretensiones explícitas de ampliar su presencia en las instituciones estatales, así como de articular organizativa y retóricamente demandas populares más allá del ámbito restringido de sus bases de apoyo iniciales. Los mecanismos que utilizaron para intentar alcanzar sus objetivos fueron, en ambos casos, tanto la competencia electoral institucionalizada como –en mayor o menor medida- las tácticas insurreccionales (en ocasiones, la utilización de ambos mecanismos coexistió en el tiempo).

En segundo lugar, defiendo también que aunque ambas agrupaciones coincidieran en la misma voluntad de movilización de recursos con el objeto de hegemonizar -o articular políticamente- las demandas populares (movilizadas o no) que estaban presentes en esa coyuntura, si se comparan sus respectivos recursos disponibles en términos de organización y retórica, LCR y el MBR-200 poseían capacidades diferentes de hegemonización de las demandas de base. Es decir, en cuanto a sus recursos, *radicales* y *bolivarianos* tenían capacidades diferentes para alcanzar los objetivos políticos que se habían planteado. En este sentido, los *bolivarianos* resultarían vencedores en la disputa por la articulación política de las demandas populares –y, por

tanto, lograrían imprimir al movimiento populista venezolano el componente cívico-militar que acabaría por definirlo.

Una vez expuestas las reformas políticas y sus principales consecuencias en el campo electoral en la primera parte, la segunda y tercera partes de este capítulo están orientadas al análisis de cada uno de estos grupos políticos en tanto que instancias de articulación de demandas. Las dimensiones que ordenan *analíticamente* la exposición de este microanálisis de la articulación populista en la politización estratégico-táctica de LCR y el MBR-200 son: 1) la *dimensión organizativa*, que alude tanto a la organización interna de las dos agrupaciones como a sus distintas tácticas de vinculación con las demandas; y 2) la *dimensión retórica* (o ideológica), que constituye básicamente el marco de sentido en el que ambos grupos inscribían sus prácticas (estratégicas y tácticas) y, al mismo tiempo, el marco en el que describían el contexto político de sus operaciones.

1) Las reformas políticas y su impacto electoral

El 17 de diciembre de 1984 –nótese la fecha: por una parte, era una fecha conmemorativa de la muerte de Simón Bolívar; por otra, más de cuatro años antes de *El caracazo*-, por decreto, el presidente Jaime Lusinchi, también del partido AD, convocó a la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) (López Maya *et al.*, 1990). Esta Comisión fue el inicio de un largo y debatido proceso de reformas políticas.⁴⁵ Aunque la mayor parte de las reformas propuestas por la COPRE y otras instituciones estatales en el período estudiado (1989-1998) serían

⁴⁵ El sentido de dicho proceso, años después, culminaría muy lejos de las primeras intenciones expresadas por quienes las propiciaron en primer lugar, a saber: en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999. Su función ya no sería sólo introducir algunas reformas políticas parciales y específicas, sino redactar las bases constitucionales de un nuevo régimen político. La ANC se llevaría a cabo en 1999, es decir, quince años después de la creación de la COPRE, y en un contexto social y político enteramente reestructurado. Véase Maigon *et al.* (2000).

finalmente postergadas (Combellas, 2007; López Maya, 2005), constituyen un indicador de la tendencia reformista que comenzó en los años ochenta.

El objetivo general de la COPRE en 1984 era diseñar mecanismos y procedimientos que hicieran posible la aplicación efectiva de aquellos elementos que, si bien estaban presentes en la Constitución de 1961, no habían sido satisfactoriamente ejecutados desde entonces (Combellas, 2007). En particular, el propio decreto presidencial señalaba, entre sus considerandos, que una de las tareas de la COPRE sería elaborar propuestas que ampliaran la participación popular en el proceso de toma de decisiones políticas.

La propuesta de reforma de la COPRE que a largo plazo tendría mayores repercusiones sería la descentralización político-administrativa del Estado (Álvarez 2003; Grindle, 2000; Buxton, 2001). No obstante, las reformas en estos ámbitos no se llevarían a cabo hasta 1989 –en particular, tras los sucesos del 27 de febrero⁴⁶- bajo la presidencia de Pérez y en el contexto del ahondamiento de la crisis política. Ese mismo año sería creada, por el Congreso Nacional, una Comisión Bicameral que tendría la tarea de hacer propuestas para continuar el proceso de reformas estatales mediante el mecanismo –consagrado en el texto constitucional de 1961- de la enmienda. La Comisión Bicameral no hizo públicas sus propuestas, después de largos debates, hasta finales de 1991, y entre sus propuestas aparecía la inclusión en el articulado de la Constitución de 1961 de la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).⁴⁷

⁴⁶ La relación entre los sucesos de febrero y las reformas de 1989 que hicieron posible la descentralización administrativa y política del Estado, tesis que comparto, es señalada también por Combellas (2007).

⁴⁷ Sin embargo, las insurrecciones militares de 1992 –primero la insurrección de febrero y después la de noviembre- introdujeron cambios en la agenda política, por lo que las reformas propuestas por la Comisión fueron postergadas. Por otra parte, como indiqué en el capítulo II, los grupos militares insurrectos, entre las medidas de gobierno que habían planeado aplicar en el caso de que logran controlar el poder, estaba la convocatoria a una ANC, si bien con un sentido y alcance muy diferentes del correspondiente a la asamblea diseñada por la Comisión Bicameral. Las posiciones de los militares

No obstante, por el impacto -casi inmediato- que produjeron en la modificación de la estructura de oportunidades políticas existentes en dicha coyuntura, me concentraré en lo que sigue a mostrar la naturaleza y el alcance de las reformas orientadas a la descentralización del poder político y administrativo, llevadas a cabo durante los primeros meses del gobierno de Pérez.

En efecto, el Congreso Nacional aprobó un conjunto de leyes orientadas en este sentido: 1) la *Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado* y la *Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados*; 2) la *Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público*; y 3) la *Ley Orgánica de Régimen Municipal*. Todas ellas fueron aprobadas en 1989.

La *Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado* y la *Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados* buscaban la erradicación del sistema de designación de los gobernadores estatales por el Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, institucionalizaban la elección universal, directa y secreta de los gobernadores estatales, por un período de tres años y con posibilidad de reelección para el período siguiente. La única excepción fue el Distrito Federal, cuyo gobernador siguió siendo designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, la *Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público* aseguraba la fijación de procedimientos para el proceso de descentralización: principalmente, ampliación de competencias regionales y regulación de competencias concurrentes, mediante la paulatina transferencia de la prestación de servicios básicos (educación, salud, cultura y seguridad), así como la fijación de las fuentes estatales de ingresos.

bolivarianos sobre la ANC, por la importancia que tuvieron para el proceso de emergencia populista que analizo, serán desarrolladas con mayor detalle en la tercera parte de este capítulo.

Por último, la *Ley Orgánica de Régimen Municipal* creaba el cargo de alcalde como centro ejecutivo en el nivel local, separando las funciones legislativas y ejecutivas anteriormente yuxtapuestas en los Concejos Municipales. El alcalde de municipio, al igual que los gobernadores estatales, sería elegido mediante voto universal, directo y secreto, también por un período de tres años y con posibilidad de reelección sucesiva en dos períodos. Se creaban, además, parroquias y juntas parroquiales, con el objetivo expreso de ampliar la descentralización administrativa y la participación popular. Del mismo modo, fueron reconocidas las asociaciones de vecinos como actores locales y se diseñaron nuevos mecanismos de participación popular: los cabildos abiertos, el referendo sobre temas colectivos (sin incluir la asignación presupuestaria) y la revocación del mandato del alcalde por votación popular.

La elaboración de estas leyes, en particular de la ley de regulación municipal, siguió un procedimiento inusual: fue el resultado de una amplia consulta con algunas de las diversas organizaciones de la sociedad civil que, durante la crisis de representación de los ochenta, como dije en el capítulo II, se habían movilizado precisamente demandando la descentralización administrativa del Estado y la extensión de los mecanismos de participación popular (García-Guadilla, 2003).

Desde 1958 el sistema electoral venezolano se caracterizaba por funcionar mediante listas cerradas. Los cargos de elección se adjudicaban siguiendo el orden en el que los candidatos, casi siempre desconocidos por los electores, aparecían en la lista. Dicho orden era decidido a través de las reglas internas de los partidos políticos y en ellas predominaban las posturas de los principales dirigentes de los mismos. Tras las crisis de 1989 y 1992, la *Ley Orgánica del Sufragio* fue modificada. En 1989 se introdujo la representación proporcional personalizada, combinada con el principio de elección uninominal en circuitos uninominales para el Congreso y las asambleas

legislativas estatales, así como listas abiertas para los concejos municipales; el 55% de los cargos se elegirían mayoritariamente y el 45% de forma proporcional. En 1992 se amplió el porcentaje de cada fórmula para cada tipo de elección en los tres niveles de gobierno –nacional, estatal y municipal (Lucena, 2003: 253-255; López Maya, 2005).

Una parte importante de la nueva legislación afectaba, por tanto, los procedimientos electorales. Ahora bien: ¿Cuál fue el impacto de las reformas de 1989 en los procesos electorales siguientes? Para responder a esta pregunta, analizaré datos sobre los resultados de las tres primeras elecciones que fueron realizadas tras las reformas: en primer lugar, las elecciones de 1989 y 1992, que fueron elecciones exclusivamente regionales; en segundo lugar, las elecciones de 1993, que fueron presidenciales.⁴⁸ Comenzaré con las elecciones regionales de 1989.

En diciembre de 1988, el candidato de AD, Carlos Andrés Pérez –y, en general, los candidatos de su partido al Congreso Nacional- habían obtenido mayorías electorales en diecinueve de los veinte estados existentes.⁴⁹ Dichas elecciones fueron las últimas elecciones antes de las reformas políticas. Por el contrario, en diciembre de 1989, en las primeras elecciones regionales tras las reformas electorales y la descentralización político-administrativa, los *adecos* perdieron nueve de los estados que habían obtenido en 1988. La abstención fue de 54.85%. Muchos de los estados en los que fueron derrotados eran demográfica y económicamente centrales: Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia y Bolívar. Miranda, Carabobo y Aragua son los principales centros de la industria manufacturera; Zulia es el principal centro de producción

⁴⁸ Todos los datos de este apartado han sido extraídos del Consejo Supremo Electoral, Lucena (2003) y López Maya (2005).

⁴⁹ Los primeros resultados electorales tras las reformas se comparan con los resultados de la última elección presidencial antes de las reformas (en diciembre de 1988). Aunque ambas elecciones estén en un nivel diferente –no es lo mismo el voto regional para candidatos a la presidencia nacional que el voto regional para autoridades regionales-, no hay otra manera de obtener información, en la medida en que antes de 1989 las autoridades regionales eran designadas por el Poder Ejecutivo central. Tómese la comparación, por tanto, como una comparación meramente indicativa.

petrolera; y Bolívar aloja la industria hidroeléctrica, de hierro y aluminio. Como se ve, consideradas en su conjunto, estas regiones constituyen el centro económico industrial del Estado. La única región económicamente prioritaria que permaneció bajo gobiernos de AD fue el Distrito Federal, en Caracas: pero allí -como señalé arriba- el gobernador no estaba sujeto a elecciones populares –fue la única excepción en la reforma de 1989-; era designado directamente por el presidente.

El declive de AD en estos estados tuvo como correlato la emergencia de nuevos grupos y liderazgos locales y regionales. Entre ellos, por su incidencia en el posterior proceso político, subrayaré cuatro. En primer lugar, en el estado Aragua ganó Carlos Tablante, del Movimiento al Socialismo (MAS), y en el estado Bolívar lo hizo Andrés Velásquez, de La Causa R (LCR). Ambos partidos eran partidos de izquierda. El primero de ellos, aunque siempre en una condición minoritaria, tenía una larga trayectoria electoral desde comienzos de los setenta. El segundo, con una importante base sindical regional, era un nuevo actor dentro de la competencia electoral y dentro de las instituciones de poder.⁵⁰

En segundo lugar, destaca la posición del partido COPEI, uno de los partidos centrales del régimen de partidos desde 1958, y en aquel momento en la oposición. Un año antes los *copeyanos* sólo habían podido ganar en un estado, pero en esta ocasión obtuvieron la victoria en seis. Por su importancia para los acontecimientos que siguieron, cabe señalar la victoria de Oswaldo Álvarez Paz en el estado Zulia y la de Henrique Salas Römer en el estado Carabobo. Estos dirigentes, por la forma de su acceso al poder –mediante elecciones regionales-, aunque eran *copeyanos* y miembros de un partido tradicional, eran también liderazgos emergentes dentro de su partido, y no habían

⁵⁰ El análisis más detallado de LCR será llevado a cabo en la segunda parte de este capítulo.

alcanzado notoriedad pública por los procedimientos internos –tradicionalmente centralizados- de COPEI.

Paso ahora a mostrar y analizar datos sobre las elecciones regionales de 1992.

Por los requerimientos de las reformas de 1989, todos los gobernadores electos terminarían sus respectivos mandatos en diciembre de 1992. Por tanto, todos ellos gobernaban sus regiones en la fecha de las rebeliones militares y, además, se disputaban sus respectivos cargos públicos en un segundo proceso electoral regional en diciembre de ese año (todos habían optado por el mecanismo jurídico que posibilitaba su reelección inmediata). Ahora bien: ¿Qué reacciones mostraron los nuevos gobernadores ante las rebeliones militares de febrero y noviembre de 1992?

Estos cuatro nuevos dirigentes, miembros de partidos opositores al gobierno de Pérez, eran gobernadores de cuatro de los cinco puntos estratégicos que –como señalé en el capítulo II- fueron considerados por los militares insurrectos como principales blancos de su ataque. El quinto punto era, por supuesto, Caracas. En sus declaraciones públicas después de la rendición de los rebeldes, la mañana del 4 de febrero, si bien condenaban el método del *golpismo*⁵¹, de una u otra manera afirmaban que detrás del alzamiento había demandas sociales que tenían que ser satisfechas por el Estado (Britto, 1989; López Maya, 2005). Sus discursos, por tanto, encajaban con la línea general del discurso del senador Caldera de ese mismo día. Dado que en estas regiones los militares de febrero habían alcanzado sus objetivos, tales declaraciones, que para el gobierno central no eran lo suficientemente condenatorias de la insurrección, fueron consideradas por el gobierno y la dirigencia de AD como indicios de una cooperación entre los

⁵¹ La condena del intento de golpe hecha por Velásquez y LCR fue, a su vez, criticada por los militares *bolivarianos* desde la cárcel, en particular por el teniente coronel Chávez Frías. La razón de esta crítica se basaba en el hecho de que algunos miembros de LCR –si bien no Velásquez- habían tenido, tal y como afirmaba el gobierno de Pérez, alguna participación en los preparativos del intento de golpe de febrero (Chávez, 2002).

gobernadores opositores y los golpistas. El *masista* Tablante fue directamente acusado por el gobierno y sus reacciones, junto a las del *radical* Velásquez, fueron las más duras. Los gobernadores de COPEI mantuvieron una postura más conciliadora y mesurada.

Lo mismo ocurrió después del segundo intento de golpe de Estado, en noviembre de 1992 (nueve días antes de los comicios en los que los gobernadores se disputaban su reelección), aunque esta vez no todos los estados fueron objetivos militares de los alzados. Sus reacciones estuvieron encaminadas a deslegitimar o separarse del Poder Ejecutivo y acusaron a los *cogollos*⁵² de los partidos de haber retrasado e incumplido las promesas de reformas anunciadas después del 4 de febrero. En esta ocasión, el gobierno de AD acusó a Velásquez –por segunda vez- de estar comprometido con el golpe.

A pesar de la situación posterior a la rebelión de noviembre, el domingo 6 de diciembre se llevaron a cabo los comicios regionales. Los cuatro gobernadores opositores fueron reelegidos por otros tres años con resultados superiores -en todos los casos- al 60%. Uno de los resultados más importantes de la jornada fue la elección del maestro sindicalista Aristóbulo Istúriz -uno de los principales dirigentes *radicales* de LCR y, como indiqué en el capítulo II, autor de uno de los discursos más críticos contra el gobierno de Pérez la mañana del 4 febrero- como alcalde de Caracas, en contra del candidato del partido oficialista AD, el *adeco* Claudio Fermín.⁵³

Que las primeras elecciones regionales de 1989 produjeran la emergencia de nuevos grupos y liderazgos, en mayor o menor medida opuestos al gobierno nacional de

⁵² Los llamados *cogollos* de los partidos políticos son los dirigentes nacionales de dichas agrupaciones.

⁵³ El margen de la victoria del candidato *radical* fue muy estrecho, las autoridades electorales tardaron más de doce horas en hacer públicos los resultados y, ante los rumores de fraude electoral, grupos de simpatizantes de Istúriz se reunieron en la Plaza Caracas a esperar el anuncio definitivo (López Maya, 2005). El Consejo Supremo Electoral adjudicó al candidato de la izquierda el triunfo con un 34.45% de los votos, mientras Fermín obtenía un cercano 32.03%.

AD, es un hecho significativo. Más significativo aún es que, en la elección regional de 1992, estos mismos grupos hubieran mantenido e incluso ampliado sus posiciones electorales previas mediante la reelección inmediata, todo esto con un discurso considerado por el gobierno de AD poco contundente –en algunos casos, directamente sospechoso de complicidad- en su condena de las insurrecciones militares de ese mismo año. Pero resulta crucial constatar que estos grupos, prácticas y discursos lograran obtener un alcance nacional en las primeras elecciones presidenciales posteriores a las reformas políticas. En efecto, en las elecciones de 1993 los partidos AD y COPEI ya no lograrían controlar la mayor fracción de los votos, tal y como lo habían hecho en los procesos electorales anteriores. Aquí puede constatarse también, por tanto, el importante impacto de las reformas políticas.

En dichas elecciones hubo cuatro candidatos principales.

- 1) Rafael Caldera, tras separarse de COPEI, su anterior partido, se postuló como candidato por un partido de reciente conformación y organizado en torno a su liderazgo, el partido Convergencia, y una coalición con el MAS y otros pequeños partidos políticos (incluido el Partido Comunista de Venezuela, PCV). Ganó las elecciones con el 30.45% de los votos.
- 2) Claudio Fermín, por AD, que había sido el candidato derrotado un año antes - aunque por un margen reducido- en la alcaldía de Caracas. Fermín no respondía al perfil de los dirigentes de AD precisamente por provenir de la contienda política en Caracas. Llegaría en el segundo puesto con 23.59% de los votos.
- 3) Por COPEI se presentó Oswaldo Álvarez Paz, que había sido el primer gobernador electo popularmente en el estado Zulia en 1989 y también reelecto en 1992. Álvarez Paz, además, había sido elegido como candidato en las

primeras elecciones internas realizadas en la historia de COPEI⁵⁴, derrotando al principal dirigente del partido, Eduardo Fernández, quien había mantenido una oposición moderada hacia el gobierno de Pérez y no había participado en las disputas electorales regionales. El candidato de COPEI ocuparía el tercer lugar con el 22.74% de los votos.

- 4) Finalmente, Andrés Velásquez, de LCR, primer gobernador electo y reelecto en el estado Bolívar. Ocuparía el cuarto lugar con el 21.94% de los votos.

Cabe notar que AD y COPEI, en conjunto, aunque estaban lejos de controlar el 90% de los votos, tal y como lo habían hecho en las elecciones presidenciales de 1988, todavía controlaban el 46,33%, y sus candidatos ocuparon el segundo y tercer lugar en la competencia, respectivamente. Sin embargo, en estas elecciones el sistema de partidos se transformó: el bipartidismo atenuado tradicional se transformó en multipartidismo (Sartori, 1976; Maingon, 2007). Y los partidos y liderazgos que diversificaron el sistema de partidos habían surgido de la política regional: tres de los cuatro principales candidatos provenían de la competencia política regional, en estados o municipios especialmente relevantes y en los que previamente habían obtenido buenos resultados electorales. En cuanto a los candidatos de AD y COPEI, si bien mostraban alguna fortaleza electoral, al mismo tiempo rompían con las pautas de selección y ascenso que había caracterizado la competencia interna de estos partidos al menos desde 1958.

Rafael Caldera, quien resultaría a la postre ganador con un margen de diferencia pequeño, se había recuperado políticamente a través de un discurso crítico de las políticas de Pérez y a la vez cercano a las demandas populares –como señalé en el

⁵⁴ En esta investigación no analizo, como parte de las reformas políticas, los alcances y límites de las reformas internas de los partidos políticos que ocurrieron entre 1989 y 1998. Obsérvese, en cualquier caso, que el ascenso de Álvarez Paz a la candidatura presidencial es un ejemplo de la existencia de estas reformas.

capítulo II, especialmente tras su intervención parlamentaria el día del primer intento de golpe de Estado en 1992. En este sentido, Caldera, que desde el final de su mandato presidencial en 1973 hasta los noventa se había mantenido lejos de la competencia electoral por la presidencia de la República, emerge como un nuevo liderazgo articulador, con una propuesta electoral contraria a las políticas de Pérez y al mismo tiempo llevando a cabo una crítica a la política interna del partido del que había sido uno de sus principales fundadores y dirigentes (COPEI). Caldera, además, se presentó a las elecciones de 1993 con una coalición en la que participaba el MAS, el principal partido político de la izquierda institucional y, de hecho, muchos de los cuadros dirigentes más importantes del MAS pasarían a formar parte del gabinete y la nueva administración tras la conformación del gobierno. También estaba presente en la coalición el PCV.

Es necesario resaltar, a modo de cierre, algunos puntos centrales relativos a la modificación de la estructura de oportunidades políticas en este momento y sus principales consecuencias.

Las reformas político-administrativas y electorales de 1989 –y en parte la de 1992- hicieron posible una nueva política regional. En términos generales, las reformas favorecieron a los partidos opositores y perjudicaron a AD, el partido de gobierno. Pero, más específicamente, favorecieron a nuevos partidos y nuevos liderazgos, incluso en el caso de las victorias electorales regionales de COPEI (especialmente con Henrique Salas Römer y Oswaldo Álvarez Paz). Todos estos grupos y liderazgos se habían separado, en mayor o medida, durante la crisis política, del gobierno de Pérez, y habían logrado articular una base electoral importante.

Dicha política regional mostraría su expansión a nivel nacional, a expensas de los partidos tradicionales, en la transformación del sistema de partidos venezolano en las elecciones presidenciales de 1993. El sistema de partidos pasó del bipartidismo atenuado al multipartidismo, precisamente, ante la emergencia de estos nuevos partidos y liderazgos. En diciembre de 1993, tres de los cuatro principales candidatos provenían de la política regional. El cuarto, Caldera, por un margen estrecho el ganador de las elecciones, si bien no había participado en la competencia electoral en las regiones, había liderado un movimiento crítico tanto del gobierno de Pérez como de la dirigencia de su propio partido. En general, también el análisis de los datos muestra una reducción de la base electoral de apoyo de los partidos tradicionales y, correlativamente, un desplazamiento del cuerpo electoral hacia los partidos y movimientos electorales de la izquierda. El triunfo presidencial de Caldera, que a lo largo de su carrera política había militado en la democracia cristiana, no suponía una excepción a esta tendencia electoral: aparte de sus críticas a las reformas económicas de Pérez, la coalición ganadora incluía a importantes partidos de izquierda, como el MAS y el PCV.

En cualquier caso, en diciembre de 1993 los partidos que habían ocupado el centro del régimen de partidos desde 1958 fueron desplazados de este lugar por primera vez en la historia electoral venezolana. Y ya no se recuperarían jamás.

2) La Causa R: el *movimiento de movimientos* y el *nuevo sindicalismo*

Las reformas políticas produjeron efectos en la medida en que hicieron posible la emergencia de nuevas agrupaciones en el campo político venezolano: una de las principales fue –como dije anteriormente- La Causa Radical (LCR). Esto se constata en las elecciones de 1989, 1992 y 1993.

A continuación haré un repaso de la historia de los *radicales* y de sus formas de movilización de recursos organizativos y retóricos. En buena medida, LCR fue el

resultado de las reformas que se aceleraron a partir de *El caracazo*. Sin embargo, una de las ideas centrales que quisiera mostrar en lo que sigue es que, si bien la emergencia electoral de LCR fue una consecuencia de las reformas de 1989, el aprovechamiento de tales oportunidades políticas por los *radicales* no hubiera sido posible si, entre otros elementos, éstos no hubieran acumulado recursos relevantes de movilización desde los años setenta, en particular dentro del movimiento obrero autodenominado *nuevo sindicalismo*, asentado principalmente en la industria siderúrgica del estado Bolívar. Una parte importante de la historia articuladora de LCR –de sus formas de organización y de su retórica- es la historia de este sindicalismo.

El *nuevo sindicalismo* en el estado Bolívar no fue un movimiento aislado, aunque por sus repercusiones adquirió mayor importancia que otros. También hubo movilizaciones obreras dentro de la industria textil y en el sector público.⁵⁵ Estos tres movimientos compartían algunos rasgos estructurales determinados por el sector productivo al que pertenecían: no pertenecían al sector primario exportador –es decir: a la industria petrolera- y la presencia de capital privado extranjero era poco significativa. En este sentido, sus demandas no adquirieron el carácter “anti-imperialista” que desde los años treinta habían mostrado las demandas de los trabajadores de la industria petrolera (Bergquist, 1988). Sus demandas se orientaron más bien hacia el mantenimiento de la propiedad estatal sobre las industrias en las que trabajaban y en contra de los procesos de privatización que comenzaron en los ochenta. Otro aspecto importante de sus demandas residía en lo que los *radicales* llamaban la “democracia sindical”: es decir, la demanda de participación de las bases obreras en la toma de

⁵⁵ En esta investigación no analizo la historia de los trabajadores de la industria textil ni tampoco con detalle las movilizaciones de los trabajadores del sector público. No obstante, conviene recordar que, como señalé en el capítulo II, los funcionarios públicos fueron una sección importante de los grupos movilizadas durante el período 1989-1998.

decisiones mediante mecanismos como los concejos de delegados sectoriales y las asambleas de trabajadores para controlar a los dirigentes sindicales.

Los orígenes históricos de La Causa R y el movimiento de movimientos

LCR fue una agrupación política surgida de una de las rupturas del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ocurridas a comienzos de los años setenta.⁵⁶ Para esa fecha, la guerra de guerrillas que había actuado en los sesenta había sido derrotada (1968-1969)⁵⁷, y el fracaso de la lucha armada era el trasfondo de la escisión. La mayor parte de los dirigentes que, en ese mismo año, se separaron del PCV, fundaron el MAS. Dicho partido se convertiría en los años siguientes en la tercera fuerza política nacional, detrás de los principales partidos del régimen, AD y COPEI.⁵⁸

El principal político fundador de LCR fue Alfredo Maneiro. Dirigió la lucha armada en el oriente, militó durante dieciocho años en el PCV y formaba parte de su Comité Central. Participó en las primeras reuniones del MAS, junto a otro importante dirigente, Teodoro Petkoff. Pero pronto mostró su desacuerdo con la incorporación de cuadros *comunistas* del PCV dentro del nuevo partido –es decir, de facciones que no estaban dispuestas a romper radicalmente con el pasado del PCV-, por lo que en 1971 decidió separarse junto a Pablo Medina, José Lira y Lucas Matheus. No fundaron una organización alternativa. Formaron un grupo de opinión llamado Venezuela 83, que es el antecedente de LCR. En 1973 comenzaron a publicar un periódico llamado *Causa R*, nombre que terminaría por identificar a la organización.

La idea central de Maneiro respecto a la organización política -en la línea de su crítica a la estrategia seguida por el PCV- era que el peso de la organización debía

⁵⁶ Para la historia de LCR y el *nuevo sindicalismo* utilizo los trabajos de Ellner (1995), Hellinger (1996) y López Maya (2005).

⁵⁷ El entonces presidente, el *copeyano* Rafael Caldera, llevó a cabo lo que se conoció con el nombre de *pacificación*, que consistió básicamente en la propuesta de amnistía a todos aquellos que hubieran participado en la lucha armada. El PCV, junto al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, un grupo disidente de AD), eran los partidos que habían optado por este método de acción política. Para la historia del PCV y las rupturas tras la lucha armada de los sesenta, véase Caballero (1978).

⁵⁸ El principal trabajo sobre la historia del MAS es Ellner (1989).

recaer en la acción de los movimientos populares y no, como habían practicado los *comunistas*, sea en la forma del partido leninista o sea bajo la táctica *foquista* de los movimientos guerrilleros de inspiración castro-guevarista. Era una crítica a las ideas leninistas de vanguardia y centralismo democrático. Al igual que el MAS, la noción básica de LCR en su momento fundante fue la de alcanzar la hegemonía en la sociedad civil, más que tomar por asalto el poder del Estado (Hellinger, 1996: 118-119). Al igual que el MAS, el grupo tendría que llegar a consolidar un *movimiento de movimientos*. Perseguían la creación de un partido “desde abajo”, vinculado orgánicamente con el movimiento popular, y organizativa e ideológicamente en un permanente proceso de conformación. La nueva táctica consistía en la introducción de los militantes dentro de los movimientos de masas, esperando a que fueran éstas las que resolvieran, a su modo y en su momento, el problema de la organización o de la dirección política. En este sentido, en lugar de fundar un nuevo partido, los *radicales* decidieron comenzar a edificar una organización que estuviera siempre en continua formación y trabajando de cerca y sin verticalidad con los liderazgos que surgieran de los movimientos populares.

En 1971 eligieron tres movimientos de masas para comenzar a actuar: 1) el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (y otras universidades públicas); 2) el movimiento obrero de la industria Siderúrgica del Orinoco (SIDOR); y 3) el movimiento urbano popular de la zona de Catia en Caracas. El proyecto de trabajo se concebía lento y meticuloso, y esperaba resultados a largo plazo. En la línea de la tesis del *movimiento de movimientos*, LCR no sería un partido tradicional sino un modo de vinculación entre distintos “movimientos” que mantendrían siempre su autonomía.

En 1972, el *radical* Pablo Medina, solo, se trasladó a Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, para intentar formar en la empresa SIDOR una primera organización obrera no controlada por AD y COPEI.

La Corporación Venezolana de Guayana y la Industria Siderúrgica del Orinoco

SIDOR era uno de los principales proyectos industriales de la democracia liberal venezolana fundada en 1958. Era una industria metalúrgica y de aluminio asentada en una zona al sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Ciudad Guayana era el centro de una amplia red de empresas organizadas bajo la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fundada en 1960 y de propiedad enteramente estatal hasta 1985. Este complejo industrial estaba compuesto por SIDOR, el complejo hidroeléctrico del Guri, tres empresas productoras de aluminio, una de bauxita y otra de hierro (Ellner, 1995: 234). Los objetivos centrales de la CVG eran principalmente dos: el desarrollo industrial y la planificación urbana de la zona. Ciudad Guayana fue fundada, por planificación, en 1961.

Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), en la coyuntura de la nacionalización de la industria petrolera (1976) y el aumento de los precios del crudo venezolano en el mercado mundial, el proyecto industrial de la CVG recibió un fuerte impulso orientado a su modernización. Se buscaba utilizar el excedente petrolero, considerablemente ampliado durante los años setenta, para diversificar la economía nacional de base industrial, en particular la industria pesada. No sólo se invirtió en la zona una parte importante del excedente petrolero sino que también se recurrió al endeudamiento externo para financiar el desarrollo de la industria. En 1975 se producían 1200 millones de toneladas de acero; el plan estatal era aumentar la producción de acero hasta llegar a producir 15000 millones de toneladas para 1990. En la medida en que no había tal demanda interna, el objetivo era consolidar una gran industria exportadora de acero y aluminio. Lo que justificaba el proyecto eran las ventajas comparativas de la región: en efecto, la dotación de recursos de la zona, aparte

de la mano de obra barata, incluía el carbón, la bauxita, el hierro y la energía hidroeléctrica.

La región era una zona en un primer momento poco poblada. Sin embargo, el desarrollo industrial produjo una importante migración interna que acabó por establecer una amplia comunidad popular en Ciudad Guayana. Esta población estaba compuesta básicamente de obreros y funcionarios del Estado. Aunque las previsiones gubernamentales calculaban en la ciudad y sus alrededores una población de 200 mil habitantes para 1970, en 1971 sólo alcanzaban 143 mil habitantes (Hellinger, 1996). No obstante, la infraestructura de servicios de la zona no tuvo un desarrollo suficiente para satisfacer las necesidades aparejadas con el incremento poblacional. Para 1970 Ciudad Guayana tenía proporcionalmente el mayor número de *ranchos*⁵⁹ del país, los peores servicios sociales, la tasa de inflación más alta y las peores condiciones laborales a nivel nacional.

Junto a los problemas de una gerencia ineficiente –acompañada de corrupción y clientelismo (Ellner, 1995; Hellinger, 1996)-, resaltaban las condiciones de inseguridad laboral en la que los obreros llevaban a cabo sus actividades: altos niveles de ruido, calor y polvo; intoxicaciones por mercurio y otros químicos, que produjeron daños como trastornos nerviosos e impotencia sexual; entre otros (Ellner, 1995: 247). La maquinaria empleada antes de la modernización de los setenta era a menudo obsoleta; los hornos eléctricos requerían continuas reparaciones y provocaban accidentes. Pero la incorporación de nueva maquinaria, durante el primer gobierno de Pérez, no redujo la inseguridad laboral. Además, produjo una división en la fuerza de trabajo de la industria: una división entre los obreros que se adaptaban a la nueva maquinaria y los que no. La mayor sofisticación en el capital fijo, además, no siempre estuvo acompañada de un

⁵⁹ Los *ranchos* son las viviendas precarias que usualmente alojan a los sectores populares.

correlativo entrenamiento de la fuerza de trabajo, por lo que los accidentes con la nueva maquinaria continuaron y no fueron alcanzados los objetivos de productividad planificados por la política empresarial.

Eran estas condiciones las que fueron consideradas por Medina y los *radicales* como propicias para una intervención política articuladora.

El grupo matancero y el nuevo sindicalismo

Medina se empleó como obrero de horario nocturno y al poco tiempo comenzó a publicar un periódico llamado *El matancero*. El nombre provenía de la zona industrial de Matanzas. Para finales de 1972, alrededor de *El matancero* se había conformado un grupo de diez obreros. Los primeros miembros adquirieron el nombre del periódico –los *matanceros*- y comenzaron a luchar por la dirigencia de Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (SUTISS). Al año siguiente, en 1973, se incorporó al grupo un perito eléctrico llamado Andrés Velásquez, que pronto se convertiría en el principal líder del grupo. Velásquez sería conocido entre sus compañeros de trabajo, entre otras cosas, porque en 1974 institucionalizó un repertorio de acción que sería distintivo del grupo *matancero*: hacer reuniones masivas de trabajadores en las puertas de las fábricas (*el portón*).⁶⁰

Las luchas sindicales no comenzaron, sin embargo, con los *matanceros*. En 1969 un *comunista* logró alcanzar la dirigencia del sindicato de SIDOR. La primera huelga, realizada en 1971, dirigida por miembros izquierdistas del PCV, el MEP y el MAS, no tuvo resultados favorables a las demandas obreras: por el contrario, 514 trabajadores fueron despedidos. Las primeras posturas de Medina y los *radicales* estarían dirigidas tanto en contra de las políticas empresariales de expansión productiva mediante el

⁶⁰ Cuando, quince años más tarde, Velásquez ganó la gobernación de Bolívar, se repetirían este tipo de reuniones en plazas públicas a lo largo del Estado.

aumento de la productividad y la reducción de mano de obra, como en contra de las primeras tácticas de estos partidos.

A lo largo de los años setenta, en términos generales, las diversas agrupaciones izquierdistas vinculadas con los trabajadores ampliaron su capacidad de influencia. Hubo demandas y luchas en la industria del hierro (1975) y la industria de maquinaria (1976). Las elecciones de SUTISS fueron ganadas por una coalición de grupos de izquierda tradicional y no tradicional (1977). Además, tomaron el control de empresas de aluminio como ALCASA (1977) y VENALUM (1979).

Pero, a pesar de las victorias dentro de estos sindicatos, los nuevos dirigentes obreros tenían poca capacidad de influencia en las confederaciones sectoriales y regionales, así como en la propia Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Los representantes en estos niveles eran elegidos por votaciones indirectas y, por ley, los sindicatos más pequeños tenían la misma representación proporcional que los grandes. Desde 1936, para formar un sindicato bastaban veinte trabajadores y no había límites en el número de sindicatos paralelos que podían existir en cualquier empresa. Además, el Ministerio de Trabajo podía incidir en los procesos internos de los sindicatos mediante el control de la certificación y en asuntos disciplinarios. De esta manera, SUTISS, a pesar de su tamaño e importancia, no tenía representación en los directorios de las dos federaciones sindicales a las que pertenecía (FETRAMETAL Y FETRABOLÍVAR).

La situación en el complejo industrial de la CVG empeoró con los años. A finales de los setenta y comienzos de los ochenta, los subsidios que la CVG recibía del Estado fueron reducidos. El desempleo aumentó de 5 mil a 30 mil entre 1979 y 1985, y las políticas empresariales se hicieron más duras para los trabajadores. Todo esto conduciría, finalmente, a una radicalización del sindicalismo.

En 1978 Velásquez declaró que el sindicalismo de los *matanceros* era un *nuevo sindicalismo*. El *nuevo sindicalismo* se basaba, principalmente, en la lucha contra la corrupción sindical, la participación obrera en las decisiones colectivas de interés de los trabajadores y las mejoras en las condiciones de trabajo (especialmente higiene y seguridad laboral). Los *radicales* exigían reforzar lo que llamaban la “democracia sindical” (Hellinger, 1996: 118-119) y atacaban las dirigencias de los otros partidos, tanto de AD y COPEI como de los partidos de la izquierda. Su retórica era básicamente antipartidista, consideraban que la CTV estaba controlada por los principales partidos políticos y carecía de autonomía organizativa y de capacidad de representación de los intereses obreros.

En 1979, la plancha de los *matanceros*, dirigida por Velásquez en coalición con otros dirigentes obreros de tendencias izquierdistas, logra el control de SUTISS.⁶¹ De esta manera, el *nuevo sindicalismo* ocupaba una posición central dentro una importante industria nacional, con 12 mil trabajadores. El uso del periódico *El matancero* y el repertorio de *los portones*, así como la emergencia de liderazgos no vinculados con los partidos políticos tradicionales, conformaron la táctica principal de los *radicales*. Con el objeto de diferenciar su agrupación de los partidos tradicionales, una acción que llevarían a cabo en 1979, cuando lograron controlar el SUTISS, sería la de formar consejos de delegados departamentales –mediante elecciones uninominales: es decir, no partidistas- que controlaran las acciones de los líderes sindicales electos. También expandieron la práctica de convocar asambleas con las bases obreras. Del mismo modo, los *matanceros*, a propósito de la inseguridad laboral, demandaron la reducción de la jornada semanal de trabajo de cuarenta y ocho horas –tal y como ordenaba la Ley de

⁶¹ Ellner señala que tal movimiento en las bases sindicales a nivel nacional incluye a cuarenta sindicatos y gremios. Véase Ellner (1995).

Trabajo de 1936- a cuarenta horas, alegando que los accidentes que perjudicaban directamente a los trabajadores estaban relacionados con la fatiga de las jornadas.

Estas prácticas y demandas generaron conflictos con FETRAMETAL, la federación sindical a la que estaba afiliada SUTISS (Ellner, 1995: 240-241; Hellinger, 1996: 121-122). El 13 de noviembre de 1981, la CTV, a través de sus federaciones afiliadas -FETRAMETAL y FETRABOLÍVAR-, que estaban controladas por AD y COPEI, intervino en SUTISS y reemplazó a los líderes electos, poniendo en su lugar a sus propios funcionarios. La razón aducida fue la negociación de un nuevo contrato. En este sentido, los reemplazos durarían, en principio, hasta la firma del contrato. Algunos líderes de la CTV criticaron a los *radicales* por defender demandas excesivas en sectores estratégicos para la economía nacional (e incluso tramar una subversión).⁶² Un año después, Velásquez y otros *matanceros* fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Finalmente, el nuevo contrato con SIDOR fue firmado, pero entre sus cláusulas no aparecía la jornada semanal de trabajo de cuarenta horas, que era la principal demanda de los *matanceros*.

Tras la intervención del sindicato, Velásquez y otros sindicalistas entraron en una larga disputa legal para ser reinstalados en sus puestos de trabajo y también en sus cargos dentro del sindicato. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyó a los *matanceros*. Por otra parte, en contra de lo que la CTV había aducido para justificar la intervención, la intervención de SUTISS no terminaría con la firma del nuevo contrato sino que se prolongaría durante otros seis años. En efecto, sólo en agosto de 1987 se llevarían a cabo nuevas elecciones. En estas elecciones, la plancha de los *matanceros* -sin la participación de Velásquez, que no pudo presentar su candidatura-, y

⁶² La dirigencia de la CTV alegaba que las demandas de los *matanceros* no contaban con el apoyo de las bases obreras. Por ese motivo, convocaron un referendo sindical. Aunque ganaron, muchos obreros se habían negado a participar y, en actos de protesta, habían roto las papeletas de votación.

esta vez negándose a formar coaliciones con otros partidos de la izquierda, obtuvo la victoria con un 49% de los votos.

Dos años más tarde -como dije en la primera parte de este capítulo-, en 1989, Velásquez ganaría la gobernación del estado Bolívar. En el contexto de las políticas de descentralización político-administrativa, su campaña electoral se basó en las críticas a la CVG, entre otras cosas, por la usurpación del poder político de los gobiernos municipales y regionales (Ellner, 1995: 248-250). Las demandas locales de los obreros de la industria siderúrgica fueron recogidas también como parte de las críticas a la CVG. En una región en la que la clase obrera constituía por sí misma una mayoría electoral, la retórica de los *radicales*, junto a la experiencia organizativa que habían acumulado dentro del sindicalismo, fue efectiva y los condujo al gobierno estatal.

Los otros “movimientos”

En cuanto a los otros puntos de incidencia –los “movimientos”- que se plantearon los miembros de LCR –el movimiento universitario y el movimiento urbano popular de Catia-, en ellos no lograron consolidar a largo plazo núcleos organizativos.

Los contactos que se establecieron en la Universidad Central de Venezuela operaron durante poco tiempo porque las demandas de formación de cuadros, especificación de objetivos programáticos y promoción de debates teórico-políticos, propuestas por grupos de estudiantes, chocaban con la idea central de Maneiro y los *radicales*: la tesis del *movimiento de movimientos*.⁶³

En la zona caraqueña de Catia, habitada por más de medio millón de personas, los miembros *radicales* de Venezuela 83 fundaron el grupo Catia 83 (después llamado Pro Catia). Se organizaron algunas actividades comunitarias e iniciativas políticas. En general, se dedicaron a articular demandas comunitarias. En 1976 lograron recolectar 24

⁶³ Algo semejante ocurrió en la Universidad de Los Andes.

mil firmas para demandar la elección de un concejal propio que representara a la zona (hasta entonces, a pesar del número de habitantes que tenía Catia, no tenían un concejal que representara la zona), y, además, el establecimiento del derecho popular a revocar el mandato de los concejales. Hicieron campañas para abrir bodegas populares, colocar recolectores de basura, construir un parque (el Parque del Oeste) y espacios deportivos. Hasta 1983 -tal y como había ocurrido en SIDOR- la organización de Pro Catia mostraba importantes avances.

La Causa R como partido político

Los diferentes “movimientos” dentro de LCR operaban con independencia respecto a la organización nacional. No se presentaban en elecciones sino que más bien, como otros grupos de la izquierda, defendían una política de abstención. En 1978, sin embargo, el *movimiento de movimientos* decidió convertirse en partido político y entrar en la competencia electoral. El cambio de postura, que provocaría a largo plazo importantes repercusiones en la organización del grupo *radical*, se basaba en un análisis político-coyuntural de Maneiro. Por una parte, Maneiro observó que las masas en Venezuela seguían confiando en los mecanismos electorales y otorgaban sus votos a los diferentes partidos, especialmente a AD y COPEI, elección tras elección. No obstante, había un amplio sector del cuerpo electoral cuyas demandas no estaban siendo articuladas por dichos partidos, en particular en el centro del espectro ideológico. Su intención inicial era, por tanto, captar los votos del electorado de centro.

Los *radicales* se incorporaron al registro del Consejo Supremo Electoral y, por requisito de ley, tuvieron que darle un sentido a la “R”, así que la Causa R se convirtió formalmente en La Causa Radical (LCR). Hasta entonces habían mantenido la ambigüedad del sentido de la “R” dentro de sus siglas, de modo que para muchos “Causa R” significaba “causa revolucionaria”. Desde entonces afirmaron que la palabra

“radical” significaba que la agrupación estaba colocada en la “raíz” de los movimientos populares. Como partido, sin embargo, no pretendían actuar principalmente como instancia de movilización de votos a nivel nacional sino como un sindicato obrero que buscaba el apoyo de un electorado más amplio. Cuando lograron controlar SUTISS en 1979, estas pretensiones iniciales fueron reforzadas.

Los *radicales* defendían, entre sus principios, la autonomía de los “movimientos” que lo conformaban. Además, su entrada en la competencia electoral fue el resultado de un análisis coyuntural y no estuvo orientada a ganar elecciones nacionales sino al fortalecimiento del movimiento sindical del grupo *matancero*. En principio, por tanto, los objetivos sociales predominaban sobre los objetivos políticos. En este sentido: ¿Qué tipo de organización presentaban los *radicales*?

A diferencia de otros partidos, LCR no realizaba congresos de partido, no tenía un comité central o ejecutivo, ni -en general- ningún mecanismo formal para la elección de la dirigencia nacional (Hellinger, 1996: 124-125). Aunque de esta manera se lograba una cierta flexibilidad en la relación con las bases, no era del todo transparente la forma como podría ser renovada la dirigencia nacional. Algunos analistas definieron a LCR como un *cuasi-partido* y un *cuasi-movimiento* (Hellinger, 1996: 125). Era una organización básicamente informal que carecía de acta constitutiva ni estatutos. Tenía, sin embargo, procedimientos muy estrictos de selección de nuevos miembros: era un procedimiento individual y el requisito indispensable era ser activista social. Había una Dirección Nacional formada por miembros de los tres “movimientos”, pero organizada en contraposición a la estructura de los Comités Centrales del PCV y de los otros partidos políticos tradicionales. De hecho, durante los años setenta se reunieron sólo dos o tres veces. Intentando rechazar cualquier “sectarismo”, sin embargo, aceptaban la incorporación de cualquier individuo –con independencia de su filiación partidista, en el

caso de que la tuviera- a las planchas con el nombre registrado del partido. La idea era insistir en la representación de sectores sociales particulares antes que en la representación de los intereses del partido mediante mecanismos disciplinarios. No obstante, los mecanismos de sanción a quienes incumplieran la exigencia de representar ante todo a las comunidades no estaban especificados. En este sentido, LCR era un partido-movimiento al que –dada la complejidad de los procedimientos internos existentes- no cualquiera podía afiliarse, pero era un partido-movimiento dispuesto a apoyar candidaturas externas a su propia organización, siempre y cuando éstas mostraran ser representativas de ciertos sectores sociales –aunque carecía de mecanismos formales para sancionar a quienes incumplieran esta condición.

En 1982, durante la preparación de las elecciones presidenciales de diciembre de 1983, los *radicales* apoyaron la candidatura de Jorge Olavarría. Olavarría era un conocido periodista, editor de la revista *Resumen*, que había hecho un seguimiento del conflicto entre la CTV y los *matanceros*, dándole publicidad y solidarizándose con el *nuevo sindicalismo*. Ideológicamente, era un personaje situado en el centro político, pero opuesto a las prácticas y gobiernos de AD y COPEI. Los distintos “movimientos”, con la intermediación de Maneiro, habían aceptado la candidatura; pero Maneiro murió repentinamente en noviembre de 1982. LCR, por primera vez desde su formación como grupo, entró en una disputa interna frontal que produjo la primera escisión importante entre los *radicales*. Los *matanceros* de SIDOR propusieron a Velásquez como candidato a la presidencia, pero otros dirigentes y grupos –por ejemplo, los activistas de Pro Catia- la rechazaron y terminaron por abandonar al partido.

A partir de entonces los *matanceros* aportarían al partido –desde su primera participación electoral- el carácter predominantemente obrerista que mantendrían a lo largo de los años siguientes, que serían los años de la crisis política y de la modificación

de la estructura de oportunidades. Las bases de sus nuevas posiciones políticas estaban en la experiencia de movilización y los recursos acumulados en SIDOR. A lo largo de este tiempo, los *matanceros* mantuvieron la tesis de rehusar la dirección política del movimiento obrero mediante una organización partidista en el sentido tradicional y con una ideología específica.

Los resultados electorales en 1983, sin embargo, no fueron favorables para los *radicales*. Dada la estructura organizativa del partido, era muy difícil su expansión, por ejemplo por las dificultades para la afiliación de nuevos miembros. Los únicos ingresos importantes de nuevos miembros desde esa fecha fueron: la incorporación individual del maestro sindicalista Aristóbulo Istúriz en 1986, apoyado por algunos grupos de sindicalistas magisteriales; y el grupo de Alí Rodríguez en 1987, que previamente se habían separado del Partido de la Revolución Venezolana (PRV).⁶⁴ Ambos serían con el transcurso de los años líderes importantes de la organización electoralmente emergente. Tras los acontecimientos de 1983, concentrada en el sector obrero siderúrgico, la nueva dirigencia de LCR no intentaría incorporarse a nuevos “movimientos”.

De la expansión a la contracción

En la primera parte de este capítulo he mostrado los datos que permiten observar el ascenso electoral de LCR tras las reformas de 1989. De 1989 a 1993, LCR experimentó su conversión en una opción real de poder mediante las elecciones. Ahora bien, si los *radicales* pudieron aprovechar las nuevas oportunidades políticas fue también porque habían acumulado recursos de movilización –retóricos y organizativos– desde 1971.

A partir de 1995 -y hasta 1998-, sin embargo, comenzaría el descenso de este inicialmente exitoso desempeño electoral. Emerge entonces la pregunta: ¿Por qué a

⁶⁴ No desarrollo la historia del PRV, pero en la sección dedicada al MBR-200 comentaré algunos vínculos ideológicos y organizativos entre el PRV y grupos de militares.

partir de 1995 comenzó la contracción del proceso expansivo y electoralmente ascendente que hasta entonces presentaba esta agrupación política? La crisis política continuó y las reformas electorales se mantuvieron, por lo que no hubo un cambio adverso en la estructura de oportunidades políticas. Pero hubo dos elementos que permiten explicar esta contracción: por una parte, la organización interna del partido y sus vínculos con diferentes sectores sociales (la tesis del *movimiento de movimientos*); por otra, el carácter eminentemente local y obrerista que mantuvo la organización a lo largo del proceso (la tesis del *nuevo sindicalismo*).

El antipartidismo de los *radicales* tuvo una materialización tanto organizativa como retórica. No sólo sus demandas sociales y políticas particulares eran enunciadas de forma antagónica respecto a AD y COPEI –históricamente, también en contra del PCV-, sino que también produjeron una forma de organización interna –el *movimiento de movimientos*- que se oponía a las estructuras tradicionales de los partidos políticos.

En efecto, en su dimensión organizativa, LCR era un *movimiento de movimientos* en el que cada uno de los “movimientos” que lo conformaban mantenía su propia autonomía. En cuanto partido-movimiento o movimiento-partido, carecía de una estructura formal interna (dirección nacional, congresos, rutinas de reunión, procedimientos de selección de autoridades nacionales y resolución de conflictos entre facciones, estatutos y actas). A pesar de su incorporación a la competencia electoral desde 1983, a menudo los objetivos sociales de la organización predominaban sobre los objetivos políticos, o al menos se establecía una tensión entre ambos (Hellinger, 1996: 110). LCR era un partido al que –dada la complejidad de los procedimientos internos existentes en la organización al respecto- no cualquiera podía afiliarse, pero que, en cuanto movimiento, se mostraba dispuesto a apoyar candidaturas externas a su propia organización, en la medida en que éstas mostraran estar articuladas orgánicamente con

sectores sociales particulares. Sin embargo, carecían de mecanismos formales para asegurar esta vinculación orgánica y también para sancionar a quienes incumplieran esta condición (Hellinger, 1996: 127).

Un elemento importante dentro de la dimensión organizativa de los *radicales* fue la relación que estableció LCR con distintos sectores sociales. En efecto, tuvieron dificultades para articular la organización partidista con los “movimientos” fuera del ámbito obrero de los *matanceros*. La intervención de los *radicales* en movimientos estudiantiles universitarios había fracasado desde los años setenta. En cuanto al movimiento urbano popular de Catia, a pesar de su éxito inicial, la muerte de Maneiro y la coyuntura electoral de 1983 acabaron por reducir su incidencia. En ese mismo momento, además, los dirigentes *radicales* decidieron no vincularse con nuevos “movimientos”, al menos no de la manera como lo habían hecho con los tres primeros “movimientos” en los setenta: es decir, mediante una táctica pausada y prolongada de incorporación en los mismos que pudiera producir paulatinamente solidaridades y, al mismo tiempo, impidiera la verticalidad partidista. Ciertamente, algunos “movimientos” que estaban movilizados –como los cooperativistas, los grupos defensores de derechos humanos, las comunidades cristianas de base, las organizaciones de mujeres, los ambientalistas y las asociaciones de vecinos, entre otros- a menudo desconfiaban de las organizaciones partidistas y defendían su autonomía respecto a la política de los partidos y la competencia electoral por el poder político. Esto hizo imposible una vinculación más estrecha entre el partido y los “movimientos” así como el aseguramiento de solidaridades propicias para la movilización conjunta (Hellinger, 1996: 127). Dichos vínculos con los “movimientos” fueron, por tanto, extremadamente frágiles.

A medida que ampliaron su presencia electoral y se convirtieron en una opción de poder, la retórica de los *radicales* y, en particular, su propuesta política de gobierno a nivel nacional (en 1993 y en los años siguientes), era similar al programa de gobierno de Velásquez para la región de Bolívar: 1) la democracia como forma de gobierno, no como forma de elección; 2) la lucha contra la corrupción; 3) la eficacia en la prestación de servicios públicos de salud, educación y seguridad; 4) el rechazo a la privatización a ultranza. Hasta cierto punto, autodefinidos como *movimiento de movimientos*, carecían de un programa adecuado para ejercer, como partido político, labores de gobierno nacional y de oposición. Las propuestas económicas de LCR y, en general, sus principios políticos rectores eran indefinidos y formaban parte de la retórica de la oposición a los partidos políticos tradicionales (Ellner, 1995: 263; López Maya, 2005: 156). Esto se ponía de manifiesto también en el llamado Documento-Base presentado al cuerpo electoral en 1993.

Desde 1983, tras la muerte de Maneiro y la obtención del control sobre el partido por parte del grupo *matancero*, sus principales bases sociales de apoyo fueron las de los obreros de la industria siderúrgica. A lo largo del período estudiado (1989-1998), y a pesar de su primera expansión electoral, LCR fue un partido fundamentalmente obrerista de base local. En 1990, Velásquez declaró que LCR era un partido de los trabajadores orientado a la articulación y defensa de las demandas inmediatas de éstos (es decir, de aquellas demandas múltiples que los *matanceros* resumían en la noción de “democracia sindical”), así como –en términos generales– de la autonomía de los sectores de la sociedad civil frente a los partidos políticos. La interpelación que los *radicales* hacían a las demandas de base a nivel nacional, basada en el obrerismo, no logró alcanzar a otros sectores sociales. Las primeras victorias electorales de los *radicales*, incluso en las elecciones presidenciales de 1993 en las que Velásquez obtuvo

el cuarto lugar, tuvieron como centro la política regional en el estado Bolívar, que era una región en la que la clase obrera era mayoritaria.⁶⁵ Pero estas condiciones no existían en otras regiones.

He señalado que LCR mostraba una tensión entre los objetivos sociales y los objetivos político-electorales de la organización. De hecho, la postura de los dirigentes de LCR ante el retroceso electoral de 1995 fue afirmar que LCR no permanecería como una fuerza política nacional porque su lucha era exclusivamente una lucha social. La “democracia sindical” –la tesis del *nuevo sindicalismo*- era su principal objetivo, y las bases obreras de Bolívar su principal base de apoyo. De alguna manera, por tanto, tras los fracasos electorales de 1995, los *radicales* renunciaban a su voluntad de articulación política de demandas de nuevos sectores sociales en el campo nacional.

En este sentido, el localismo obrerista de los *radicales*, centrado en la demanda de la “democracia sindical” del *nuevo sindicalismo*, y luego en un programa político basado en las experiencias de los gobiernos regionales, fue un impedimento para la consolidación a largo plazo de su capacidad de articulación de las demandas populares a nivel nacional. A pesar del resultado electoral de 1993, los recursos de movilización que tenían a su disposición Velásquez y los *radicales* fueron insuficientes para transformar un movimiento local en un movimiento nacional. En buena medida, los objetivos políticos y los objetivos sociales de la organización mantenían entre sí una tensión irresoluble que a la postre interrumpiría su expansión. Incluso con objetivos y programas imprecisos, después de 1995, tales limitaciones serían consideradas por los

⁶⁵ En cuanto a la victoria del *radical* Istúriz en Caracas, donde las bases de apoyo de LCR estaban comparativamente menos organizadas, cabría sugerir la hipótesis de que lo que movilizó a los electores en torno a su candidatura fue que era el único candidato que no pertenecía a los partidos políticos tradicionales. Además, el discurso de Istúriz tras la insurrección militar de febrero de 1992 –que comenté en el capítulo II- puede haber sido uno de sus principales apoyos. No obstante, para las elecciones regionales de 1995 Istúriz no logró ampliar –ni siquiera mantener- el respaldo electoral obtenido en 1992, por lo que perdió en su intento de alcanzar la reelección inmediata, siendo éste una de las principales muestras del descenso electoral de LCR desde 1995. El propio Istúriz consideró que había sido la incapacidad de su organización política para movilizar a los sectores populares en Caracas la razón de su derrota electoral.

propios *radicales* como definitorios de su organización política y de su proyecto, y de este modo acabarían renunciando a la voluntad de hegemonización de demandas populares a nivel nacional mediante los procedimientos electorales existentes.

Pero no sólo los recursos de LCR y el carácter local de sus bases explican los límites que encontraron los *radicales* para su consolidación como instancia de articulación. La posición que ocuparon en la coyuntura política venezolana tiene que ser puesta en relación y comparada con los recursos retórico-organizativos de otras organizaciones con pretensiones de articular políticamente a las demandas populares. La principal de ellas sería la del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.

3) El Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 y lo *nacional-popular*

El caracazo produjo, si bien no las reformas políticas en sí mismas, sí al menos un aceleramiento del proceso legislativo que condujo a ellas. Pero su represión, tanto por su intensidad como por el recurso al ejército para ejecutarla, provocó al mismo tiempo una ruptura en la relación, institucionalizada desde 1958, entre el poder civil y el poder militar. La insurrección militar de febrero de 1992 fue la principal muestra de esta ruptura.

Si LCR fue uno de los partidos que, en la coyuntura de las reformas políticas, logró movilizar los recursos que había previamente acumulado –en su caso, desde 1971- para alcanzar mayores espacios de poder en las instituciones representativas, la relación del MBR 200 con las reformas es más bien indirecta. En su momento de irrupción, los *bolivarianos* no provenían de la política regional que las reformas habían hecho posible, sino de una organización militar clandestina conformada en 1983 que, especialmente después de 1989, llegaría a plantearse como objetivo explícito llevar a cabo una rebelión cívico-militar para derrocar al gobierno de Pérez. Durante el encarcelamiento de los militares insurrectos (de 1992 hasta 1994), el grupo se dividiría –entre otras

cuestiones- a propósito a la política electoral: por una parte, un segmento de los militares se mostraría dispuesto a aprovechar las oportunidades políticas abiertas por las reformas y, por tanto, a apoyar a otros grupos y participar ellos mismos en los procesos electorales; por otra parte, otros militares mantendrían una postura abstencionista hasta que el presidente Pérez renunciara a su cargo y se convocara una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con carácter “popular”. Esto es lo que convierte al impacto de las reformas políticas en el MBR-200 en un impacto más bien indirecto.

Dicho de otra manera, si la expansión de LCR fue en parte una consecuencia de las reformas aceleradas tras las movilizaciones sociales de 1989, la emergencia del MBR-200 fue más bien una consecuencia de la represión ocurrida ese mismo año. La aparición -y posterior expansión- del movimiento bolivariano, más que una consecuencia de las reformas, fue uno de los efectos más contundentes de la crisis política iniciada con *El caracazo* y las movilizaciones sociales, una crisis de la que la insurrección militar era a la vez un nuevo efecto y una nueva causa. Es decir, sin la crisis abierta en 1989 difícilmente se habrían dado las condiciones para una rebelión militar, pero la rebelión militar implicaba al mismo tiempo un nuevo ahondamiento de la crisis.

A diferencia de LCR, que el MBR-200, en tanto que organización político-militar, no se haya presentado a elecciones hasta 1998, hace imposible aportar datos firmes sobre el alcance de su implantación y apoyo en las bases sociales en los años previos.⁶⁶ Aquellos miembros de la organización que, tras la salida de prisión, optaron por la competencia electoral, con candidaturas respaldadas por otros partidos (especialmente LCR), obtuvieron algunas victorias en las elecciones regionales de 1995. Pero estos resultados sólo pueden ser utilizados como indicadores de una tendencia

⁶⁶ Para un análisis de las primeras bases electorales del bolivarianismo por sectores sociales, véase Canache (2002).

general. Sin embargo, el argumento que defenderé es que los *bolivarianos*, al igual que los *radicales*, no hubieran podido aprovechar las oportunidades políticas abiertas en la coyuntura venezolana si, previamente, no hubieran acumulado recursos de movilización desde los años ochenta. A este respecto, destacan dos aspectos cruciales: 1) la elaboración de la demanda de convocar a una ANC; y 2) el liderazgo político, de alcance nacional, del teniente coronel Chávez Frías después de la insurrección de 1992. Esta tercera sección está dedicada a mostrar tal acumulación de recursos de movilización.

El MBR-200 atravesó cuatro etapas diferenciadas. La *primera* comienza con su conformación como grupo en 1983 y se extiende hasta la crisis de 1989. En ella, mediante círculos de trabajo compuestos por militares, sus integrantes realizaron distintos análisis de la situación política nacional, definieron el núcleo de una retórica – el llamado *Árbol de las Tres Raíces*- y elaboraron la tesis del movimiento cívico-militar bolivariano. La *segunda* etapa inicia con los acontecimientos de *El caracazo* en 1989 y la represión estatal, así como el ciclo de protesta posterior. En ella comenzaron (o aceleraron) el proceso conspirativo que condujo finalmente al alzamiento militar de 1992. Una *tercera* etapa, tras la derrota militar de febrero de 1992 y hasta 1994, sería la del encarcelamiento. Dicha etapa estaría marcada por la apertura a nuevas agrupaciones sociales y políticas, la llamada a la abstención en los procesos electorales de diciembre de 1992 y de 1993 (con las divisiones que a propósito de esta decisión se produjeron en el interior del grupo), la propuesta más elaborada de convocatoria de una ANC y los proyectos de organizar un movimiento político de masas. Durante estos años ocurre la incorporación de los *bolivarianos* al debate público nacional y el surgimiento de la dirigencia del movimiento bolivariano -especialmente el liderazgo de Chávez Frías- como un posible liderazgo con alcance nacional. Y, finalmente, la *cuarta* etapa, tras el

sobreseimiento de las causas por insurrección contra los militares y la salida de la cárcel en 1994, cuyo eje principal sería, aparte del mantenimiento de la postura abstencionista y la demanda constituyente, la puesta en práctica de los proyectos de organización política de masas elaborados en prisión. Esta etapa concluye en 1997 porque en dicho año los *bolivarianos* tomarían la decisión de entrar en la competencia electoral de diciembre de 1998 con la candidatura de Chávez Frías a la presidencia.

De esta manera, analizaré en lo que sigue cada uno de estos períodos, mostrando las modificaciones que a lo largo del proceso experimentaron los *bolivarianos* como agrupación. La atención estará centrada en los recursos que tenían a su disposición en cada momento, tanto en su dimensión organizativa como en su dimensión retórica.

La historia del MBR-200 comienza en 1983, pero no termina en 1997. Interrumpo la exposición en esta última fecha, sin embargo, porque a partir de entonces comienza una nueva fase, diferenciada en cuanto a recursos, que sería en buena medida determinante para el tipo de movilización populista emergente que acabaría conduciendo a Chávez Frías a la presidencia de la República en diciembre de 1998.

El período formativo: 1983-1989

El MBR-200 fue fundado a finales de 1982 por un pequeño grupo de cuadros bajos del ejército con formación profesional.⁶⁷ Dicho grupo estaba compuesto por militares como Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Carlés y Urdaneta Hernández. Salvo Acosta Carlés, que moriría en 1989 durante los sucesos de febrero de ese año, todos ellos fueron dirigentes de la rebelión militar de 1992.

El 17 de diciembre de 1982 –nótese la fecha: el 17 de diciembre se conmemora la muerte de Simón Bolívar- hicieron un juramento colectivo ante *El Samán de Güere*, un conocido árbol, ubicado en el estado Aragua, que había sido convertido en

⁶⁷ Chávez ingresó en la Academia Militar en 1970, por lo que perteneció a la primera promoción del llamado Plan Andrés Bello, que consistía, entre otros aspectos, en dar una formación de licenciatura en Ciencias Militares a los nuevos integrantes.

monumento nacional porque –según se dice⁶⁸- bajo su sombra en alguna ocasión descansó Bolívar. El juramento del MBR-200 estaba dirigido alegóricamente, por tanto, a Bolívar, y en su texto completo afirmaba lo siguiente:

¡Juro delante de Usted / Juro por el Dios de mis padres
/ Juro por ellos / Juro por mi honor / Y juro por mi
Patria / Que no daré descanso a mi brazo / Ni reposo a
mi alma / Hasta ver rotas las cadenas que nos oprimen
/ Por la voluntad de los corruptos / Y los poderosos /
Tierra y hombres libres / Elección popular / Horror a
la oligarquía / Patria o muerte! (documento *Juramento
ante el Samán de Güere*, en Garrido, 2002)

El nombre que le dieron a la organización fue Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 porque los miembros fundadores utilizaban la figura histórica de Simón Bolívar como referente retórico central, si bien no exclusivo. El número 200 provenía del bicentenario del natalicio de Bolívar (ocurrido en 1783), fecha en la que afirman haber comenzado sus actividades como grupo.

Los primeros *bolivarianos* hacían reuniones para discutir temas políticos nacionales.⁶⁹ En consonancia con el contenido del juramento, pensaban que la democracia venezolana de 1958 poseía un carácter oligárquico y anti-popular que, en verdad, ponía en cuestión –cuando no negaba directamente- su carácter democrático. Retóricamente, el MBR-200 se identificaba a sí mismo como una organización política nacionalista y popular que basaba su doctrina en una lectura particular de la historia del proceso de conformación del Estado nacional venezolano. Al núcleo de esta retórica lo

⁶⁸ No he podido confirmar si, efectivamente, existe corroboración histórica de este dato. Algunos historiadores implícitamente lo aceptan. Véase Carrera (2005). El juramento de los *bolivarianos*, cuyo texto reproduzco a continuación, repetía –ampliando su contenido en las últimas frases- un conocido juramento, hecho por Bolívar en la ciudad de Roma el 15 de agosto de 1805, cuya última parte decía: “¡Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por mi Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!”. Era un compromiso personal de iniciar la insurgencia revolucionaria de las colonias americanas contra el Imperio español. Para la historia del juramento de los *bolivarianos*, véase Chávez (2004b: 351-354).

⁶⁹ Por el contenido del juramento, y por la referencia histórica explícita que invocaba, cabe afirmar que, en verdad, los fundadores del MBR-200 cultivaban desde el comienzo –y no desde 1989- una voluntad de conspiración contra el Estado.

llamaron *Árbol de las Tres Raíces* (documento *El libro azul* en Garrido, 2002: 101-122): con ello indicaban que el MBR-200 hallaba su base doctrinaria en Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. La *raíz robinsoniana*⁷⁰ -el Maestro- implicaba básicamente la necesidad de inventar formas originales de organización social y política para los nuevos Estados de la América española. La *raíz bolivariana* –el Político- apelaba al necesario equilibrio entre fuerzas antagonistas. Y, finalmente, la *raíz zamorana* –el Guerrero- incluía los componentes populares y anti-oligárquicos del MBR-200. En todos los casos, el movimiento se concebía a sí mismo y a su proyecto político como democráticos; llamaban a su programa la *democracia bolivariana*.

El proceso de formación de una retórica articuladora bolivariana sería una constante a lo largo de la historia del movimiento. El núcleo constituido por el *Árbol de las Tres Raíces* sería ampliado y transformado con el paso de los años. Respecto a la formación de la retórica bolivariana, Hugo Chávez ha señalado que su trabajo como líder político no fue convertirse en ideólogo de un movimiento popular sino más bien recurrir a ciertos *significantes disponibles* en la historia nacional venezolana y hacerlos pertinentes en una determinada coyuntura histórica.

El único aporte que yo he hecho es tratar de articular ideas que no son mías y presentarlas como pertinentes en este tiempo. Quizá la virtud o la ventaja es que esas ideas fueron recogidas en un gran esfuerzo de años y fueron colocadas en tierra fértil, porque las ideas pueden estar entre las piedras y nunca germinan. Pero creo que en este momento en Venezuela sin duda alguna, y ahí está la situación real que lo dice, cayeron las semillas bolivarianas de nuevo en tierra fértil. Ese, yo creo, es mi aporte. (Chávez, 2004a: 30-31)

Las actividades de organización habían comenzado, no obstante, a finales de los años setenta (Chávez, 2004a: 44). Durante los ochenta, siendo Chávez instructor en la

⁷⁰ Llamaban “robinsoniana” a esta “raíz” porque Simón Rodríguez utilizó el pseudónimo de Samuel Robinson.

Academia Militar, los *bolivarianos* formaron pequeños grupos a los que llamaron “núcleos bolivarianos” (Chávez, 2002: 11). Estos núcleos serían la base inicial de la organización dentro de los cuarteles. Pero aunque el MBR-200, por la composición de sus cuadros, tuvo un carácter básicamente militar y clandestino durante nueve años, en cuanto a su doctrina no pretendía ser una organización exclusivamente militar sino más bien cívico-militar. De allí que persiguieran establecer, desde sus inicios, articulaciones con grupos civiles, especialmente con diferentes grupos de la extrema izquierda que, de una u otra manera, provenían de la *guerra de guerrillas* de los sesenta. Entre ellos estaban el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y LCR. El hermano de Chávez, llamado Adán, era militante del primero de estos partidos, y puso en contacto a Hugo con el dirigente ex guerrillero Douglas Bravo, aunque ambos no lograron concretar un acuerdo político permanente.⁷¹ Del mismo modo, ya desde 1978 –es decir: cinco años antes de la fundación del MBR-200-, Hugo Chávez mantuvo relaciones con algunos *radicales* y ese año conoció al *matancero* Pablo Medina y a Alfredo Maneiro, dirigentes de LCR. También llegó a establecer contactos con la organización Pro Catia (del movimiento urbano popular de esa zona de Caracas) e incluso, en alguna ocasión, participó con este grupo en actividades de movilización. Los vínculos con LCR se mantendrían durante los años siguientes. La principal diferencia entre el PRV y LCR, para Chávez, y lo que determinó su mayor proximidad con los *radicales*, fue el “trabajo de masas”: “Yo tenía entonces muy clara la idea del trabajo de masas y no había eso en el grupo de Douglas [Bravo]; en cambio en La Causa R yo olía masas” (Chávez, 2002: 16). En este sentido, lo que buscaban los *bolivarianos* con estas relaciones era

⁷¹ Tanto Bravo como Chávez aclararon públicamente, después de 1998, las razones por las cuales no establecieron un acuerdo, a pesar de ciertas coincidencias sobre la concepción de un movimiento cívico-militar de izquierda. Véase la entrevista a Bravo recopilada por Garrido (2000). El texto de Garrido aporta mucha información sobre los vínculos entre ex guerrilleros y sectores de las Fuerzas Armadas desde los años sesenta.

establecer el vínculo con las masas que, dada su condición de militares activos, no podían establecer por sí mismos, al menos no de manera permanente.

A pesar de los vínculos con organizaciones de la extrema izquierda venezolana, los significantes disponibles a los que recurriría la retórica del grupo tenían más bien un carácter *nacional-popular*. En este nivel se colocaba lo que entendían por *bolivarianismo*. En efecto, a lo largo de los años, Hugo Chávez reiteraría la posición de los *bolivarianos* respecto del marxismo: “En cuanto a ideología no somos marxistas, no somos antimarxistas, somos amigos de los marxistas, y aquí tienen su espacio. Pero estamos en el esfuerzo de construir o reconstruir, de rearmar un proyecto ideológico propio, autóctono, apropiado al barro nuestro” (Chávez, 2004a: 54).

En efecto, la naturaleza cívico-militar del movimiento y esa retórica fundada en el *barro nuestro* no implicaban tanto alianzas con grupos civiles organizados como la conformación de un movimiento estructurado como una unidad entre el ejército y el pueblo. Una de las inspiraciones de esta tesis fue recogida de las experiencias de movimientos políticos como los dirigidos por el general Omar Torrijos en Panamá y por Juan Velasco Alvarado en Perú (Chávez, 2004: 42). La concepción de la unidad ejército-pueblo se basaba, por otra parte, en una cierta interpretación de la tesis maoísta según la cual *el pueblo es al ejército lo que el agua es al pez* (Chávez, 2002: 8-10). Para los *bolivarianos*, los militares, por su extracción social, no pertenecían a las clases acomodadas sino, por el contrario, a los sectores populares, por lo que existía entre los soldados y el pueblo una posible base social de identificación entre ambos.⁷²

De El caracazo a la conspiración militar: 1989-1992

En febrero de 1989 tuvo lugar *El caracazo*. Dicha protesta modificó las condiciones en las que tenían que actuar los distintos grupos organizados, tanto los

⁷² Para Chávez “los soldados son campesinos, muchachos de los barrios” (Chávez, 2002: 10).

partidos políticos como otras organizaciones político-sociales. En cuanto al ejército, el rechazo de amplios sectores sociales a las políticas del gobierno de Pérez, así como el uso de la fuerza militar para reprimir la movilización, provocaron una ruptura entre algunos sectores del ejército –en particular, entre jóvenes oficiales de rango medio- y el gobierno de AD. Tal ruptura se puso de manifiesto con el intento de derrocamiento del gobierno en febrero de 1992.

Si bien el núcleo de los militares que dirigieron la insurrección había sido conformado nueve años antes, y éstos se habían planteado ya –al menos implícitamente y a largo plazo- una táctica insurreccional, los acontecimientos ocurridos a partir de 1989, en cuanto mostraban el ahondamiento de la crisis política, aceleraron el proceso de ruptura entre el gobierno civil y algunos grupos dentro del ejército. En efecto, para los *bolivarianos*, la represión militar de 1989 supuso un “punto de no retorno” en el programa del alzamiento:

Cuando Carlos Andrés Pérez envió a la Fuerza Armada a la calle a reprimir aquella explosión social y hubo una masacre, los militares bolivarianos del MBR 200 analizamos que habíamos pasado el punto de no retorno y decidimos que había que ir a las armas. No podíamos seguir siendo los cancerberos de un régimen genocida. Ese acontecimiento fue un catalizador del MBR 200. Comenzamos entonces a acelerar la organización del Movimiento, la búsqueda de contactos con civiles y movimientos populares; a pensar en la estrategia, la ideología, pero, sobre todo, en la estrategia: el cómo hacer para trascender una situación y buscar una transición hacia otra. (Chávez, 2002: 19)

De esta manera, el MBR-200 estaba formado desde diciembre de 1982, pero *El caracazo* constituyó una modificación de la estructura de oportunidades políticas propicia –a juicio de los militares insurgentes- para el alzamiento armado.

Como señalé en el capítulo II, los *bolivarianos* incorporaron entre las razones que justificaban el alzamiento la necesidad de satisfacer algunas *demandas particulares*

provenientes de las Fuerzas Armadas. Entre ellas destacaban cuatro especialmente relevantes para este sector: 1) la demanda de no utilizar al ejército en las prácticas represivas del Estado frente a las movilizaciones sociales; 2) la demanda de reducir la injerencia de los partidos políticos en los procedimientos de ascenso y distribución de cargos dentro del ejército; 3) la demanda de defender la soberanía territorial del Estado en la coyuntura crítica en la disputa por la soberanía del Golfo de Venezuela con el Estado colombiano; y 4) la demanda de ampliar los mecanismos de participación política de los militares –que como cuerpo, según la Constitución de 1961, tenían el carácter de “obedientes pero no deliberantes”-.⁷³

Pero el MBR-200 no sólo llevó a cabo la insurrección con el objeto de defender *demandas particulares del sector militar* sino que, al mismo tiempo, pretendía *articular políticamente demandas nacionales de mayor alcance*. Y fue allí donde apareció, en su versión inicial, la tesis central de la ANC. Entre las decisiones políticas que los militares insurrectos tomarían, en el caso de que logaran derrocar a Pérez y controlar el poder político, estaba la revocación del mandato de todos los miembros de los Poderes Públicos –en primer lugar, del presidente Pérez, pero también de los diputados y senadores del Congreso Nacional, de los funcionarios del Poder Judicial y de los integrantes del Consejo Supremo Electoral. El mecanismo utilizado para legitimar tales decisiones sería la convocatoria de un referendo popular (documento *¿Y cómo salir de este laberinto?*, en Garrido, 2002: 140-145; Zago, 1992; Maya, 2005: 168). En el mismo referendo se consultaría a los electores sobre su voluntad para convocar a una ANC en la que –al menos en principio- no podrían participar los miembros de la clase política tradicional, fundamentalmente *adecos*, *copeyanos* y dirigentes de las corporaciones empresariales y sindicales.

⁷³ Por cierto, aunque el tema desborde la limitación cronológica planteada para esta investigación, cabe decir que estas cuatro demandas serían incorporadas en el nuevo régimen político instaurado en 1999 tras las decisiones de la ANC promovida por los *bolivarianos*.

En los años 1990-1991, en Colombia se realizó un proceso constituyente que, según el testimonio de los *bolivarianos*, fue un ejemplo de lo que podía hacerse en Venezuela (Chávez, 2002). Lo cierto es que la idea de la ANC no fue expuesta, por primera vez, por los militares alzados en 1992. Antes de la asonada militar, al menos dos grupos habían presentado públicamente la propuesta de una ANC. En primer lugar, en 1991, en el informe preparado por la Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución (conformada en 1989, después de *El caracazo*), presidida por el senador Rafael Caldera, se recomendaba al Congreso Nacional una reforma a la Constitución de 1961 que hiciera posible la convocatoria a una ANC. En segundo lugar, el grupo de opinión autodenominado Frente Patriótico, en el que participaban Juan Liscano y Manuel Quijada, mantenía una posición crítica respecto al proceso de reformas en curso desde la fundación de la COPRE en 1984, y también proponían como solución a la crisis política la ANC (Combellas, 2007: 47-51). En términos generales, las posiciones respecto a la ANC antes de la rebelión militar eran básicamente dos: la *postura reformista* de la Comisión Bicameral y la *postura radical* del Frente Patriótico.

Tras los acontecimientos de febrero de 1992, los *bolivarianos* asumirían, junto al Frente Patriótico, la demanda constituyente en su versión *radicalizada* como núcleo de su programa político: defenderían una ANC originaria y popular, con plenos poderes para transformar el régimen político y sin necesidad de reformar la Constitución de 1961 para posibilitar su convocatoria.⁷⁴ Años después Chávez resumiría de esta manera el sentido que tenía la ANC para los *bolivarianos*:

El nacimiento de lo nuevo depende de la muerte de lo viejo. La Constituyente, el poder constituyente desatado, el proceso constituyente y la asamblea a la que estamos a punto de llegar, puede ser esa batalla decisiva para que muera lo viejo y para que nazca lo

⁷⁴ Para Ricardo Combellas, la posición de los bolivarianos respecto a la ANC atravesaría varias etapas: una etapa jacobina, una etapa corporativa y, finalmente, hacia 1998, una etapa democrático-plebiscitaria. Véase Combellas (2007).

nuevo. Puede ser la batalla decisiva y estamos jugando muy fuerte desde hace años para que lo sea. Y forma parte del instrumento político para lograr esa transformación, ese salto, esa transición hacia la creación de un nuevo sistema político. Y ese sistema político debe tener una inmensa legitimidad. ¿Y quién le dará la legitimidad? La participación del pueblo a través del proceso constituyente. (Chávez, 2004a: 45)

Desde el punto de vista de los *bolivarianos* en 1992, en la medida en que no pensaban instaurar un gobierno *de facto* compuesto exclusivamente por militares una vez controlado el poder político (al modo de las Juntas de Gobierno militares), ni consideraban que su alzamiento tuviera las mismas características de los golpes de Estado militares tradicionales, la convocatoria a una ANC mediante un referendo popular era el modo de responder democráticamente a la crisis nacional. A su juicio, el campo político venezolano atravesaba una “crisis estructural” –a la que solían referirse como “laberinto”- que exigía decisiones radicales orientadas a la relegitimación de las instituciones de representación (documento *Las razones que nos obligaron a insurgir*, en Garrido, 2002: 128-137). Dado que el contenido concreto del nuevo régimen no fue siempre explícito y cambió con el paso del tiempo, a partir de 1992 *la demanda constituyente se convertiría –en su vacuidad- en una demanda de incorporación de las demandas populares* presentes al menos desde 1989.

Los insurgentes movilizaron diez batallones compuestos por unos seis mil miembros del ejército. Pero la rebelión militar no pudo alcanzar los objetivos que se había planteado. La mañana del 4 de febrero, ante las cámaras de televisión, el entonces desconocido teniente coronel Chávez Frías llamó a sus compañeros de armas a la rendición. En poco más de un minuto de alocución, los *bolivarianos* lograron presentar ante la opinión pública un movimiento militar –que llamaron entonces “movimiento bolivariano”- que, a pesar de la derrota, se mostraba dispuesto a recoger las demandas

sociales que no estaban siendo satisfechas por el gobierno de Pérez. Tal movimiento, aparte de nombre y programa político, tenía un líder.

Algunos de los grupos civiles con los que habían llevado a cabo los preparativos del levantamiento –especialmente, algunos sectores de los *radicales*-, decidieron no participar pocas horas antes de la fecha acordada para el alzamiento.⁷⁵ Ellos constituían el inicial complemento civil de la unidad cívico-militar que definía el programa bolivariano y, sobre todo, aseguraban la presencia activa de las masas en la fecha del golpe. Para los *bolivarianos*, una de las razones de la derrota militar de 1992 fue, precisamente, la ausencia de la movilización popular -que habían planeado y de hecho esperaban- en apoyo a su movimiento: “No hubo tal movilización popular, nada. Nos quedamos entonces solos en la rebelión, sin pueblo, como en el vacío, como pez sin el agua” (Chávez, 2002: 23).

La prisión: 1992-1994

Alrededor de trescientos miembros del ejército, todos los cuales habían participado en la rebelión, fueron detenidos. Los *bolivarianos*, de momento, desistieron de continuar por la vía armada. Militarmente, no había condiciones para una nueva rebelión: por una parte, los cuadros del MBR-200 estaban en prisión o habían sido dados de baja; en cuanto a los que seguían activos dentro de las Fuerzas Armadas, eran vigilados, perseguidos o enviados a zonas alejadas de los centros estratégicos.

Estando encarcelados, sin embargo, los miembros del MBR-200 asumieron posturas públicas sobre los distintos acontecimientos políticos nacionales. Mantuvieron posiciones de antagonismo radical con lo que llamaban el *puntofijismo* y los *cogollos* de los partidos políticos. Para los *bolivarianos*, el régimen político anterior representaba *lo viejo*, mientras que su agrupación representaba *lo nuevo*.

⁷⁵ Al respecto, Chávez afirmaría: “Quizás si Maneiro no hubiese muerto las cosas hubiesen funcionado de otra manera” (Chávez, 2002: 23).

Coexisten dos niveles: el de los fenómenos observables y el de las estructuras bajo la superficie. // El MBR-200 está en plena actividad volcánica por todo el territorio nacional y muy poco movimiento puede ser apreciado sobre el paisaje. // Ya llegarán las condiciones necesarias para entrar en erupción, conjuntamente con la Fuerza Popular. // Nosotros, los militares del 4F y del 27N, formamos parte de una nueva sociedad que se anunció ya en los primeros espasmos de un parto formidable. // Si de muertos vamos a hablar, ése es el viejo modelo dominante. Se trata, además, de una muerte anunciada y necesaria. Para que lo nuevo pueda nacer. (Documento *A un año del despertar* desde la cárcel de Yare en 1993, en Garrido, 2002: 244)

También recibieron visitas de grupos políticos y personajes públicos (Ojeda, 1993). Todos estos contactos introducirían transformaciones importantes en el grupo, en particular en su retórica articuladora, de modo que la fase del encierro se convertiría en un período caracterizado por una apertura a demandas, grupos y sectores sociales más amplios.

En noviembre de 1992 tuvo lugar una segunda asonada militar; pero tampoco tuvo éxito. Aunque los militares que dirigieron este segundo intento fallido de derrocar a Pérez no pertenecían formalmente al MBR-200, porque tenían una organización propia –el Movimiento 5 de julio–, los *bolivarianos* se solidarizaron inmediatamente con ellos. Ante las elecciones regionales de 1992, pocos días después del segundo alzamiento, los *bolivarianos* llamaron por primera vez a la abstención.

El MBR-200 no logró derrocar por la fuerza al gobierno de Pérez, pero desde la cárcel los *bolivarianos* se sumaron a las movilizaciones sociales y a los distintos grupos de presión que demandaban la renuncia del presidente.⁷⁶ Como dije en el capítulo II, la salida de Pérez de la presidencia por cargos de corrupción en 1993, meses antes de

⁷⁶ Como señalé en el capítulo II, las movilizaciones sociales y las protestas organizadas por grupos de presión exigiendo la renuncia de Pérez, por ejemplo utilizando el repertorio de acción de los *caceloros*, fueron abundantes a lo largo del período. Entre los personajes y grupos que demandaban la renuncia de Pérez se encontraban los *radicales*, Rafael Caldera e incluso algunos miembros de AD.

finalizar su mandato constitucional, introdujo un cambio en la situación. Para algunos de los militares presos, este acontecimiento, al haber sido ejecutado mediante la intervención del Fiscal General de la República y utilizando los procedimientos institucionales existentes, era una táctica de los partidos políticos para simular cambios que, en último término, no eran reales ni satisfacían las demandas sociales. De hecho, para el líder de los *bolivarianos*, la destitución de Pérez fue “una jugada de las clases dominantes” (Chávez, 2002: 25). En cualquier caso, la demanda de la renuncia de Pérez, que había aglutinado a sectores políticos y sociales de tendencias diversas, perdió sentido en ese momento. Además, se preparaba ya la coyuntura electoral de diciembre de 1993.

En el segundo proceso electoral que tuvo lugar durante el encarcelamiento de la dirigencia del MBR-200, ésta reiteró el llamado a la abstención que había hecho el año anterior, pero esta vez llamó a una “abstención activa”: se trataba de rechazar a los partidos políticos y a las propias elecciones hasta que fuera convocada, en su lugar, una ANC con amplia participación popular. Los *bolivarianos* acusaron a Caldera y a LCR – cuyos avances en términos de resultados fueron, como mostré arriba, los más importantes en 1993, obteniendo el primero la victoria y la segunda su mejor resultado electoral a nivel nacional- de aprovecharse electoralmente del movimiento surgido a partir del 4 de febrero, en particular con los discursos de Caldera e Istúriz en el Congreso Nacional la mañana del levantamiento.

La Causa R comenzó a utilizar nuestra prisión como un símbolo del Partido y comenzaron a correr versiones de que yo y otros militares más éramos miembros de su dirección, cosa que nunca fue cierta. Manejaron las cosas con interés electoral, lo cual causó muchos problemas. (Chávez, 2002: 26)

Aparte de las restricciones impuestas por la cárcel, a lo largo del período que comenzó en 1992 y terminó en 1994, los *bolivarianos* consideraron que, a pesar del

apoyo social que recibían, carecían de una organización política propia que estuviera ligada de un modo más estructurado con las demandas populares. En verdad, las manifestaciones de apoyo a los militares encarcelados fueron múltiples.

Chávez nuestro que estás en la cárcel, // santificado sea tu golpe, // venga (vengar) a nosotros, tu pueblo, // hágase tu voluntad, // la de Venezuela, // la de tu ejército, // danos hoy la confianza ya perdida, // y no perdones a los traidores, // así como no perdonaremos a los que te aprehendieron, // sálvanos de tanta corrupción, // y líbranos de Carlos Andrés Pérez. // Amén. (Carta entregada a Chávez Frías por un caraqueño anónimo durante la prisión en la Cárcel de San Carlos pocos días después del alzamiento militar, en Chávez, 2004b)

A este respecto, Chávez afirmaría lo siguiente: “Sabíamos que en el pueblo existía un sentimiento de simpatía hacia nosotros. Aún no había una organización popular” (Chávez, 2002: 26). En la cárcel elaborarían los primeros proyectos para crear dicha organización popular.

Hacia la organización política de masas: 1994-1997

El 26 de marzo de 1994, poco más de dos meses después de haber asumido el cargo como presidente electo, Rafael Caldera decidió, mediante un decreto para el cual estaba constitucionalmente facultado, el sobreseimiento de las causas por insurrección para los militares rebeldes de 1992. La condición impuesta por el nuevo gobierno para la liberación de los militares presos fue la aceptación de su retiro de las Fuerzas Armadas. Pero se conservaron los salarios de los militares que hubieran aceptado el retiro.

De esta manera, la salida de prisión de Chávez Frías y los principales dirigentes del MBR-200 introdujo una nueva coyuntura para la agrupación. En efecto, la decisión de Caldera modificó la estructura de oportunidades políticas que se les presentaban a los *bolivarianos*: a partir de ese momento, aunque retirados de sus funciones como militares

en ejercicio, perdían sus cargos frente a la ley militar y podían integrarse a la política civil.

Desde el primer momento, Chávez anunció su disposición de convertir a la organización insurgente en una organización política con pretensiones de alcanzar la presidencia (López Maya, 2005). En declaraciones a la prensa nacional, Chávez afirmó ante las preguntas por sus proyectos personales una vez liberado e incorporado a la vida civil: “vamos al poder” (Chávez, 2004a: 33-34). La idea del MBR-200 era transformar el movimiento básicamente militar-clandestino que había sido hasta entonces en un nuevo movimiento popular de masas con aspiraciones de constituir una opción real de poder. En este sentido, los militares *bolivarianos*, en condición de retiro, pudieron hacerlo legalmente y se dedicaron a la expansión nacional de la organización inicial. El pez iría por sí mismo -por decirlo así- a la búsqueda del agua.

Lo cierto es que la condición de abandonar la carrera militar, exigida por el gobierno de Caldera, sólo afectó a algunos *bolivarianos*: básicamente, a los principales jefes de la insurrección. Esta fue una de las razones por las que la organización, durante los primeros meses tras su liberación y a pesar de iniciar un acercamiento con diversos sectores sociales, mantuvo la posibilidad de un nuevo movimiento insurreccional dentro de las Fuerzas Armadas, esta vez con el apoyo popular que pudieran movilizar los *bolivarianos* en condición de retiro desde la calle. El propio Chávez afirma que: “En esos primeros años 94 y 95 no habíamos cancelado la posibilidad de un nuevo movimiento armado, pero igual salimos a evaluar posibilidades, fuerza verdadera, fuerza real” (Chávez, 2002: 31).

Tras la salida de la cárcel, puesto que no había “fuerza real” para llevar a cabo un nuevo movimiento armado, los *bolivarianos* comenzaron a hacer recorridos por el territorio nacional y promover las tareas de organización del movimiento cívico-militar.

Yo [Chávez] creo que no dejamos de ir a ninguna ciudad, pueblito, campamento, pueblo indígena, barrio. Íbamos de pueblo en pueblo con la bandera de la Constituyente, ayudando a la organización, ampliándola, fortaleciéndola [...] Dejó de ser militar clandestino para transformarse en un movimiento popular, aunque con corrientes militares siempre presentes allí; un movimiento cívico-militar. (Chávez, 2002: 31)

Los *bolivarianos* pretendían expandir la organización hasta alcanzar una cobertura nacional. Su objetivo era establecer vínculos con diferentes sectores sociales y poder así convertir al MBR-200 en una organización de masas (López Maya, 2005: 170). Crearon a lo largo del territorio nacional círculos o comités en torno a demandas específicas de la población no organizada: contra el desempleo, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, por la soberanía nacional (a propósito de la cuestión fronteriza con Colombia en el Golfo de Venezuela) (documento *Comités Bolivarianos*, en Garrido, 2002: 150-153; Chávez, 2002). Por otra parte, plantearon la idea de formar lo que llamaron un *polinomio de poder* que pudiera articular también las demandas de los diversos sectores sociales organizados: la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas, el empresariado, los sindicatos (Garrido, 2002).

Al igual que otras agrupaciones políticas –como LCR, por ejemplo-, la organización del MBR-200 pretendía devenir organización, pero sin repetir o reproducir en su interior las estructuras organizativas de los partidos políticos tradicionales (López Maya, 2005). Desde este nivel, los *bolivarianos* querían mostrar su antagonismo con los partidos. El ingreso al MBR-200 no dependía de procedimientos formales o requisitos específicos: se hacía mediante la asunción de un “compromiso bolivariano” en el que el nuevo miembro se comprometía a defender valores genéricos como honestidad, disposición al trabajo, humildad y solidaridad. Aunque había una dirigencia nacional, pretendían que la incorporación de bases fuera lo más amplia posible y no se ejerciera

mediante decisiones “desde arriba”. Los militantes incorporados de esta manera formaban “círculos bolivarianos” y éstos se vinculaban entre sí, a su vez, por “coordinadoras bolivarianas”, en los municipios y regiones. Las principales actividades de los “círculos” y las “coordinadoras” a nivel nacional consistían en hacer reuniones de discusión política e ideológica entre militantes y convocar asambleas (municipales, estatales y nacionales) para recoger demandas y propuestas sobre diferentes temas. De estas actividades surgiría el *Proyecto Nacional Simón Bolívar* que se convertiría en el eje de la propuesta política del MBR-200 (*Documentos Programáticos*, en Garrido, 2002: 157-211).

La propuesta organizativa de los *bolivarianos* no sólo aspiraba a diferenciarse de las estructuras partidistas de AD y COPEI, sino también de la organización vertical de las Fuerzas Armadas, por lo que buscaron reforzar mecanismos de organización horizontal. De hecho, aparte de la expansión de la organización y la incorporación de demandas de grupos organizados y no organizados, las actividades de los “círculos” y las “coordinadoras” tenían por objetivo la reducción de las tensiones que se producían entre los sectores militares y los sectores civiles dentro del MBR-200. Para los *bolivarianos*, el programa de composición cívico-militar, si bien producía inevitablemente tensiones organizativas –algunas de las cuales, como he indicado, se habían hecho presentes desde la fundación del movimiento y también en la propia logística de la conspiración militar-, dotaba al movimiento de su especificidad frente a otras agrupaciones políticas –tradicionales y también de reciente emergencia- y eran tendencias complementarias. No obstante, hubo incompreensión y desconfianza por parte de algunos grupos de izquierda hacia el movimiento cívico-militar bolivariano (Chávez, 2002: 33).

La dos tesis centrales del MBR-200 eran, en continuidad con lo que había sido su postura desde la cárcel, la demanda de una ANC y la política abstencionista. Ambas, además, estaban estrechamente vinculadas: en la retórica de los dirigentes del movimiento, la ANC era la estrategia; el abstencionismo, la táctica (López Maya, 2005: 168). Desde la perspectiva de los *bolivarianos*, participar en las elecciones era una forma de aceptar implícitamente un orden político que, dada su descomposición y poca legitimidad, era más bien necesario transformar radicalmente.

[La abstención] no fue una decisión de la noche a la mañana. Era una convicción de que por ese camino de elecciones locales no íbamos a llegar al camino de la solución, porque el problema nuestro es integral; no es un problema sectorial. Venezuela no se va arreglar por una pequeña parte primero, para ir avanzando hacia el todo. No. Aquí el todo es más que las partes. Aquí o se arregla el todo o las partes no tienen arreglo. (Chávez, 2004a: 34)

Sin embargo, la política abstencionista, que fue defendida por la agrupación hasta 1997, produjo una división importante dentro del MBR-200. En 1993, tras la renuncia forzada de Pérez y con un nuevo proceso electoral próximo en el tiempo, el teniente coronel Arias Cárdenas, quien había dirigido las operaciones militares insurgentes en el estado Zulia y era considerado como el líder más importante del movimiento después de Chávez, se separó de la organización por no aceptar la política abstencionista. La posición más firme respecto al mantenimiento del llamado a la abstención era la sostenida por Chávez Frías, quien –como dije arriba- pensaba que la salida de Pérez y la emergencia de la candidatura de Caldera eran intentos de los *cogollos* partidistas para postergar las medidas orientadas a la satisfacción de las demandas populares. A partir de entonces, y también posteriormente, otros militares abandonarían la organización y se presentarían a elecciones con el apoyo de LCR. De hecho, en 1995, Arias Cárdenas ganó las elecciones a la gobernación de Zulia, apoyado

por LCR. El estado Zulia era el mismo estado que Arias Cárdenas -como se dice en el capítulo II- había controlado militarmente al mando de sus tropas tres años antes, deteniendo al gobernador electo, el *copeyano* Álvarez Paz.

La demanda de una ANC fue la demanda que tuvo mayor elaboración por parte de los *bolivarianos* a lo largo del proceso. Muchos documentos lo muestran (*Documentos Programáticos*, en Garrido, 2002: 157-211). En 1995 convocaron a una asamblea abierta a todos los sectores interesados para discutir la propuesta e incluir demandas de grupos más amplios. Le dieron el nombre de *Asamblea Nacional Pro Constituyente Popular*. Como la demanda constituyente se había expandido entre otros sectores políticos y sociales, el MBR-200 quiso diferenciar su propuesta de todas las propuestas alternativas: desde su punto de vista, las propuestas de otros grupos eran sectarias y partidistas, y no articulaban realmente las demandas del pueblo. La ANC de los *bolivarianos* tendría que ser una asamblea fundamentalmente popular en contra del *puntofijismo*.

En efecto, más allá de las propuestas concretas que tenían para la asamblea -y que variaron considerablemente en el tiempo-, lo que permaneció a lo largo de los años fue la idea de que la ANC tenía que significar la reestructuración de un Estado que, a su juicio, atravesaba una descomposición radical, así como la redefinición de las relaciones del Estado con la sociedad. Los *bolivarianos*, con la demanda constituyente, no apelaban a una profundización del proceso de reformas iniciado en los ochenta, sino a una relegitimación del régimen democrático mediante una interpelación a la voluntad popular. En ningún caso criticaban la democracia como régimen político, pero sí su apropiación oligárquica por distintos grupos sociales, en particular los *cogollos* de los partidos políticos, las cúpulas empresariales y la dirigencia sindical de la CTV. En oposición a este carácter oligárquico de la democracia partidista venezolana, los

bolivarianos defendían un proyecto de radicalización democrática a favor del principio de soberanía popular (Garrido, 2002; Coppedge, 2005). El anti-partidismo era para el MBR-200 el reverso de su vocación de articular demandas populares; en su retórica, la crisis política venezolana se planteaba bajo la forma de un antagonismo radical: los *cogollos* o el *pueblo*. De esta manera, los *bolivarianos* se colocaban del lado del pueblo en *contra* de los partidos políticos. La *democracia bolivariana*, tal y como llamaban a su programa político, aspiraría a ser un régimen democrático-popular y el método para su consecución sería la ANC. La retórica articuladora bolivariana presentaba una textura nacional-popular.

En 1997, tras la evaluación de ciertas encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 1998 y una intensa discusión en el interior de la agrupación, los *bolivarianos* decidieron abrir la “ventana táctica” que hasta entonces habían mantenido cerrada: decidieron presentarse, por primera vez como partido, a la competencia electoral, con la candidatura de Chávez a la presidencia. En ese momento, la política abstencionista y la demanda constituyente dejaron de formar parte de una postura política indisoluble. A partir de 1997 los *bolivarianos* comenzaron a considerar que era posible introducirse en el proceso electoral y, de esa manera, tras una (todavía incierta) victoria electoral, convocar al pueblo para que manifestara su voluntad sobre la necesidad de conformar una ANC. El objetivo de la asamblea seguiría siendo la “refundación de la República”. En este sentido, por primera vez los *bolivarianos* como agrupación juzgaron que era posible aproximarse a la estrategia constituyente –a cuyo fin nunca renunciaron- mediante una táctica electoral –que entonces era nueva.

No obstante, el temor por lo que llamaron el *pantano* electoral continuó:

Podía llevarnos por un camino catastrófico, que podía encerrarnos en la trampa de las fuerzas del sistema de Punto Fijo; que podía conducirnos a un pantano en el cual podíamos hundirnos [...] Yo tenía mucho miedo

de terminar con algunos diputaditos, algunos
gubernadorcitos, negociando. (Chávez, 2002: 35)

En diciembre de 1998, poco más de un año después de esta decisión, Hugo Chávez Frías ganaría la presidencia de la República. En el acto de juramento del cargo, ante la Constitución *puntofijista* de 1961, se formalizaría el compromiso político de convocar a una ANC originaria y popular para “refundar la República”.

Conclusiones

En esta investigación partí de dos preguntas. [1] ¿Cuáles son los elementos constitutivos -o los componentes que podrían definir- al movimiento político bolivariano en Venezuela en el período 1989-1998?; [2] ¿Por qué y cómo surgió este movimiento político, articulado -en un contexto de fuerte antagonismo- bajo la conducción de un líder –el teniente coronel Hugo Chávez Frías-, un partido político –el MBR-200, posteriormente MVR- y una propuesta de restructuración del régimen político (la ANC)?

La primera pregunta buscaba una definición del movimiento: decir *qué es o en qué consiste*. La segunda, por su parte, buscaba su explicación: mostrar sus condiciones de emergencia, *por qué y cómo surgió*.

Ambas preguntas habían recibido ya algunas respuestas por la literatura sobre el tema.

En cuanto a la primera, se ha dicho que el movimiento bolivariano era un movimiento neopopulista. La literatura especializada entiende por *movimiento neopopulista*, básicamente, dos cosas:

- 1) En primer lugar, una movilización en la que está presente un determinado *estilo político*. Algunos autores no juzgan relevante definir los rasgos principales de tal estilo (Knigh). Otros, por el contrario, intentan una definición mínima y consideran que el estilo populista consiste en una *apelación al pueblo*, que tiende a ser directa o no mediada, y se enuncia en oposición a otros grupos sociales (“los de arriba”, los extranjeros, etc.) (Taguieff).
- 2) En segundo lugar, una *estrategia política* llevada a cabo por líderes personalistas (a veces carismáticos) que instrumentalizan –o utilizan como

recurso- a masas que presentan dos características fundamentales: primero, son amplias en número; segundo, están siempre desorganizadas o poco organizadas. El objetivo de esta movilización estratégica de las masas es obtener y/o ampliar el poder político del líder personalista (Weyland).

Mi primer argumento en esta investigación ha sido que el movimiento populista bolivariano en su momento de emergencia no fue tal ni por ser un estilo político ni por implicar una estrategia determinada de su dirigencia, sino porque siguió una determinada *lógica política* (Laclau). Dicha lógica se puede descomponer, analíticamente, en tres dimensiones principales: 1) una multiplicidad de demandas insatisfechas locales y dispersas; 2) la conformación, mediante instancias articuladoras, de una demanda central con alcance nacional y concentrado; y 3) el antagonismo.

A lo largo de mi exposición, he considerado a estas tres dimensiones como los principales indicadores de la existencia o no de una lógica populista en el movimiento bolivariano.

La definición del populismo como lógica tiene al menos dos fortalezas en comparación con las otras definiciones disponibles: 1) es una definición más precisa que la definición de *populismo como estilo*; y 2) evita, al incorporar la dimensión de las demandas insatisfechas de base, la noción de las masas como meros instrumentos del líder implícita en la definición del *populismo como estrategia*, así como también impide un análisis del fenómeno hecho exclusivamente “desde arriba” (tal y como se deriva de este mismo enfoque).

En cuanto a la segunda pregunta, la literatura que ha estudiado el caso de Venezuela afirma que lo que explica la emergencia del movimiento bolivariano es: 1) la crisis económica de los ochenta; y/o 2) la crisis del sistema de partidos. La literatura sobre los populismos en general insiste, del mismo modo, en las condiciones

estructurales como dimensiones explicativas principales del surgimiento de los movimientos populistas: las crisis estructurales de tipo económico y político (Roberts), las crisis de legitimidad de los regímenes políticos (Taguieff), la estructura del capitalismo periférico (Mouzelis) o las fracturas institucionales (Laclau).

Mi segundo argumento en esta investigación ha sido que, por el contrario, ni la crisis económica ni la crisis del sistema de partidos pueden explicar por sí mismas la emergencia del movimiento: para que tales crisis pudieran dar lugar al movimiento, algunos grupos presentes en la coyuntura tuvieron que *movilizar los recursos* que tenían a su disposición para poder actuar (McAdam, Tarrow, Tilly). El resultado fue la emergencia del movimiento bolivariano. Por decirlo de otra manera, el argumento que se ha presentado aquí es que *sin movilización y organización no habría populismo*.

Aunque muchos autores afirman que el populismo es un tipo de movilización política, no han extraído todas las consecuencias implicadas en esta idea. En efecto, desde el punto de vista de la movilización, tanto la crisis económica como la crisis política constituyeron una *nueva estructura de oportunidades políticas* que diferentes grupos sociales y políticos podían (o no) aprovechar para promover sus proyectos. En el contexto de las nuevas oportunidades abiertas, tales grupos tuvieron que *movilizar los recursos* que tenían a su disposición para poder aprovecharlas. Lo harían con un grado variable de éxito y esto dependería, precisamente, de su mayor o menor capacidad de control de recursos. En este sentido, no fueron las crisis económicas y políticas las que pueden explicar -por sí mismas y de un modo exclusivo- la emergencia del movimiento bolivariano, sino que éstas conformaron ciertas oportunidades políticas que – complementariamente- serían o no aprovechadas por algunos grupos organizados mediante la movilización de recursos.

Por esta razón, esta investigación, a diferencia de otras investigaciones, ha intentado analizar el vínculo entre *movilización* y *populismo*. De esta manera, he argumentado que los recursos de movilización son un elemento central –y a menudo descuidado- en la explicación de la emergencia de los movimientos populistas en general, así como del movimiento populista bolivariano en particular.

A mi juicio, una de las principales ventajas de la aproximación analítica desde el punto de vista de los recursos del movimiento es que permite proponer respuestas a preguntas centrales que la literatura no plantea, o plantea pero no responde, o asume como respondidas sin siquiera plantearlas. Entre ellas están: ¿Por qué algunos grupos con pretensiones de articular demandas sociales tuvieron éxito y otros no? ¿Por qué el movimiento bolivariano tuvo un componente militarista importante? ¿Por qué aparece como característica del movimiento una retórica nacional-popular? ¿Qué lugar ocuparon las organizaciones de base –en un sentido amplio- en la conformación del movimiento? ¿Qué importancia tuvo el liderazgo de Chávez Frías en la articulación de las demandas sociales y cuál fue su papel en la organización del movimiento?

Del mismo modo, el énfasis en la movilización de recursos permite atender a una dimensión que no suele ser tomada en cuenta respecto de los populismos: la *dimensión organizativa*. Incluso los autores que consideran que los movimientos populistas tienen, entre otras cosas, un componente organizativo que los define, presuponen un tipo de organización específica: una organización vertical (Mouzelis), una estructura que se organiza desde arriba hacia abajo (Roberts) o la centralidad organizativa del líder político (Laclau).

El capítulo I ha desarrollado, desde el punto de vista del marco analítico, las ideas relativas a las dos preguntas de investigación. Allí se contrastaron, por una parte, la literatura que analiza el populismo en términos de estilo o de estrategia con la tesis

del *populismo como lógica política*. Por otra parte, se discutieron y contrapusieron las explicaciones estructurales de la emergencia de los movimientos populistas con la literatura sobre la *movilización de recursos*.

En síntesis, en función de sus interrogantes principales, esta investigación ha analizado la movilización populista tanto desde su *lógica* como desde sus *recursos*. La tesis *contra* la que este trabajo ha argumentado es la siguiente: *El movimiento político bolivariano es un movimiento neopopulista –sea por su estilo, sea por su estrategia–, surgido por ciertas condiciones estructurales –sean económicas, sean políticas*.

Por el contrario, el argumento central ha sido el que expongo a continuación.

Primero. El movimiento político bolivariano es, ciertamente, una movilización populista. En cuanto *populista*, en su emergencia siguió una cierta *lógica política* mediante la cual un conjunto de demandas sociales –en una primera instancia, locales y dispersas–, que permanecían como insatisfechas por el Estado, fueron articuladas políticamente en torno a algunas demandas centrales, un liderazgo y un nuevo movimiento o partido. Además, a lo largo de todo el proceso hubo antagonismos sociales y políticos en todos los niveles.

Las demandas de base no satisfechas, colocadas muchas de ellas dentro de un ciclo de movilización, provinieron principalmente de los siguientes sectores sociales: grupos de vecinos demandando servicios básicos; ex funcionarios de la administración pública demandando cobertura social ante los despidos por recortes presupuestarios; agrupaciones de pensionistas demandando el cumplimiento de acuerdos colectivos en materia de seguridad social y algunas promesas políticas; movimientos estudiantiles demandando mejores condiciones en escuelas y universidades, así como mejores perspectivas de empleo en el mercado de trabajo; trabajadores de la economía informal demandando mejores condiciones de trabajo; movimientos sindicales de base –sobre

todo, de la industria textil y siderúrgica- demandando democracia sindical y ampliación de las políticas sociales.

En general, durante el gobierno de Pérez (1989-1993), destacaron tres grandes demandas: 1) la paralización de la nueva política económica (demanda que comenzó con *El caracazo*); 2) la no utilización de las Fuerzas Armadas para objetivos represivos (demanda que fue una de las justificaciones de los alzamientos militares de 1992); y 3) la renuncia de Pérez.

Todos estos elementos fueron el tema del capítulo II.

Los grupos que pretendieron articular políticamente a estas demandas insatisfechas de base fueron La Causa R (LCR) y el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). Estas dos agrupaciones políticas, en tanto que instancias de articulación de demandas, fueron analizadas en el capítulo III.

Segundo. Si en cuanto *populista* el movimiento bolivariano siguió una determinada lógica política, en cuanto *movilización* su emergencia no puede ser explicada exclusivamente en términos de las condiciones estructurales de orden económico y político –aunque éstas tuvieran sin duda un impacto- presentes en el período estudiado, sino también por la capacidad de ciertos grupos de movilizar los recursos retóricos y organizativos que controlaban con el objeto de aprovechar las nuevas oportunidades políticas que tales condiciones abrían.

De esta manera, tanto en las demandas de base movilizadas (analizadas en el capítulo II), como en los grupos que se convirtieron en instancias de articulación política de demandas (analizados en el capítulo III), se consideraron sus recursos de movilización disponibles.

El microanálisis de las formas de articulación populista, concentrado en la comparación entre los recursos retóricos y organizativos controlados por LCR y el MBR-200, permite arrojar los siguientes resultados.

1) En primer lugar, los *radicales* nunca se transformaron de un movimiento local en un movimiento nacional. Sus propios recursos retóricos, concentrados en demandas específicas y sobre todo obreras (el *nuevo sindicalismo*), les impidieron consolidar su expansión. Tanto las estrategias como las tácticas de LCR eran variables y dependían del “movimiento” al que los *radicales* estuvieran vinculados en cada caso. En la medida en que el único “movimiento” en el que realmente tenían una base de apoyo consolidada era el movimiento sindicalista de *matancero* en el estado Bolívar, su expansión nacional fue más bien frágil. Por la propia historia de su conformación como grupo y partido, LCR evitó la asunción de una estrategia amplia y de alcance nacional, y tampoco elaboró un marco de sentido en el que pudieran incluirse los sectores no obreros dispersos por otras regiones.

Los *bolivarianos*, por su parte, no provenían de la política regional sino de la agrupación cívico-militar que en febrero de 1992 intentó derrocar al gobierno de Pérez. Habían elaborado un cierto marco retórico en el que inscribir su programa y éste consistía, básicamente, en lo siguiente: a) la apelación a significantes nacionales –la *nación*- vinculados a la historia de la conformación del Estado nacional venezolano; y b) la interpelación a los sectores populares –el *pueblo*- cuyas demandas no estaban siendo satisfechas por el Estado. Para captar esta dualidad, he calificado a esta retórica como retórica *nacional-popular*. Resulta importante destacar que tal retórica estaba presente no sólo en la doctrina del MBR-200 sino también en los marcos de acción de los grupos movilizados durante el ciclo de protestas abierto por *El caracazo* –todos ellos independientes del MBR-200-. Además, a lo largo de todo su itinerario como grupo,

fueron forjando la postura estratégica de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con carácter popular para relegitimar un régimen político que los *bolivarianos* juzgaban deslegitimado o ilegítimo dados sus rasgos oligárquicos (o partidistas). Aunque los contenidos concretos de la “refundación de la República” mediante el proceso constituyente variaron con el tiempo y no siempre fueron especificados, la demanda constituyente era un modo de oponer el *pueblo* a los *cogollos* e introducir la idea de que era necesario incorporar el conjunto de demandas sociales insatisfechas por el Estado en un nuevo régimen político. En este sentido, la demanda constituyente era básicamente una *demanda de incorporación de demandas*.

2) En segundo lugar, a diferencia de los miembros del MBR-200, los *radicales* no mantuvieron a lo largo del proceso una voluntad de hegemonizar o articular políticamente demandas sociales en un nivel nacional. LCR, a pesar de su expansión electoral en el período de estudio, siguió siendo un *movimiento de movimientos*, con una base social densa pero restringida a un nivel regional. Cuando la base social de apoyo que los *radicales* habían acumulado comenzó a restringirse electoralmente –en particular, a partir de 1995-, no introdujeron ningún cambio en su táctica de articulación y retrocedieron hacia sus bases obreristas regionales. Es decir, cuando hubo una colisión entre los objetivos políticos y los objetivos sociales de la agrupación, los *radicales* optaron por abandonar la lucha política nacional.

Los *bolivarianos*, por el contrario, que desde su encarcelamiento en 1992 hasta 1997 habían mantenido la política de abstención como táctica –al menos una parte importante de su dirigencia-, cuando las coyunturas cambiaron y consideraron que el llamado a la abstención no estaba funcionando como método para promover su estrategia, abrieron la “ventana táctica” de la competencia electoral. En todo caso, nunca abandonaron la demanda constituyente. En este sentido, mantuvieron su voluntad

de articular demandas sociales de sectores más amplios, incluso mostrándose dispuestos a llevar a cabo cambios tácticos para lograr los mismos objetivos políticos que se habían planteado.

3) En tercer lugar, los *bolivarianos* tenían un elemento organizativo central del que carecía la dirigencia colegiada o de cuadros de LCR: un líder político con alcance nacional, el teniente coronel Chávez Frías. Velásquez, el principal dirigente de los *matanceros* y LCR, candidato presidencial en 1993, no tenía la misma proyección y, en verdad, compartía su posición de liderazgo con otros políticos en un mismo nivel.

En este sentido, los recursos de movilización determinantes en la expansión del movimiento bolivariano dentro de las oportunidades políticas que se habían abierto por la crisis económico-política para nuevos grupos –como LCR y el MBR-200- fueron cuatro: [1] la permanencia de una voluntad de articular políticamente (o hegemonizar) amplias demandas sociales; [2] la apelación retórica a significantes nacional-populares; [3] la estructuración de una demanda política articuladora y antagónica (la demanda constituyente); y [4] la presencia de un líder con alcance nacional.

La mayor o menor organización partidista no aparece como un elemento crucial, en la medida en que la organización de masas que pretendió ser el MBR-200 sólo pudo ampliarse a partir de 1994, año en el la dirigencia del movimiento salió de la cárcel y comenzó a vincularse con sectores sociales a nivel nacional. Además, este proceso organizativo fue interrumpido, de alguna manera, en 1997, fecha en la que los *bolivarianos* cambiaron la táctica abstencionista defendida hasta entonces y se incorporaron a la competencia electoral. Por el contrario, aunque sus mecanismos internos eran a menudo informales, los *radicales* formaban parte de una agrupación fundada en 1971, convertida en partido político a finales de esa década, con una amplia experiencia organizativa. Si la organización partidista fuera determinante, cabría pensar

que los *radicales* habrían tenido mejores resultados. En cualquier caso, por principios o por necesidad, ni LCR ni el MBR-200 eran partidos políticos institucionalizados.

Como señalé en el capítulo I, la literatura que incorpora la dimensión organizativa dentro del análisis de la movilización populista elabora algunas tipologías para ubicar a los distintos procesos políticos empíricos. Así, dentro de la tipología de Roberts, el movimiento populista bolivariano emergente podría ser considerado como un *populismo electoral*, en la medida en que el nivel de organización partidista del MBR-200 era más bien bajo, así como era bajo también el nivel de organización de los sectores de sociedad civil con los que el movimiento pretendía vincularse. En cuanto a la clasificación de Mouzelis, el movimiento populista bolivariano entraría en el tipo de organización propio de los *movimientos plebiscitarios* que incorporan a las bases populares de una manera vertical y heterónoma.

En este sentido, la movilización populista en Venezuela, en su momento de emergencia, podría ser clasificada, en cuanto a su organización, como una organización electoral-plebiscitaria. Como es evidente, se trata de tipos ideales, por lo que en los procesos efectivos los tipos aparecen mezclados. Pero, en cualquier caso, los resultados de esta investigación, al menos en principio, no se oponen a esta clasificación y, al menos hasta cierto punto, la confirman. No obstante, los resultados obtenidos también permiten complejizar sus dimensiones y contestar algunos de sus presupuestos.

En efecto, como señalé en el capítulo II, la emergencia del movimiento bolivariano tuvo lugar en el contexto de amplios procesos de movilización de grupos diferentes y de una proliferación de demandas específicas. He intentado mostrar que, a pesar de la agregación de masas que fue *El caracazo*, tales recursos existieron a lo largo de los grupos movilizados. Sin alguna densidad en los recursos retóricos y organizativos disponibles de estos grupos, tales movilizaciones no habrían sido posibles. De esta

manera, antes de la emergencia del MBR-200 como agrupación política nacional, había una cierta densidad organizativa en las bases movilizadas a partir de 1989.

Por otra parte, si tal densidad organizativa podría ser considerada como baja, dicho nivel formaba parte de las condiciones sociales que los *bolivarianos* en el momento de su aparición como grupo, tanto en la insurrección de 1992 como tras la salida de prisión en 1994, encontraron como dadas. Es decir, no formó parte del programa político del MBR-200 debilitar las organizaciones de base de los sectores sociales en los que buscaba apoyo. Por el contrario, los datos indican que los *bolivarianos* no sólo tenían una organización propia, sino que también proyectaron desde el principio –en su concepto de la unidad cívico-militar- organizar a los sectores sociales no organizados y vincularse con los sectores organizados.

En cuanto a la organización vertical (Mouzelis) y estructurada siempre de arriba hacia abajo (Roberts) que caracterizaría a las movilizaciones populistas, los resultados de esta investigación apuntan al reconocimiento de que la emergencia del movimiento populista bolivariano -en la *lógica* de su proceso y en los *recursos* que controlaba- fue *al mismo tiempo* tanto una movilización organizada “desde arriba” como “desde abajo”. De tal manera, si cabe afirmar que hacia 1998 los trabajos organizativos del MBR-200 se interrumpieron para dar lugar a una plataforma electoral bajo una candidatura presidencial, este cambio táctico en contra de las decisiones que la dirigencia bolivariana había tomado previamente y por varios años muestra que la organización vertical de los *bolivarianos* tuvo –al menos en aquella ocasión- dos direcciones: una de arriba hacia abajo, pero también otra de abajo hacia arriba.

Por último, he señalado que, a diferencia de los *radicales*, los *bolivarianos* contaban con un recurso organizativo que, a la postre, sería determinante en su emergencia: el liderazgo de Hugo Chávez. Sin embargo, una de las principales

conclusiones de esta investigación es que el predominio del líder como recurso organizativo y punto articulador no equivale a exclusividad. En efecto, el liderazgo de Chávez, que era en sí mismo un recurso retórico-organizativo, estuvo siempre mediado por un conjunto más amplio de retóricas y organizaciones.

Todos estos elementos, relativos a la *lógica* y a los *recursos* del movimiento populista, tienen algunas implicaciones en el caso venezolano. El análisis de las bases retóricas y organizativas del movimiento bolivariano en su momento de emergencia permite comprender, al menos en parte, algunas de las dinámicas que siguió el movimiento una vez que pudo controlar el poder político tras las elecciones de 1998. En efecto, tales bases, en la medida en que existían y tenían alguna densidad, fueron las que hicieron posible la permanencia del gobierno bolivariano en los años posteriores. La permanencia, ciertamente, no ha sido sólo electoral –aunque las sucesivas victorias electorales hayan sido, sin duda, un elemento determinante- sino también política en términos generales: ciertamente, las bases organizadas fueron uno de los factores principales en la movilización popular que impidió el mantenimiento del gobierno *de facto* conducido por el empresario Pedro Carmona Estanga tras el golpe de Estado de abril de 2001.

Por otra parte, el análisis de los movimientos populistas desde el punto de vista de sus bases hace posible concebir que el argumento que he presentado en las páginas anteriores podría ser extendido a otros casos y es susceptible de estudios que sigan el método comparativo.⁷⁷ De especial interés desde el punto de vista de la retórica y la organización de las bases resultan los casos del movimiento cívico dirigido por Rafael Correa en Ecuador y el movimiento indígena-campesino liderado por Evo Morales en Bolivia. Las dimensiones que he señalado en este trabajo podrían constituir un marco

⁷⁷ Para un recuento de posibles casos, véase Cheresky (2007) y Moreira *et al.* (2008).

propicio para estudiar las condiciones de emergencia de dichos movimientos, la densidad organizativa de las bases, los distintos patrones de movilización, las variantes de las retóricas nacional-populares y, finalmente, la posición de los liderazgos.

Bibliografía

Aboy Carlés, Gerardo (2004), “Repensando el populismo”, en VVAA, *Releer los populismos*, Quito, Centro Andino de Acción Popular.

Aibar, Julio (2007), “La miopía del procedimentalismo y la presentación populista del daño”, en Julio Aibar Gaete, (coord.), *Vox populi. Populismo y democracia en Latinoamérica*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -México.

Álvarez, Ángel (2003), “La reforma del Estado antes y después de Chávez”, en Steve Ellner y Daniel Hellinger, (ed.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.

Arvelo Ramos, Alberto (1998), *El dilema del chavismo: una incógnita en el poder; ensayos políticos para personas que detestan a los políticos*, Caracas, Ediciones José Agustín Catalá.

Bergquist, Charles (1988), *Los trabajadores en la historia latinoamericana: estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia*, México, Siglo XXI.

Bobbio, Norberto (1997), “Populismo latinoamericano”, en *Diccionario de política*, México, Siglo XXI.

Borón, Atilio (2000), *Tras el búho de Minerva: mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*, México, Fondo de Cultura Económica.

Britto García, Luis (1989), *El poder sin la máscara: de la concertación populista a la explosión social*, Caracas, Alfadil.

Burbano de Lara, Felipe, (ed.), (1998), *El fantasma del populismo: aproximación a un tema (siempre) actual*, Caracas, Nueva Sociedad.

Buxton, Julia (2001), *The Failure of Political Reform in Venezuela*, Ashgate, Aldershot.

_____ (2005), “Venezuela’s Contemporary Political Crisis in Historical Context”, en *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 24, Num. 3, pp. 328-347.

Caballero, Manuel (1978), *La Internacional Comunista y América Latina: la sección venezolana*, México, Pasado y Presente.

Canache, Damaris (2002), “From Bullets to Ballots: The Emergence of Popular Support for Hugo Chávez”, en *Latin American Politics and Society*, Vol. 44, Num. 1, pp. 69-90.

Chávez, Hugo (2002), “Entrevista”, en Marta Harnecker, *Hugo Chávez Frías: un hombre, un pueblo*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

_____ (2004a), “Conversaciones”, en Heinz Dieterich, *Hugo Chávez: el destino superior de los pueblos latinoamericanos*, Caracas, Instituto Municipal de Publicaciones de la Alcaldía de Caracas.

_____ (2004b), “Soy sencillamente revolucionario”, en Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, *Chávez nuestro*, La Habana, Casa Editora Abril.

Carrera Damas, Germán (2005), *El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de reemplazo*, Caracas, Ala de Cuervo.

Cheresky, Isidoro, (comp.), (2007), *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina*, Buenos Aires, Manantial.

Combellas, Ricardo (2007), “El proceso constituyente y la Constitución de 1999”, en Günther Maihold, (ed.), *Venezuela en retrospectiva: los pasos hacia el régimen chavista*, Madrid-Frankfurt, Editorial Iberoamericana.

Coppedge, Michael (2005), “Venezuela: soberanía popular *versus* democracia liberal”, en Jorge Domínguez y Michael Shifter, (eds.), *Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica.

Coronil, Fernando y Julie Skurski (1991), “Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela”, en *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 33, Num. 2, pp. 288-337.

Dávila, Luis Ricardo (1991), *La democracia venezolana. Orígenes ideológicos y sociales*, Mérida, Universidad de Los Andes.

_____ (1995), *L’imaginaire politique vénézuélien. Les lieux de paroles*, París, L’Harmattan – Alfadil.

Del Naranco, Rafael y Carlos Capriles Ayala (1992), *Todos los golpes a la democracia venezolana*, Caracas, Consorcio de Ediciones Capriles.

Dussel, Enrique (2001), “Pueblo y hegemonía. Una conversación con Ernesto Laclau”, en Enrique Dussel, *Hacia una filosofía política crítica*, Bilbao, Desclée de Brouwer.

Ellner, Steve y Daniel Hellinger, (ed.), (2003), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.

Ellner, Steve (1989), *De la derrota guerrillera a la política innovadora. El Movimiento al Socialismo (MAS)*, Caracas, Monte Ávila Editores.

_____ (1995), *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático (1958-1994)*, Caracas, Tropycos.

García-Guadilla, María Pilar (2003), “Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía”, en Steve Ellner y Daniel Hellinger, (ed.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.

Garrido, Alberto, (comp.), (2000), *La historia secreta de la Revolución Bolivariana*, Mérida, Ediciones del Autor.

_____, (comp.), (2002), *Documentos de la Revolución Bolivariana*, Caracas, Ediciones del Autor.

Geras, Norman (1987), “Post-Marxism?”, en *New Left Review*, Vol. 1, Num. 163, mayo-junio, pp. 40-82.

_____, (1988), “Ex-Marxism Without Substance: Being a Real Reply to Laclau and Mouffe”, en *New Left Review*, Vol. 1, Num. 169, mayo-junio, pp. 34-61.

Gómez Calcaño, Luis (1985), *Los movimientos sociales en Venezuela ante la crisis*, Lima, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Grindle, Merilee (2000), *Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America*, Baltimore, John Hopkins University.

Hellinger, Daniel (1995), “The Causa R and The *Nuevo Sindicalismo* in Venezuela”, en *Latin American Perspectives*, Vol. 23, Num. 3, pp. 110-131.

Hermet, Guy (2001), *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, México, El Colegio de México – Centro de Estudios Internacionales.

Howarth, David y Aletta Norval (2001), “Political Frontiers”, en Paul Barry Clarke y Joe Foweraker, (ed.), *Encyclopedia of Democratic Thought*, Nueva York, Routledge.

Knight, Alan (1998), “Populism and Neopopulism in Latin America. Especially Mexico”, en *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, Num. 2, mayo, pp. 223-248.

Kornblith, Miriam (2004), “Situación y perspectivas de los partidos políticos en la Región Andina: caso Venezuela”, en IDEA, *Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio*, Lima.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (1987), “Post-Marxism Without Apologies”, en *New Left Review*, Vol. 1, Num. 166, noviembre-diciembre, pp. 79-106.

_____, (2004), *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Laclau, Ernesto (2001), “Hegemony”, en Paul Barry Clarke y Joe Foweraker, (eds.), *Encyclopedia of Democratic Thought*, Nueva York, Routledge.

_____, (2005), “Populism: What’s in a name?”, en Francisco Panizza, (ed.), *Populism and the Mirror of Democracy*, Londres, Verso.

_____, (2006a), *La razón populista*, México, Fondo de Cultura Económica.

_____, (2006b), “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en *Nueva Sociedad*, Num. 205, septiembre-octubre, pp. 56-61.

Lazarte, Jorge (1999), "Partidos políticos e informalización de la política", en María Mackinnon y Mario Petrone, (comp.), *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA.

López Maya, Margarita y Luis Gómez Calcaño (1990), *El tejido de Penélope: la reforma del Estado en Venezuela (1984-1988)*, Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo.

López Maya, Margarita (1989), "Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985", en Margarita López Maya, Luis Gómez Calcaño y Thais Maingon, *De Punto Fijo al pacto social*, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

_____ (1997), "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)", en Margarita López Maya, (ed.), *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad.

_____, (coord.), (2002), *Protesta y cultura en Venezuela, los marcos de acción colectiva en 1999*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.

_____ (2005), *Del viernes negro al referendo revocatorio*, Caracas, Alfadil.

Lucena, Tibisay (2003), "Las reformas del sistema electoral venezolano y sus consecuencias políticas: 1988-1998", en *Revista ALCEU*, Vol. 3, Num. 6, enero-junio, pp. 245-265.

Mackinnon, María y Mario Petrone (1999), "Los complejos de la cenicienta", en María Mackinnon y Mario Petrone, (comp.), *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA.

Marchart, Oliver (2008), "La política y la diferencia ontológica. Acerca de lo estrictamente filosófico en la obra de Laclau", en Simon Critchley y Oliver Marchart, (ed.), *Laclau: aproximaciones críticas a su obra*, Argentina, Fondo de Cultura Económica.

Maingon, Thais, Carmen Pérez Baralt y Heinz Sonntag (2000), "La batalla por una nueva Constitución para Venezuela", *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 62, Num. 4, octubre-diciembre, pp. 91-124.

Maingon, Thais (2007), "Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de partidos en Venezuela", en Günther Maihold, (ed.), *Venezuela en retrospectiva: los pasos hacia el régimen chavista*, Madrid-Frankfurt, Editorial Iberoamericana.

McAdam, Doug (1982), *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*, Chicago, Universidad de Chicago.

Mény, Yves y Yves Surel (2000), *Par le peuple, pour le peuple: le populisme et les démocraties*, París, Fayard.

Moreira, Carlos, Diego Raus y Juan Carlos Gómez Leyton, (coord.), (2008), *La nueva política en América Latina: rupturas y continuidades*, Montevideo, Ediciones Trilce.

Mouzelis, Nicos (1985), "On the Concept of Populism: Populist and Clientelist Modes of Incorporation in Semiperipheral Polities", en *Politics and Society*, Num. 14, pp. 329-348.

_____ (1988), "Marxism or Post-Marxism?", en *New Left Review*, Vol. 1, Num. 167, enero-febrero, pp. 107-123.

Norden, Deborah (1996), "The Rise of the Lieutenant Colonels: Rebellion in Argentina and Venezuela", en *Latin American Perspectives*, Vol. 23, Num. 3, pp. 74-86.

_____ (1998), "Democracy and Military Control in Venezuela: From Subordination to Insurrection", en *Latin American Research Review*, Vol. 33, Num. 2, pp. 143-165.

Ojeda, William (1993), *Las verdades del 27-N*, Caracas, Vadell Hermanos Editores.

Orsini, Paula (2007), "La demanda social y los límites de lo heterogéneo", en Paula Biglieri y Gloria Perelló, (eds.), *En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*, Argentina, Universidad Nacional de General San Martín.

Panizza, Francisco (2008), "Fisuras entre populismo y democracia en América Latina", en Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti, (ed.), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador.

Portantiero, Juan Carlos (1991), "Gramsci en clave latinoamericana", en *Nueva Sociedad*, Num. 115, Septiembre-Octubre, pp. 152-157.

Rancière, Jacques (1996), *El desacuerdo: política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Roberts, Kenneth (1999), "El neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso peruano", en María Mackinnon y Mario Petrone, (comp.), *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA.

_____ (2003a), "Social Correlates of Party System Demise and Populist Resurgence in Venezuela", en *Latin American Politics and Society*, Vol. 45, Num. 3, otoño, pp. 35-57.

_____ (2003b), "Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela", en Steve Ellner y Daniel Hellinger, (ed.), (2003), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.

_____ (2006), “Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America”, en *Comparative Politics*, Vol. 38, Num. 2, pp. 127-148.

_____ (2008), “El resurgimiento del populismo latinoamericano”, en Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti, (eds.), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, Quito, FLACSO-Ecuador.

Rodríguez Valdés, Ángel (1992), *Los rostros del golpe*, Caracas, Alfadil.

Salamanca, Luis (1997), “Protestas venezolanas en el segundo gobierno de Rafael Caldera: 1994-1997”, en Margarita López Maya, (ed.), *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad.

Sanz, Rodolfo (2004), *Diccionario para uso de chapistas, chavólogos y antichavistas*, Caracas, Nuevo Pensamiento Crítico.

Sartori, Giovanni (1976), *Parties and Party System: a Framework for Analysis*, Cambridge, Universidad de Cambridge.

Stavrakakis, Yannis (2001), “Political Identity”, en Paul Barry Clarke y Joe Foweraker, (eds.), *Encyclopedia of Democratic Thought*, Nueva York, Routledge.

Taguieff, Pierre-André (1995), “Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real Problem”, en *Telos*, Num. 103, pp. 9-43.

_____ (2007), *L'illusion populiste: essai sur les démagogies de l'âge démocratique*, París, Ediciones Flammarion.

Tarrow, Sidney (1997), *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza Editorial.

Tilly, Charles (1978), *From Mobilization to Revolution*, Nueva York, Random House.

Torfin, Jacob (1999), *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek*, Massachusetts, Blackwell.

Walton, John (1989), “Debt, Protest, and State in Latin America”, en Susan Eckstein, *Power and Popular Protest*, Los Ángeles, Universidad de California.

Weyland, Kurt (2001), “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, en *Comparative Politics*, Vol. 1, Num. 34, pp. 1-23.

Zago, Ángela (1992), *La rebelión de los ángeles*, Caracas, Fuentes Editores.

Zermeño, Sergio (1999), “El regreso del líder”, en María Mackinnon y Mario Petrone, (comps.), *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta*, Buenos Aires, EUDEBA.

Zizek, Slavoj (1992), *El sublime objeto de la ideología*, México, Siglo XXI.